



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9^a REUNIÓN – 3^a SESIÓN ORDINARIA
22 DE MARZO DE 2000

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado CARLOS A. ÁLVAREZ

Secretarios:

Señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor RICARDO MITRE y señor JUAN C. OYARZÚN

Prosecretarios:

Señor ALEJANDRO L. COLOMBO, doctora VII MA IBARRA y señor RODOLFO BERNARDINI



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ALASINO, Augusto
 ALTUNA, Juan C.
 ANGELOZ, Eduardo C.
 ARNOLD, Eduardo A.
 BAUM, Daniel
 BAUZÁ, Eduardo
 BRANDA, Ricardo A.
 CABANA, Fernando V.
 CAFIERO, Antonio F.
 CANTARERO, Emilio Marcelo
 CARBONELL, José F.
 CORACH, Carlos Vladimiro
 COSTANZO, Remo J.
 DE LA ROSA, Carlos L.
 DEL PIERO, Pedro
 DI PIETRO, Arturo R.
 GAGLIARDI, Edgardo
 GALVÁN, Raúl A.
 GENOUD, José
 GIOJA, José L.
 HUMADA, Julio C.
 LEÓN, Luis A.
 LÓPEZ, Alcides H.
 LOSADA, Mario A.
 MAGLIETTI, Alberto R.
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
 MASSACCESI, Horacio
 MASSAT, Jorge
 MAYA, Héctor M.
 MELGAREJO, Juan I.
 MENEGHINI, Javier R.
 MENEM, Eduardo
 MIKKELSEN-LÓTH, Jorge F.
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.

MOREAU, Leopoldo R. G.
 ORTEGA, Ramón B.
 OUDÍN, Ernesto
 PALACIOS, Gerardo L.
 PARDO, Angel F.
 PRETO, Ruggero
 PRUYAS, Tomás R.
 RAIJER, Beatriz I.
 RODRÍGUEZ, Manuel A.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto
 ROMERO, Marcelo J.
 ROMERO FERIS, José A.
 ROSTAN, Néstor D.
 SÁEZ, José María
 SAGER, Hugo Abel
 SALA, Osvaldo R.
 SALUM, Humberto E.
 SAN MILLÁN, Julio A.
 SAPAG, Felipe R.
 SAPAG, Silvia E.
 SERGNESE, Carlos J. A.
 TELL, Alberto Máximo
 ULLOA, Roberto Augusto
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VAQUIR, Omar M.
 VARIZAT, Daniel A.
 VERNA, Carlos Alberto
 VILLARROEL, Pedro G.
 VILLAYERDE, Jorge A.
 YOMA, Jorge R.
 ZALAZAR, Horacio Aníbal

AUSENTES. CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
 GARCÍA ARECHIA, José M.

SUMARIO

1. Izamiento de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 1023.)
2. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración** de los señores senadores **Pruyas y Raijer** por el que se repudia el **golpe militar** del 24 de marzo de 1976 (S.-273 y 303/00). Se aprueba. (Pág. 1023.)
3. **Asuntos entrados:**
 - I. **Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.** (Pág. 1024.)
 - II. **Comunicaciones de la Presidencia de la Nación.** (Pág. 1024.)
 - III. **Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.** (Pág. 1025.)
 - IV. **Comunicaciones de comisiones.** (Página 1025.)

- V. **Comunicaciones de señores senadores.** (Pág. 1025.)
- VI. **Comunicaciones oficiales.** (Página 1026.)
- VII. **Dictámenes de comisiones.** (Página 1027.)
- VIII. **Peticiones particulares.** (Pág. 1028.)
- IX. **Proyecto de comunicación** del señor senador **Arnold** por el que se solicita la **construcción** de una **línea de alta tensión** entre **Puerto Madryn** y **Pico Tuncado** (S.-200/00. (Pág. 1028.)
- X. **Proyecto de comunicación** del señor senador **Romero** por el que se solicita la **adopción** de **medidas** para paliar las **consecuencias** de las **inundaciones** en **Tucumán, Santiago del**

51. **Cuestión de privilegio** planteada por el señor senador **Rodríguez Saá**. (Pág. 1220.)
52. **Cuestión de privilegio** planteada por el señor senador **Yoma**. (Pág. 1222.)
53. Continuación de la **consideración del dictamen** de las comisiones de **Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios**, de **Drogadicción y Narcotráfico**, de **Economía y de Presupuesto y Hacienda** en el **proyecto de ley en revisión** y en los de **ley** de los señores senadores **Humada** y **Berhongaray**, por los que se establece un **régimen penal** para el **blanqueo de activos** provenientes de **ilícitos** (C. D.-101/99 y S.-786 y 986/98) Se aprueba. (Pág. 1213.)
54. **Apéndice:**
- I. **Sanciones del Honorable Senado**. (Pág. 1295.)
 - II. **Inserción**. (Pág. 1304.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 51 del miércoles 22 de marzo de 2000:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por el Neuquén don Daniel Baum a izar la bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Baum procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

REPUDIO DEL GOLPE MILITAR DE 1976

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada hoy se acordó como primer punto del temario una declaración de repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Por Secretaría se va a dar lectura al proyecto de declaración.

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (*Lee:*) Texto unificado del proyecto de declaración del señor senador Pruyas y de la señora senadora Raijer.

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación

DECLARA:

Que ratifica su permanente defensa de la Constitución Nacional, al par que expresa su repudio y recha-

zo al golpe militar del 24 de marzo de 1976, que interrumpió la continuidad democrática e institucional en nuestro país e instaló una de las más sangrientas dictaduras registradas en Latinoamérica, dejando dolor y angustia en muchas familias del pueblo argentino y una sociedad fragmentada dueña de una profunda herida en su historia más reciente.

Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en general el proyecto de declaración.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: muy brevemente quiero decir, y lo hago con mucho respeto por este cuerpo, que me hubiese gustado que como parte del repudio al golpe de Estado genocida del 24 de marzo del 76 esta Cámara hubiera rechazado la semana pasada el ascenso a los militares cuestionados por haber lesionado los derechos humanos. No estuve presente entonces y quiero dejar absolutamente en claro que si lo hubiera estado, hubiera votado por el rechazo.

Lamentablemente, esta declaración de repudio a veces no se condice con los hechos que producimos los hombres de la democracia.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se hizo llegar la lista de asuntos entrados. Corresponde ahora que los señores senadores hagan las consideraciones respectivas.

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (*Lee:*) Fojas número 1, 2 y 3. Las fojas 4, 5 y 6 son respu-

investía del carácter de senador la mera aprobación del diploma. Gracias a que la Cámara aceptó esta doctrina se aprobaron los diplomas de senadores de los hermanos Rodríguez Saá por San Luis, y del doctor Carlos Arturo Juárez y su suplente por Santiago del Estero.

Luego se realizaron las elecciones en las que triunfaron el gobernador Juárez nuevamente en su provincia, al igual que el gobernador Rodríguez Saá en San Luis. El gobernador Juárez renunció ante la Legislatura de su provincia, en un todo de acuerdo con la doctrina que había sustentado el Senado de que no era senador y, por ende, debía renunciar ante la Legislatura de su provincia y no ante la Cámara de Senadores. También renunció su suplente ante la Legislatura de su provincia y comunicaron al Senado, juntamente con la nueva nominación de la Asamblea Legislativa, quienes iban a ocupar esas bancas.

Este fue el criterio aceptado por este cuerpo —esa fue la sencilla razón, y no operaciones de mi parte ni nada que se le parezca—, que fue votado por unanimidad por esta Cámara de Senadores, rechazando la renuncia. Es más, textualmente dice la Cámara de Senadores por unanimidad que “por improcedente” se rechaza la renuncia del gobernador Rodríguez Saá porque, reitero, en el caso de Santiago del Estero se renunció ante la Legislatura de esa provincia por el criterio de que no eran senadores en funciones.

Luego vinieron impugnaciones al diploma del suplente. El Senado y la comisión aceptaron la teoría de que no habiendo titular no hay suplente. Por ende, si no era senador titular el doctor Adolfo Rodríguez Saá, tampoco podía investir el carácter de suplente su hermano. Al no haber titular, no hay suplente; lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y en base a eso se sustentaron las impugnaciones y esto fue lo que se debatió en la Comisión de Asuntos Constitucionales durante todo este tiempo.

Si se están violando los intereses del Estado provincial de San Luis, así también hace cinco años se violan los intereses del Estado provincial de Catamarca y los viola este Senado. Y no tiene dos representantes; la provincia de Catamarca tiene uno sólo desde hace cinco años. Lo mismo podemos decir de varios Estados provinciales que tienen una representación precaria: el de Tucumán y muchos otros. Todos sabemos lo

controvertida que fue la cláusula transitoria IV de la Constitución en este Senado, que, gracias a Dios, va a ser absolutamente subsanada por la soberanía popular en el año 2001.

Así que mal puede sentirse agraviado el senador Rodríguez Saá, ni víctima de operaciones o algo que se le parezca, porque lo único que hizo este Senado y esta comisión fue ser coherente con la postura jurídica que sustentó para poder aprobarle un diploma absolutamente controvertido. Lo único que hizo este presidente es ser coherente con esa doctrina sustentada por la comisión, aceptada por unanimidad por el Senado. Inclusive hubo expresiones durísimas, como cuando se dijo que era improcedente la presentación en aquel entonces del gobernador de San Luis.

Con esto también planteo esta cuestión de privilegio para que sea sustanciada por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Obviamente, por una cuestión de ética, no hace falta que el senador por San Luis me recuse. Por una cuestión de ética, al ser yo objeto de la cuestión de privilegio, me aparto para que el dignísimo representante catamarqueño, doctor Pedro Villarroel, asuma la presidencia a los efectos de sustanciar estas dos cuestiones de privilegio.

Sr. Presidente. — Las cuestiones de privilegio planteadas pasarán a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

53

REGIMEN PENAL PARA EL BLANQUEO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ILICITOS (CONTINUACION)

Sr. Presidente. — Continuamos con la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Drogadicción y Narcotráfico, de Economía y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión y en los de ley de los señores senadores Humada y Berhongaray, por el que se establece un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos. (Orden del Día N° 1.335.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Penales y de Regímenes Carcelarios, de Drogadicción y Narcotr-

fico, de Economía y de Presupuesto y Hacienda, han considerado los proyectos de ley (C.D.-101/99), del senador Humada (S.-786/98) y del senador Berhongaray (986/98) los que establecen un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

Modificación del Código Penal

Artículo 1º – Incorpórase como artículo 278 bis del Código Penal el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 278 bis: Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años y multa del doble al quintuple del monto del valor de la suma de la acción realizada, el que sin haber sido autor o partícipe de un delito, interviniere en la inversión, venta, pignoración, transferencia, transporte, transmisión o cualquier otro acto jurídico referido a cosas o bienes provenientes de aquél, con la intención de ocultar el origen ilícito de los mismos, siempre que el valor de lo ocultado sea superior a cincuenta mil pesos (\$ 50.000).

El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el monto de lo ocultado sea superior a doscientos mil pesos (\$ 200.000), o cuando el autor realizare el hecho con habitualidad, o como miembro de una asociación ilícita, cuando sea funcionario público y actuare en el ejercicio de sus funciones.

Será castigado con la misma pena, el que habiendo sido autor o partícipe de un delito realizare los actos reprimidos en los párrafos anteriores.

CAPÍTULO II

Unidad de Información Financiera

Art. 2º – Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como entidad dependiente del Banco Central de la República Argentina, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Art. 3º – La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:

- a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
- b) Delitos de contrabando de armas (ley 22.415);

- c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
- d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
- e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal);
- f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del libro segundo del Código Penal.

Art. 4º – La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.

Art. 5º – La Unidad de Información Financiera estará integrada por quince (15) miembros designados de la siguiente manera:

- a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
- b) Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
- c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores designado por el respectivo organismo;
- d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos designado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.

Estos miembros deberán ser funcionarios de carrera con más de cuatro años de antigüedad y designados por concurso interno del organismo respectivo;

- e) Seis (6) representantes del Honorable Congreso de la Nación, tres (3) por el Honorable Senado y tres (3) por la Honorable Cámara de Diputados, dos (2) por la primera minoría y uno (1) por la segunda minoría de cada una de las Cámaras;
- f) Cinco (5) expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley. La selección de estos profesionales se realizará mediante concurso público de oposición y antecedentes.

Art. 6º – La selección de los expertos financieros se ajustará a las siguientes directivas:

- a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes, convocado por el Banco Central, publicándose las fechas de exámenes y condiciones generales de los mismos, por

cinco días en el Boletín Oficial, dos diarios de alcance nacional y un diario de cada provincia;

- b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables;
- c) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes que evaluarán tanto la formación teórica como práctica, serán publicados por cinco días en los mismos medios especificados en el inciso a), quedando por el término de 60 días corridos luego de la última publicación, sujetos a las impugnaciones que pudieran realizarle cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o persona jurídica.

Las impugnaciones deberán presentarse ante el Banco Central, las cuales serán remitidas para conocimiento de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Drogadicción y Narcotráfico del Honorable Congreso de la Nación.

Art. 7° – Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.

Durarán cuatro (4) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara de la Justicia nacional.

Podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa. Lo resuelto podrá ser recurrible mediante recurso de reposición y jerárquico ante el directorio del Banco Central.

Art. 8° – Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:

1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas o con las ciencias informáticas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 9° – La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia, la

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, la Inspección General de Justicia, los registros públicos de comercio o entes análogos de las provincias, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros titulares de organismos de la administración pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.

La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Art. 10. – Es competencia de la Unidad de Información Financiera:

1. Recibir, solicitar, procesar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 17 de la presente ley.
2. Colaborar durante la sustanciación del proceso con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
3. En todos los casos en que se encuentre en trámite una denuncia o actuación ante el Poder Judicial que verse sobre los mismos hechos, personas o actos que se encuentren a estudio en la Unidad de Información Financiera, tendrá prioridad y exclusividad en la investigación de dichas actuaciones la Justicia, debiendo aquélla poner a su disposición todos los elementos que obren en su poder sobre el caso dentro de las 48 horas de tomado conocimiento por cualquier medio que fuere, de la causa judicial. La falta a esta obligación de los miembros de la Unidad de Información Financiera, será causal de remoción prevista en el artículo 7° de la presente ley.
4. Dictar su reglamento interno, para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 11. – La Unidad de Información Financiera estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

En los casos en que la Unidad de Información Financiera se sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las

informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de la misma.

2. Recibir declaraciones voluntarias.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al juez competente la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 18 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 3º de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.
7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 17, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.
8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones, para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos o contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse a redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.

Art. 12. – La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:

1. Presentar una rendición semestral de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. Este informe deberá contener un capítulo general con la nómina de todas las denuncias e investigaciones en trámite, y un capítulo especial con un detalle exhaustivo de cada uno de los trámites. Los informes particulares de cada trámite, deberán contener como mínimo: Fecha de iniciación, denunciante, denunciado, objeto de la denuncia, medidas de prueba solicitadas, pruebas ordenadas, la resolución adoptada por la Unidad de Información Financiera, tribunal y fiscal actuantes una vez concluido el proceso.
2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.
3. Conformar el Registro Unico de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.

Art. 13. – La Unidad de Información Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de ocho (8) miembros y adoptará las decisiones por mayoría de cinco (5) miembros de los miembros presentes.

Art. 14. – La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 17 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 15. – El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 16. – En los casos en que el procesamiento de las informaciones permitan inferir la probable comisión del tipo penal del artículo 278 bis, deberá efectuar la denuncia al Ministerio Público por resolución fundada, poniendo a su disposición los elementos de convicción colectados.

Corresponderá el archivo definitivo y destrucción de todas las actuaciones y registros de cualquier denuncia, investigación o actuación, si transcurriere un año contado desde la fecha de inicio sin que se haya dictado resolución definitiva por parte de la unidad.

CAPÍTULO III

Deber de informar. Sujetos obligados

Art. 17. – Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 18 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
7. Las empresas aseguradoras.
8. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
9. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
10. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
11. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
12. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23, inciso *t*), del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
13. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia.

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley.

Art. 18. – Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:

- a) Recabar de sus clientes o requirentes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes o requirentes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivar por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca;

- b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La Unidad de Información Financiera establecerá las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad;

- c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Art. 19. – Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

CAPÍTULO IV

Régimen penal administrativo

Art. 20. –

1. Será sancionada con multa de dos (2) a diez (10) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la posibilidad de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278 bis del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.
2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica, hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 19 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 21. –

1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.
2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto actor.

3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 22. – Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la Justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos.

Art. 23. – Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1.101 y siguientes y 3.982 bis del Código Civil, entendiéndose por “acción civil”, la acción “penal administrativa”.

Art. 24. – Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

CAPÍTULO V

El Ministerio Público Fiscal

Art. 25. – Cuando corresponda la competencia federal o nacional el fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación

y la Ley Orgánica del Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Art. 26. – En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 27. – Derógase el artículo 25 de la ley 23.737 (texto ordenado).

Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 21 de diciembre de 1999.

Angel F. Pardo. – Julio C. Humada. – Carlos A. Verna. – Augusto Alasino. – Ernesto R. Oudín. – Emilio M. Cantareiro. – Antonio F. Cafiero. – Tomás R. Pruyas. – Horacio A. Zalazar. – Enrique M. Martínez Almudevar. – Daniel Baum. – Jorge F. Mikkelsen-Löth. – Daniel A. Varizat. – Osvaldo R. Sala. – Jorge J. Massat. – Alberto M. Tell. – Omar M. Vaquir.

En disidencia parcial:

Alcides H. López. – José L. Gioja. – Jorge R. Yoma. – Ricardo A. Branda. – Héctor M. Maya.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

El lavado de dinero, es decir, la conversión de dinero ilegítimo en activos —monetarios o no— con apariencia legal, no es un fenómeno nuevo; por el contrario, es tan viejo como el delito mismo. Cada vez que se rompe la ley en procura de un beneficio económico o que lo tiene como resultado del injusto, ha surgido la necesidad de que el delincuente disponga de dicho producto en forma de que no le atraiga la sanción por el delito cometido.

Tradicionalmente la figura del encubrimiento sancionaba la conducta de aquellos que, sin haber tomado parte en el ilícito y sin siquiera haberlo prometido, ayudaban al delincuente a aprovechar el fruto de su acción o eludir las consecuencias de sus actos.

En los últimos años esta actividad encubridora alcanzó una especial dimensión en el marco internacional, en el regional y en el nacional, debido, fundamentalmente, a su relación con las drogas. El crecimiento del consumo, el surgimiento del narcotráfico como su natural consecuencia, el in-

cremento en los niveles de violencia como consecuencia de la drogadicción, la generación de ingentes recursos monetarios y la internacionalización del comercio de drogas, han transformado al lavado de dinero en una actividad delictiva de alcances globales y en la que se hallan comprometidas las sociedades modernas casi sin excepción.

Esa realidad se ha convertido no sólo en un problema de criminalidad creciente, sino en una amenaza a los sistemas políticos en punto a su estabilidad, confiabilidad, honestidad, transparencia y efectividad.

El narcotráfico es, por su naturaleza, un delito esencialmente internacional; la materia prima de la mayoría de las drogas “naturales”, con excepción de la marihuana que es casi universal, se produce solo en ciertas zonas geográficas.

Uno de los principales problemas que debe enfrentar el narcotraficante, especialmente en los mercados consumidores, es de la disposición de dinero en efectivo, ya que la venta al consumidor final se realiza siempre en dinero efectivo y en billete de baja denominación. A fin de facilitar el movimiento de estos fondos ilícitos se busca hacerlo ingresar al sistema financiero, a fin de transferirlos dentro de un país o fuera de él con seguridad o velocidad, y desde allí comenzar la segunda etapa del lavado, su alejamiento del origen espurio.

Finalmente, la delincuencia intentará invertir sus ganancias de forma tal que ellas tomen finalmente la apariencia de fondos legítimos y le aseguren la preservación del capital y, cuando sea posible, además, la generación de utilidades. Para facilitar la integración de estos fondos a las corrientes legítimas de inversión se buscará nuevamente el concurso de entidades financieras o de intermediación, por lo cual ellas presentan mayor vulnerabilidad.

Una postura consideró aplicable la figura típica del lavado de dinero sólo a los fondos originados en el tráfico de drogas; algunas organizaciones internacionales y una significativa cantidad de países la extendieron a ciertos crímenes considerados de especial significación, y otros lo aplicaron, si no a todos, a una cantidad de ilícitos.

Hoy en día la mayoría de los países dictaron normas para facilitar la detención de bienes y personas, embargos preventivos, la colaboración en investigaciones judiciales (intervenciones telefónicas y telegráficas, seguimiento de personas, etcétera).

Por ejemplo en los Estados Unidos de América, bastará que fondos provenientes de cualquier delito y que pasen aunque sea por una milésima de segundos por una transferencia electrónica de fondos, para que sea suficiente para iniciar proceso.

En el marco regional, la Argentina, Chile y Brasil se han ido convirtiendo en piezas clave para el transporte de drogas y lavado de dinero, ello debido, a que tres de los miembros del Mercosur son limítrofes con Perú y Bolivia, productores de droga.

Uruguay: su legislación represiva abarca desde el uso ilícito de estupefacientes a figuras delictivas económicas y financieras del delito, por ejemplo: lavado de dinero, ocultamiento de bienes provenientes de ilícitos.

Cabe destacar que Uruguay se ha apartado de la política internacional, no crea una comisión especial destinada al control y aplicación de su legislación, faculta al Banco Central, con lo que se evitan superposiciones innecesarias.

Brasil: crea la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, dependiente de la Presidencia de la Nación, con todas las facultades que corre.

Argentina: el lavado de dinero se halla tipificado en el artículo 25 de la ley 23.737 de 1989, la acción típica consiste en intervenir en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquéllos, o del beneficio económico obtenido del delito.

A diferencia de la ley paraguaya, que se refiere al dolo y la culpa; la brasileña, que no hace referencia alguna; la uruguaya, que sólo se refiere a la conducta dolosa; la ley argentina contempla la comisión en forma de dolo directo o eventual.

Por medio de este dictamen se crea la Unidad de Información Financiera, dependiente del Banco Central de la República Argentina, que será la encargada del análisis, tratamiento y la transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de ilícitos. Los gastos de funcionamiento se obtendrán de las multas que recabe y los bienes que se decomisen.

Se ha resuelto dejar esta unidad bajo la dependencia del Banco Central, pues éste es un organismo altamente especializado, responsable máximo de la política monetaria y financiera y controlador natural del sistema financiero y cambiario institucional. De esta forma se evitan superposiciones de funciones, excesos burocráticos, futuras competitividades e interpretaciones disímiles que por lo general terminan afectando la eficacia de la norma.

Esta Unidad Financiera tendrá la obligación de rendir anualmente de su gestión y toda vez que así se lo requiera al Honorable Congreso de la Nación.

Respecto de la integración de esta unidad se cree conveniente incorporar a representantes del Parlamento, los cuales tendrán la obligación de informar a ambos cuerpos sobre las actuaciones de la comisión, respetándose la representación política de cada uno de los cuerpos legislativos.

Con relación al proyecto de Diputados, específicamente con los sujetos obligados a informar, surgen algunas objeciones. Al establecer el listado de personas obligadas en el inciso 2º del artículo 20 especifica a las personas físicas y jurídicas que "título personal o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques...". Esto es un error pues nadie pue-

de dedicarse con habitualidad a tal actividad sin ser previamente autorizado por el Banco Central de la República Argentina, en calidad de entidad financiera, casa, agencia, oficina o corredor de cambio. Quien así lo hiciere estaría comprendido en la infracción definida en el artículo 1º de la ley 19.357 (régimen penal cambiario).

Asimismo consideramos erróneo incorporar a personas físicas o entidades que, por la particularidad de su desempeño no necesariamente pueden apreciar los elementos objetivos que hagan despertar las sospechas en los términos que la ley señala. En particular merecen la objeción aludida, los registros públicos, los escribanos, los contadores públicos o los productores de seguro. Incluirlos en los sujetos obligados los colocaría en una situación de alto riesgo, ya que deberían implementar complejos sistemas de detección y prevención, para el caso de los registros públicos, o limitar sensiblemente su actuación, por ejemplo, escribanos y contadores.

El proyecto de Diputados, merece las siguientes observaciones:

a) El título de "encubrimiento y lavado de activos y origen delictivo" afecta gravemente la figura del encubrimiento, en razón que este delito es un tipo autónomo general, no vinculado a delito alguno, y el proyecto al sugerir el título aludido vincula el encubrimiento al lavado de activos;

b) El tipo penal del lavado de dinero proyectado como artículo 278, inciso 1 a), adolece de una notable imprecisión que consiste en lo siguiente: describe las conductas sancionadas agregando a continuación como exigencia de tipicidad "...la consecuencia posible de que los bienes originarios... adquieran, la apariencia...". Este fragmento "consecuencia posible" introduce una notable ambigüedad al tipo penal, haciendo que el mismo sea violatorio de la regla de legalidad constitucional (Constitución Nacional, artículo 18), que obliga a que las descripciones penales tengan rigor;

c) En el artículo 277, inciso 2 a) se produce otra grave afectación del principio de legalidad, cuando se introduce un agravante que consiste en "un delito especialmente grave". De manera inevitable surge el interrogante ¿qué es "un delito especialmente grave"?

d) El artículo 278, inciso 2, introduce un tipo culposos, que merece a su vez dos objeciones;

1. Desde el punto de vista de la técnica legislativa en materia penal, no es correcto incluir dentro de un mismo artículo tipos dolosos y culposos. Por la considerable diferencia entre ellos, los mismos deben ser regulados mediante normas diferentes.

2. Y, en lo que hace a la redacción en sí misma del mencionado tipo culposos, el mismo merece esta crítica: deja de lado el criterio normativo que usa el Código Penal para sancionar comportamientos culposos, tal y como es sabido, la fórmula de los artículos 84, 94, etcétera, del texto punitivo, e intro-

duce la expresión “temeridad”, la que, sin duda alguna, carece de todo rigor técnico, generando así nueva ambigüedad en la ley penal; por otro lado se sancionan los casos de “imprudencia grave”, lo que otra vez determina imprecisión, pues no sabemos qué es “imprudencia grave”;

e) Desde el punto de vista político criminal, estimo que es altamente riesgoso sancionar comportamientos culposos en esta materia. Dado la complejidad de las tareas en campos financieros, contables, bancarios, impositivos, etcétera, resultante especialmente de la numerosa lista de normas jurídicas que reglamentan estos campos, estimo conveniente consagrar la atipicidad en materia culposa, pues de lo contrario cualquier infracción a los múltiples deberes llevará a responsabilidades penales;

f) Estimo de fundamental importancia definir con el mayor riesgo posible el tipo penal del lavado de activos ilegítimos, por dos razones decisivas:

Por razones de carácter constitucional, toda prohibición penal, so pena de ser declarada inconstitucional, debe describir, con precisión la conducta prohibida.

Cuando la ley penal no cumple tal exigencia la aplicación de la ley, en campo jurisprudencial se torna contradictoria, lo que es altamente negativo desde el punto de vista político criminal.

Ante el conjunto de observaciones formuladas precedentemente, se estima conveniente por esta Comisión de Legislación Penal del Honorable Senado de la Nación, y dado la urgencia de la ley proyectada, producir las siguientes modificaciones al proyecto de la Cámara de Diputados, en lo referido a disposiciones de carácter penal.

En base a este criterio, se considera conveniente:

- Mantener la actual redacción del artículo 277.
- Mantener la actual redacción del artículo 278.
- Introducir el artículo 278 bis, tipo éste que castigará el blanqueo de activos provenientes de ilícitos.

Todo ello por las siguientes razones:

A) En primer lugar, es necesario consignar de manera especial que las leyes penales deben cumplir ciertas exigencias básicas de tipo constitucional propias de un estado de derecho.

Tales exigencias demandan, como mínimo, que se respete la regla de la legalidad, que entre otras cosas impone que la conducta sancionada esté delimitada con el debido rigor. El tipo penal propuesto describe con la debida precisión el comportamiento sancionado.

B) Es así que se postula un tipo penal que no está limitado exclusivamente al narcotráfico. Se opta por el criterio legislativo de sancionar el blanqueo de activos provenientes de otros –cualquier– delitos, terrorismo, venta de armas.

C) La idea es sancionar un tipo doloso, que sin caer en casuismo, que tenga una estructura suficien-

te para captar diversas formas de blanqueo de activos ilegítimos.

D) El mismo se construye como un tipo de los denominados en doctrina penal de “tendencia interna trascendente”, cuya nota esencial consiste en que la figura sanciona un injusto que se consuma, no con el resultado de ocultar, sino con la realización de la acción que se lleva a cabo con esa finalidad sobre esta clase de tipos, en la doctrina nacional: Eugenio R. Zaffaroni, *Tratado de Derecho Penal*, Parte General, III, 372 y siguientes; en la doctrina alemana, Hans H. Jescheck, *Tratado*, I, 436 y siguientes, traducción S. Mir Puig - F. Muñoz Conde.

Adviértase que el proyecto de Diputados consagra una figura que tiene como elemento al hecho que los bienes “adquieran la apariencia de un origen legítimo...”; esta exigencia puede dar lugar a discusión sobre la consumación del delito. Con la fórmula propuesta del delito se consuma con la sola realización de la acción, con ese elemento subjetivo del tipo, por ejemplo la realización de una escritura traslativa de dominio, sin que sea necesario que los bienes “adquieran la apariencia de un origen legítimo, tal problema no se habrá de plantear, recordando que ésta es una técnica legislativa frecuente en el Código Penal, así, con tipo de tendencia interna trascendente, el artículo 80, inciso 7º (“...para preparar...”); artículo 127 bis (“...para que ejerzan la prostitución...”), artículo 142 bis (“...con el fin de obligar a la víctima...”), artículo 145 (“...con el propósito de ...”), artículo 189 bis (“...el que con el fin de ...”), artículo 192 (“...tendiente a...” y así, 226 (“...para...” y “...con el fin de...”), etcétera.

E) Este es un delito que admite tentativa, pues los tipos de “tendencia interna trascendente” no presentan inconveniente en el tema, y en este caso las conductas castigadas son actos jurídicos, ventas, pignoración, etcétera, que mientras no hayan concluido, asumirán la forma del delito tentado.

F) Por otra parte, la fórmula propuesta, luego de narrar posibles actos típicos recurre a la expresión “o cualquier otro acto jurídico”, con lo que se evita una enumeración casuística, con los sabidos inconvenientes que ello tiene, evitando así las posibles situaciones de atipicidad por defecto de técnica legislativa de conductas que merecen ser castigadas.

G) Se consagran formas agravadas del injusto en cuestión, en función del monto de lo que se oculta o pretende ocultar, habitualidad del autor, calidad de miembro de una asociación ilícita o por su calidad de funcionario público que delinque en el ejercicio de su función.

H) También se cubre un vacío legislativo al castigar la acción de quien ha cometido un delito anterior y el mismo realiza el acto de blanqueo de activo.

I) El proyecto no sanciona tipo culposos, por las siguientes razones, es sabido que el tipo culposos o imprudente sanciona una conducta que infringe un deber de cuidado, conforme opinión unánime de la

doctrina penal actual. Es lo que se llama un tipo abierto.

El campo financiero, impositivo, comercial o ámbitos profesionales como el del escribano, etcétera, está regulado por un número de normas realmente enorme, muchas de las cuales son discutidas en cuanto a su exacto contenido, lo que significa que ante cualquier infracción se estará ante una imputación penal, cuyo contenido, como se dijo anteriormente, muchas veces no se sabe. Tanto es así que en proyectos de Diputados, y a fin de evitar tal posible, o casi segura proliferación de causas penales, al regular el tipo culposo, usa el criterio de "imprudencia grave". Pero éste es un concepto muy ambiguo, pues es evidente que no se sabe que es una imprudencia de tal modalidad. Dado las características del tipo culposo, en el sentido que es un "tipo abierto", en función de deberes de cuidado en materia penal el tipo culposo se sanciona en forma limitada o excepcional. Por tales razones se insiste, no es conveniente sancionar el tipo culposo.

Dado que se crea un nuevo tipo de blanqueo o lavado de activo de origen ilícito, que comprende no sólo a delitos de narcotráfico, sino a cualquier otro delito, corresponde derogar la norma sobre lavado que contiene la ley de estupefacientes (23.737), siendo aplicable la nueva disposición general.

Por las razones expuestas, es que aconsejo la aprobación del presente dictamen de comisión.

Angel F. Pardo. – Augusto Alasino. – Alberto M. Tell. – Ricardo A. Branda.

ANTECEDENTES

I

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(1º de septiembre de 1999)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REFORMA DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO Y CREACION DE UN SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE DELITOS DE ESPECIAL GRAVEDAD

CAPÍTULO I

Modificación del Código Penal

Artículo 1º – Sustitúyese la rúbrica del capítulo XIII del título XI del libro segundo del Código Penal ("Encubrimiento"), por el de "Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 277:

1. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

- a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta;
- b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer;
- c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito;
- d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole;
- e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

2. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando:

- a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión;
- b) El autor actuare con ánimo de lucro;
- c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

3. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e), y del inciso 2, b).

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 278:

1. a) Será reprimido con prisión de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro dinero

u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí:

- b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
 - c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277.
2. El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descritos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20 %) al ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor de los bienes objeto del delito.
 3. El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen ilícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277.
 4. Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser decomisados.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 279:

1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.
2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos (\$ 1.000) a veinte mil pesos (\$ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2.

3. Cuando el autor de alguno de los hechos descritos en el artículo 277, incisos 1 o 2, en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación.
4. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.

CAPÍTULO II

Unidad de Información Financiera

Art. 5º – Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) como entidad autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente ley.

Art. 6º – La Unidad de Información Financiera gozará de total autonomía funcional y será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:

- a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
- b) Delitos de contrabando de armas (ley 22.415);
- c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
- d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
- e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal);
- f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título 11 del libro segundo del Código Penal.

Art. 7º – La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.

Art. 8º – La Unidad de Información Financiera estará integrada por nueve miembros designados de la siguiente manera:

- a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
- b) Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
- c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores designado por el respectivo organismo; y
- d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos designado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Estos miembros deberán ser funcionarios de carrera con más de cuatro (4) años de antigüedad y designados por concurso interno del organismo respectivo.

Cinco (5) expertos financieros seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad hoc integrada de la siguiente forma:

- Dos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios.
- Dos funcionarios del Ministerio Público elegidos por el procurador general de la Nación.
- Un miembro del directorio del Banco Central elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios.
- Un miembro designado por el ministro de Justicia.
- Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores.
- Un miembro designado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 9º – La selección de los expertos financieros se ajustará a las siguientes directivas:

- a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión ad hoc convocará a concurso dando a publicidad las fechas de exámenes;
- b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables.

La prueba de oposición procurará evaluar tanto la formación teórica como la práctica.

La comisión ad hoc realizará la preselección de los postulantes a integrar la Unidad de Información Financiera a los efectos de preparar una nómina de aquellos que acrediten idoneidad suficiente para presentarse al concurso público de oposición y antecedentes.

Art. 10. – Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándose las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.

Durarán cuatro (4) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara de la justicia nacional.

Podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa.

Art. 11. – Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:

1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas o con las ciencias informáticas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 12. – La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, la Dirección General Impositiva, la Administración de Aduanas, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros titulares de organismos de la administración pública nacional la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.

La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Art. 13. – Es competencia de la Unidad de Información Financiera:

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de los ilícitos previstos en el artículo 6º de la presente ley y, en su caso, poner los elemen-

- tos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
3. Colaboran con los órganos judiciales y del Ministerio Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
 4. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 14. – La Unidad de Información Financiera estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de la misma.

2. Recibir declaraciones voluntarias.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al juez competente la supresión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6° de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.
7. Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas a que se

refiere el artículo 20, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.

8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.

Art. 15. – La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:

1. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones competentes, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre la marcha de sus actividades.
2. Conformar un registro único de información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.

Art. 16. – La Unidad de Información Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de cinco miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta ley prevea una mayoría especial.

Art. 17. – La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar que la suministren. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 21 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 18. – El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 19. – Cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la Unidad de Información Financiera, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la pre-

sente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal.

CAPITULO III

Deber de informar. Sujetos obligados

Art. 20. – Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley.

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificaciones; y la administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjeta de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio y los organismos administrativos de fiscalización y control de personas jurídicas; los registros de la propiedad inmueble, los registros nacionales del automotor y los registros prendarios.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Los escribanos matriculados.
11. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
12. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.

13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
14. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23, inciso *t*) del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades están regidas por las leyes 20.091, 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.
16. Los profesionales matriculados cuya actividad esté regulada por los consejos profesionales de ciencias económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio.
17. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia.

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del domicilio de la unidad de información financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley.

Art. 21. – Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:

- a) Recabar de sus clientes o requirientes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes o requirientes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona o personas por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivarla por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca;

b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se considerarán operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La Unidad de Información Financiera establecerá las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad:

c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Art. 22. – Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. El máximo de la escala penal será de seis (6) años, si la infidencia perjudicare manifestamente el desarrollo de la investigación.

CAPÍTULO IV

Régimen penal administrativo

Art. 23. –

1. Será sancionada con multa de dos (2) a diez (10) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1) del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.

2. Cuando el mismo hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos en el sentido del artículo 278, inciso 2) del Código Penal, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20 %) al sesenta por ciento (60 %) del valor de los bienes objeto del delito.

3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 24. –

1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa de una a diez veces el valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.

2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto personalmente infractor.

3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 25. – Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la Justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos y sus modificatorias y decretos reglamentarios.

Art. 26. – Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1.101 y siguientes y 3.982 bis del Código Civil, entendiéndose por “acción civil”, la acción “penal-administrativa”.

Art. 27. – Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los programas pre-

vistos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

CAPÍTULO V

El Ministerio Público Fiscal

Art. 28. — Cuando corresponda la competencia federal o nacional el fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica de Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Art. 29. — En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 30. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90, y el decreto 1.426/96, anexo.

Art. 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.

Juan Estrada.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 25 de la ley 23.737, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 25: Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de hasta diez veces el

monto o valor comprometido, el que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en esta ley, interviniera en la inversión, venta, pignoración, transferencia, transporte, transmisión o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos, de los que hubieren sustituido o del beneficio económico obtenido del delito, conociendo ese origen.

Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, receptare u ocultare, escondiere o disimulase la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control de dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su origen.

La pena de prisión será de uno a cinco años y la multa de hasta cinco veces el monto de los bienes comprometidos cuando el origen ilícito hubiera debido presumirse de las circunstancias de hecho arrimadas a la causa o de la calidad personal de las personas involucradas.

A los fines de la aplicación de este artículo no importa que el hecho originante de las ganancias, cosas, bienes o beneficios se haya producido en territorio extranjero.

Art. 2º — Incorpórase a la ley 23.737 como artículo 25 bis el siguiente:

Artículo 25 bis: Cuando el hecho hubiere sido ejecutado por directores, representantes legales, apoderados, gerentes o quienes cumplieren funciones equiparables en una persona de existencia ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma, de manera que el hecho resultare cometido con su ayuda o en su beneficio, la persona de existencia ideal será sancionada con una multa de hasta diez veces el monto de la suma comprometida. La multa se hará efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona de existencia ideal y sobre el de las personas físicas que hubieren participado en la comisión del hecho punible.

Art. 3º — Incorpórase a la ley 23.737 como artículo 25 ter el siguiente:

Artículo 25 ter: El tribunal dispondrá las medidas procesales necesarias para asegurar los bienes o sus sustitutos y las ganancias presumiblemente derivadas de los hechos descritos en la presente ley. Durante el proceso el interesado podrá probar su legítimo origen, su falta de conocimiento sobre la procedencia ilícita y que realizó todo lo razonablemente posible para verificar el origen de los mismos. En este caso el tribunal ordenará la devolución de los bienes en el estado en que se encontraban al momento de su aseguramiento o en su defecto ordenar su indemnización. En caso contrario el tribunal dispondrá de las ganancias o bienes en la forma prevista en el artículo 3º.

Art. 4º – Modifícase el artículo 26 de la ley 23.737, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 26: En la investigación de los delitos previstos en esta ley no habrá reserva bancaria o tributaria alguna. El levantamiento de la reserva sólo podrá ser ordenado por el juez de la causa.

La información obtenida y las actuaciones de los órganos encargados de las investigaciones estarán limitadas a las causas originadas en los hechos previstos en esta ley y no podrán dar lugar a procesos o sumarios administrativos. Las entidades financieras cambiarias o bursátiles estarán protegidas si colaboran en la investigación, estando obligadas a informar a la comisión creada por el decreto 1.849/90 toda operación sospechosa, denuncia por la que quedan liberadas de toda responsabilidad ulterior, salvo en casos de temeridad o malicia.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Julio C. Humada.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El fenómeno llamado globalización, con el desarrollo de las comunicaciones y la rapidez de las operaciones bancarias, hace posibles métodos cada vez más sofisticados de lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, motivo de preocupación tanto en nuestra legislación como en el derecho comparado.

La naturaleza transnacional del delito descrito impone un verdadero desafío para los países civilizados, que no pueden albergar otros medios para enfrentarlo como no sea el de establecer una cooperación lisa y llana a nivel internacional.

Una idea del problema que representa el lavado de dinero fue dada a conocer por las Naciones Unidas, según la cual sólo el tráfico ilícito de estupefacientes mueve en el mundo alrededor de seiscientos mil millones de dólares, mientras que el resto de los delitos aporta el equivalente a un billón de dólares.

Por las razones expresadas, deberá prestarse suma atención a la evolución y desarrollo de esta materia, toda vez que nuestro país ofrece oportunidades realmente fructíferas para los inversores extranjeros, y esta misma razón puede, coincidentemente, atraer tanto a capitales genuinos como a otros que no lo son.

Tal es la gravedad que ha asumido la situación descrita a nivel mundial, que se ha considerado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la posibilidad de crear una unidad de inteligencia especialmente dedicada al tratamiento de estupefacientes y delitos económicos internacionales, lo cual constituye un hecho sin precedentes en su largo historial.

De modo, entonces, que quienes operan desde la legalidad no deberían subestimar el efecto distorsivo que estos circuitos financieros delictivos pueden producir en los movimientos de la economía ya que, como ha quedado demostrado, quienes se encuentran incurso en el lavado de dinero tienen por propósito establecer una suerte de telaraña en sus transacciones, sumamente compleja, procurando involucrar a tantas partes y jurisdicciones como sea posible.

Cabe suponer razonablemente, entonces, que por el carácter que reviste exige de un movimiento constante de fondos, requiriendo para lograr sus fines la intervención de entidades bancarias, compañías financieras, casas y agentes de cambio, *brokers*, compañías de inversión, transmisores de fondos, agentes de bolsa, etcétera, por citar tan sólo algunos a modo de ejemplo.

En orden a la necesaria participación de las entidades vinculadas a la actividad financiera y cambiaria en materia de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cabe introducir la figura culposa dentro de la legislación vigente, atento a las especiales características de este ilícito y las dificultades en la obtención de pruebas fehacientes de modos dolosos de comisión, tal como lo exige la actual legislación, de forma de dificultar y entorpecer sustancialmente esta actividad delictiva.

También por ello se introduce la responsabilidad de las personas jurídicas en las condiciones establecidas en el artículo 25 bis. No ignoramos la clásica posición que afirma que las personas jurídicas no pueden cometer materialmente una infracción porque para ello necesitan de intervención humana, pero la responsabilidad directa del ente será más eficaz que el sistema de responsabilidad pecuniaria del empleador.

Por otra parte, existen en nuestro país numerosas sanciones impuestas a personas de existencia ideal. A título de ejemplo se puede mencionar el artículo 8º de la ley 20.680 de abastecimiento; artículos 18 a 21 de la ley 22.802, de lealtad comercial; artículo 876 del Código Aduanero; artículos 26 y 42 de la ley 22.262, de defensa de la competencia; artículo 41 de la ley 21.526, de entidades financieras, entre otras.

Planteada así la situación, no ha de resultar extraño que en alguna medida se produzca el surgimiento de un conflicto de intereses entre las autoridades responsables de la lucha contra el lavado de dinero y la comunidad financiera, así como entre ésta y sus clientes.

Dicho conflicto se expresa en la contradicción existente entre la necesidad de obtener información que posibilite la identificación de los fondos, su inmovilización con miras a la eventual confiscación y el desenmascaramiento de sus verdaderos titulares, por un lado, y la confidencialidad que deben guardar las entidades para con las operaciones que realicen con sus clientes, por otro.

El incremento de esta clase de maniobras delictivas, no obstante, ha logrado generar una fuerte tendencia a uniformar numerosas legislaciones, dentro de las cuales se considera que la confidencialidad debe ceder toda vez que sea investigado un delito de esa naturaleza.

Es por ello que, en razón del empleo múltiple de recursos y medios sofisticados de los que hacen uso quienes en última instancia resultan autores, la experiencia internacional es demostrativa de las grandes dificultades que debe afrontar una investigación que tenga por objeto esta clase de delitos, siendo por ello que el presente proyecto asigne una singular relevancia a todas aquellas personas que permitan ofrecer una colaboración que posibilite la identificación tanto de los bienes como de los responsables de las conductas incriminadas.

Más clara aún surge esa intención si se repara que la norma específica está colocada a continuación del precepto que tipifica el lavado de dinero, es decir, el artículo 25, con el cual la confidencialidad financiera tiene una estrecha e íntima relación.

El presente proyecto que elevo a consideración de este Honorable Senado, establece la limitación en punto al uso de la información obtenida como consecuencia del levantamiento del secreto bancario. En consecuencia, si durante la instrucción de una causa por violación a la ley 23.737 se encuentran documentos o elementos probatorios de una conducta infractora distinta a la prevista, de conformidad con el proyecto que se acompaña, no sería posible hacer valer esas infracciones constatadas, por carecer de sustento jurídico.

Por lo demás, la reforma propuesta aspira a alcanzar una mayor complementación con la legislación vigente, tendiendo al perfeccionamiento, ya que de su propio análisis surge un criterio de razonabilidad que las integra dentro del instituto del secreto bancario, evitando ponerlas en pugna con otras disposiciones.

A fin de armonizar disposiciones aparentemente encontradas, debe entenderse que las normas de la ley 23.737 referidas al levantamiento del secreto bancario que precluyen su alcance limitado a la investigación de conductas infraccionales por ella aprehendidas, actúan como modificatorias de disposiciones similares de normas anteriores, que no son específicas sino genéricas.

Por consiguiente, si la justicia recurre a funcionarios de otros órganos del Estado para la realización de investigaciones en el desarrollo de la causa, el conocimiento que los mismos adquieran de delitos o infracciones a otros regímenes no podrá ser utilizado fuera de la causa en que han sido llamados a colaborar y se encuentran relevados expresamente por el artículo 26 *in fine* de todo deber u obligación de tomar formalmente razón de los mismos.

Lo expuesto, la recta inteligencia propia del citado artículo 26, su separación legislativa de los co-

sos genéricos, el marco especialísimo en el que se inscribe y las finalidades muy precisas del precepto comentado, obligan a su muy cuidadosa utilización para asegurar su eficacia.

En este sentido, no debería arriesgarse el empleo de un instrumento que puede llegar a ser de suma utilidad en la lucha contra el lavado de dinero para resolver, mediante su utilización, problemas que le son ajenos, de naturaleza distinta para los que fue proyectado, siendo que el Estado cuenta con otras posibilidades.

En mérito a lo expresado, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.

Julio C. Humada.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados....

LEY DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE BIENES, DINERO O INSTRUMENTOS MONETARIOS PROVENIENTES DE ILÍCITOS

TÍTULO I

Contenido y definiciones básicas

CAPÍTULO UNICO

Artículo 1º - La presente ley establece el régimen penal tendiente a reprimir el blanqueo de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, provenientes de ilícitos; así como otras acciones tendientes a sustraer tales dineros, instrumentos, o bienes, a la acción de los órganos judiciales.

También dispone los procedimientos y crea los organismos tendientes a prevenir la comisión de los hechos precedentemente aludidos, así como a prestar apoyo técnico a las investigaciones relativas a los mismos.

Art. 2º - A lo fines derivados de la presente ley, asígnase a los términos detallados seguidamente, el siguiente significado:

Blanqueo de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes provenientes de ilícitos: La acción de disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios, u otros bienes.

Organización criminal: Grupo de personas organizadas con carácter permanente para cometer delitos, con el propósito fundamental de obtener lucro.

Organización terrorista: Grupo de personas organizadas con carácter permanente con la finalidad de obtener objetivos políticos a través del empleo, como medios fundamentales, de la violencia o la intimidación ilegales.

Agrégase a continuación del texto actual del artículo 78 del Código Penal, el siguiente párrafo:

A los fines de la aplicación de los artículos contenidos en el capítulo XIII bis, título XI, libro segundo de este Código, se entiende por:

Blanqueo de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes provenientes de ilícitos: La acción de disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

Organización criminal: Grupo de personas organizadas con carácter permanente para cometer delitos con el propósito fundamental de obtener lucro.

Organización terrorista: Grupo de personas organizadas con carácter permanente con la finalidad de obtener objetivos políticos a través del empleo, como medios fundamentales de la violencia o la intimidación ilegales.

TÍTULO II

Del blanqueo de dinero, instrumentos monetarios o bienes provenientes de un delito, y delitos conexos

CAPÍTULO UNICO

Art. 3° – Incorpórase a continuación del capítulo XIII, título XI, libro segundo del Código Penal, el siguiente capítulo, integrado por los artículos que a continuación se detallan:

CAPÍTULO XIII BIS

Del blanqueo de dinero, instrumentos monetarios, y otros bienes

Artículo 279 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años y multa del doble al quíntuple del monto de las sumas comprendidas en la acción, así como inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si la acción no constituyera un delito más severamente penado, quien disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

Con la misma pena establecida en el párrafo anterior e idéntica reserva, será reprimido quien recibiere, retuviere, poseyere, convirtiere, adquiriere, ocultare o invirtiere dinero o instrumentos monetarios, o adquiriere, utilizare, poseyere, ocultare, vendiere, permutare o realizare cualquier tipo de operación, con otros bienes o transportare, transmitiere, transfiriere, o enviare dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, sabiendo, o debiendo saber conforme a las circunstancias, que provenían de la comisión de un delito.

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión, cuando el dinero, instrumentos monetarios o bienes, provinieran de delitos:

1. Previstos en la legislación penal sobre estupefacientes.
2. Relacionados con el tráfico de seres humanos, o de órganos.
3. Vinculados con el contrabando de armas o explosivos.
4. De traición (artículos 214, 215 y 218 del Código Penal), o de espionaje (artículo 222, Código Penal).
5. Los delitos contra la administración pública contemplados en el artículo 174 inciso 5, o bien incluidos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI, libro segundo, del Código Penal de la Nación.
6. Los delitos contemplados en los artículos 168, 169 y 170 del Código Penal.

Artículo 279 ter: Se impondrá la pena de cinco a quince años de reclusión o prisión, así como multa del doble al quíntuple de la suma correspondiente al delito, e inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si no constituyera delito más severamente penado, por la comisión de las acciones previstas en el artículo anterior, en los siguientes casos:

- 1° Cuando las aludidas acciones fueran cometidas de modo habitual.
- 2° Cuando fueran realizadas con motivo del ejercicio de una actividad profesional.
- 3° Cuando fueran realizadas por una organización criminal o terrorista.
- 4° Cuando el imputado fuera funcionario público, y hubiera realizado la acción con motivo o en ocasión del desempeño de su cargo.

Artículo 279 quáter: Quien por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, diera lugar a la comisión de cualquiera de las acciones previstas en el presente capítulo, sufrirá prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 279 quíntes: Los miembros de los órganos de dirección, administración y control de aquellas personas jurídicas que hubieran realizado cualquiera de las acciones previstas en los artículos procedentes; y que hubieran intervenido personalmente en la concepción, adopción o ejecución de las decisiones respectivas, sufrirán las penas para ellas previstas.

También serán punibles por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el supuesto en que con motivo del desempeño de sus

cargos o de cualquier modo, dieran culposamente lugar a la comisión de las acciones en cuestión.

Artículo 279 sexies: En todos los delitos previstos en el presente capítulo, se aplicará el comiso del dinero, instrumentos monetarios, u otros bienes comprendidos en el mismo.

Art. 4º – Sustitúyese el texto actual del artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 277: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, si no constituyera delito más severamente penado, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:

1. Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.
2. Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito.

Art. 5º – Derógase el artículo 278 del Código Penal.

TITULO III

Del ente destinado a colaborar en la prevención e investigación del delito, y de las obligaciones impuestas a particulares con dichas finalidades

CAPÍTULO I

Del Centro de Prevención y Apoyo Técnico para Investigaciones Financieras (CETFIN)

Art. 6º – Créase, en jurisdicción del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, el Centro de Prevención y Apoyo Técnico para Investigaciones Financieras (CETFIN).

Constituirá un ente autárquico.

Tendrá por misión la fiscalización y el control de las transacciones financieras y patrimoniales de toda índole, realizadas por personas físicas o jurídicas domiciliadas o residentes transitoria o permanentemente en el país o que se hallaren en tránsito en el mismo; ya sea en el país, o destinadas a ejecutarse o a producir efectos en él, con la exclusiva finalidad de detectar la posible comisión de delitos contemplados en la presente ley; y la propuesta de los políticas tendientes a la prevención y represión eficaces de los mismos.

Serán sus atribuciones:

- a) Examinar las declaraciones que deberán serle remitidas, conforme establece la presente ley, y correlacionar las mismas con los restantes datos que obren en su poder;

b) Requerir a todas las personas y entidades obligadas a brindar informes conforme establece la presente, toda la información que le sea necesaria, la que deberá serle suministrada, no rigiendo a su respecto el secreto bancario;

c) Requerir a cualquier entidad pública o privada los informes que le sean necesarios, los que deberán serle suministrados, no rigiendo a su respecto el secreto impositivo ni el secreto bancario;

d) Disponer la suspensión, por el término de veinticuatro (24) horas, de la realización de cualquier operación financiera o de cualquier inscripción registral, requiriendo la prolongación de esta medida, resolución del órgano judicial competente;

e) Poner en conocimiento del Ministerio Público cualquier hecho o circunstancia que permita sospechar la comisión pasada, actual o futura de un delito contemplado en la presente ley, remitiéndole los indicios, pruebas, estudios, análisis y todo elemento útil que obrare en su poder, para la promoción por parte de éste de la acción penal, si correspondiere;

f) Recibir denuncias relativas a cualquiera de los delitos o contravenciones previstas en la presente ley, e investigarlas dentro de los límites de su competencia;

g) Supervisar los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación establecidos por las empresas o entidades sujetas a obligaciones derivadas de la presente ley, tendientes a prevenir y a impedir la realización de operaciones constitutivas de delitos previstos en la presente ley;

h) Realizar las pericias que fueran necesarias, ya fuera con su propio personal o requiriendo la colaboración de cualquier otro órgano de la administración pública, o bien de las universidades, pudiendo contratar, de ser necesario, consultores privados;

i) Elaborar en forma anual un informe acerca del cumplimiento de su misión, el que será puesto en conocimiento de las comisiones con competencia en materia de seguridad interior y de tráfico de drogas de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, así como de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia;

j) Proponer las políticas más eficaces para la prevención y la represión de los delitos previstos en la presente ley.

El centro no está facultado para tomar declaraciones de ninguna naturaleza, ni para realizar ni solicitar la realización de medidas diversas a las pre-

cedentemente referidas, excepción hecha del acopio, clasificación y explotación de información de fuentes públicas.

Su actuación no excluye la que corresponde al Banco Central de la República Argentina, Ministerio Público, Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana), instituciones policiales, fuerzas de seguridad y Secretaría de Seguridad Interior, en las competencias que les son propias.

Tales entes y organismos intercambiarán constantemente información con el CETFIN, prestándose recíproca colaboración en las investigaciones que emprendieren sobre aspectos regidos por la presente ley.

Art. 7º - El CETFIN estará presidido por un director general, designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Congreso de la Nación, por resolución conjunta de ambas Cámaras, y que durará cinco años en sus funciones, no pudiendo ser designado para un nuevo período.

La designación deberá recaer en un profesional del derecho o de ciencias económicas, no menor de treinta y cinco años de edad y con un mínimo de diez años de ejercicio profesional, y con antecedentes académicos o de experiencia funcional en materia de lucha contra el lavado de dinero.

El director general ejercerá la representación legal del CETFIN y tendrá a su cargo al gobierno y la administración del ente.

Contará además con un cuerpo de funcionarios permanentes, profesionales especializados en materias económicas o jurídicas, así como en sistemas informáticos, designado por concurso público de antecedentes y oposición, organizado por el CETFIN, que no podrá ser superior a cuarenta (40) personas, así como con el personal auxiliar que sea necesario para su funcionamiento.

Dicho personal tendrá carácter de personal de planta permanente, en los términos del régimen jurídico básico de la función pública aprobado por ley 22.140.

Su tarea requerirá dedicación exclusiva, siendo incompatible con toda otra actividad incluida la docencia.

Todo el personal del CETFIN, ya fuera permanente, contratado, transitorio o adscripto, estará especialmente obligado a guardar el más absoluto secreto respecto de toda información obtenida a través de su cargo, o relacionada con éste.

Art. 8º - El CETFIN procederá a adscribir por períodos anuales a personal de los siguientes organismos:

Banco Central de la República Argentina.

Ministerio de Economía.

Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana).

Ministerio de Justicia.

Policía Federal Argentina.

Gendarmería Nacional Argentina.

Prefectura Naval Argentina.

El personal adscripto deberá haber obtenido la máxima calificación prevista en el ordenamiento jurídico que regla su desempeño, en las dos últimas oportunidades en las cuales fue calificado.

Su adscripción se producirá de común acuerdo y por resolución conjunta del titular del organismo correspondiente y del director del CETFIN.

Podrá ser prorrogada por períodos anuales, hasta un máximo de cinco (5) años.

El personal adscripto percibirá, además de los haberes por todo concepto correspondientes a su categoría o grado, un adicional cuyo monto determinará la reglamentación.

Art. 9º - El CETFIN podrá actuar, tanto en el ámbito del derecho público como en el correspondiente al derecho privado, incluyendo la actuación en juicio como actor o demandado.

Su patrimonio estará formado por las asignaciones presupuestarias que le sean efectuadas, así como por la participación que obtenga de las multas y comisos que sean efectuados como consecuencia de la aplicación de la presente ley y que corresponda conforme a la misma, así como por las donaciones y legados que reciba.

Art. 10. - Sin perjuicio de la obligación de denuncia propia de todo funcionario público, establécese que todo funcionario público que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de la comisión actual, pasada o futura de los delitos previstos en la presente ley, deberá informar al CETFIN, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber tomado conocimiento del hecho.

Quien incumpliere esta obligación sin causa justificada, sufrirá la pena contemplada en el Código Penal para la omisión de denuncia.

Si concurriere con el delito de omisión de denuncia, el mínimo y el máximo de la pena prevista para este delito se elevarán un tercio.

Art. 11. - Las sumas provenientes de las multas y del comiso contemplado en la presente ley serán distribuidas por el Ministerio del Interior entre el CETFIN, los entes públicos y las instituciones policiales y fuerzas de seguridad que hubieran tenido un rol significativo en la averiguación e investigación del delito.

Dichas sumas tendrán como destino fundamental el perfeccionamiento técnico y equipamiento de las instituciones respectivas, para la lucha contra los delitos contemplados en la presente ley.

Art. 12. - El CETFIN establecerá una relación constante de cooperación e intercambio de información con los organismos de otros países que ejerzan funciones análogas. En su defecto, dicha cooperación se establecerá con los bancos centrales y con los organismos con competencia en materia de lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos.

Se asignará prioridad a las relaciones en la materia que pudieran establecerse con los países limítrofes de la Argentina.

El intercambio de información será llevado a cabo de conformidad con los normas establecidas en los tratados y convenciones internacionales vigentes o, en su caso, al principio general de reciprocidad, así como al cumplimiento por parte del país o países con los que se establezca en el intercambio, de similares recaudos en materia de secreto o reserva, a los vigentes en la Argentina.

CAPÍTULO II

De las obligaciones impuestas a personas físicas y jurídicas, con la finalidad de prevenir y de facilitar la investigación de los delitos previstos en la presente ley

Art. 13. — Las personas físicas y jurídicas comprendidas en el presente artículo, quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en esta ley con la finalidad de prevenir y de facilitar la investigación de los delitos previstos en la misma.

- a) Los bancos y entidades financieras, incluyendo las personas físicas o jurídicas que ejerzan en el país la representación de bancos o entidades financieras extranjeras;
- b) Las casas y agentes de cambio y, en general todas las personas físicas o jurídicas facultadas para cambiar moneda, ejerzan o no tal actividad en forma habitual;
- c) Las compañías de seguros, reaseguros, capitalización y ahorro, y ahorro para fines determinados;
- d) Los agentes de bolsa y de valores, las administradoras y gestoras de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen en bolsa;
- e) Las sociedades emisoras o gestoras de tarjetas de crédito o débito;
- f) Las personas físicas o jurídicas que posean o gestionen casinos de juego;
- g) Las inmobiliarias;
- h) Los escribanos públicos;
- i) Las casas de numismática, filatelia y de joyería, así como las personas o establecimientos que se dedicaren a la exportación, importación e industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas;
- j) Los casinos y casas de juego por dinero;
- k) Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales;

- l) Las empresas dedicadas al transporte de cargas y mercaderías, así como al transporte de caudales;
- m) Toda otra actividad que, atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros instrumentos al portador como medio de cobro, al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos, al lugar de ubicación de los establecimientos, u otras circunstancias relevantes a la materia de la presente ley, se establezca reglamentariamente.

Art. 14. — Los obligados conforme al artículo precedente, deberán:

- a) Identificar a sus clientes en el momento en que manifiesten su propósito de realizar cualquier tipo de operación con ellas, que excediera de la suma de diez mil pesos, ya fuera en una operación o en varias, cuando resultara evidente el fraccionamiento en varias, para eludir tal requisito.

Cuando existan indicios o certeza que los clientes o personas obligados a identificarse no actúan por cuenta propia, las personas físicas o jurídicas indicadas en el artículo precedente les requerirán la información necesaria para establecer la identidad de las personas por cuya cuenta actúan;

- b) Examinar atentamente cualquier operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza o por las circunstancias en las que tuvo lugar, pueda estar vinculada a la materia de la presente ley;
- c) Conservar durante un período mínimo de diez años los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones y la identidad de los sujetos que las hubieren efectuado;
- d) Comunicar al CETFIN cualquier hecho u operación respecto del que existan sospechas o indicios que lo vinculen con los delitos que constituyen materia de la presente ley, particularmente en razón de su magnitud, falta de habitualidad, velocidad de rotación, complejidad inusitada o injustificada, aparente carencia de justificación económica o de cualquier otro motivo;
- e) Facilitar al CETFIN toda información que fuera requerida por éste, en ejercicio de sus competencias;
- f) Guardar estricta reserva, tanto con sus clientes como con terceros, respecto de la circunstancia de haber remitido información al CETFIN, como de haberseles requerido información por parte de éste, o de la circunstancia de estar realizando dicho organismo investigaciones de cualquier naturaleza;

- g) Requerir a las personas y entidades obligadas el establecimiento de procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación, a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con las cuestiones materia de esta ley;
- h) Dar inmediato cumplimiento a toda orden de suspensión de operaciones que les fuera impartida por el CETFIN, dentro de la competencia de este organismo.

CAPÍTULO III

De las contravenciones

Art. 15. – El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo precedente por parte de los sujetos a las mismas, dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas previstas en este artículo, siempre que tal incumplimiento no integre las acciones constitutivas de los delitos previstos en la presente ley.

Será reprimido con multa de un mil pesos (\$ 1.000) a cinco millones de pesos (\$ 5.000.000) quien incumpliere las obligaciones establecidas en los apartados a), b), c) y g).

Será reprimido con multa de cinco mil pesos (\$ 5.000) a quince millones de pesos (\$ 15.000.000):

- I. El incumplimiento de la obligación de comunicar hechos u operaciones sospechosas, previsto en el inciso d).
- II. El incumplimiento de la obligación de suministrar al CETFIN la información requerida por éste.
- III. El incumplimiento de la obligación de reserva prevista en el apartado f) del artículo precedente.
- IV. El incumplimiento a la orden de suspensión de operaciones que le fuera impartida por el CETFIN prevista en el apartado h).

Art. 16. – En el supuesto en que el sancionado fuera una persona jurídica, además de la sanción que corresponda imponer a la entidad obligada, se impondrán a quienes ejercieran cargos en los órganos de dirección, administración o control de la misma y que intervinieran o fueran responsables de la acción u omisión respectiva, siempre que éstas no constituyeran delitos contemplados en la presente ley, multas de un mil pesos (\$ 1.000) a un millón de pesos (\$ 1.000.000), así como separación de sus cargos e inhabilitación para el ejercicio de cargos de dirección, administración o control de cualquiera de las entidades previstas en la presente ley, por el término de dos meses a cinco años.

Art. 17. – Para la graduación de la sanción, se tomarán en cuenta:

- a) Los montos comprometidos en las operaciones;
- b) El lucro obtenido;

- c) La habitualidad en las conductas constitutivas de infracción;
- d) Los antecedentes de las personas involucradas, especialmente la reincidencia o anterior comisión de delitos que involucraran al sistema financiero, o bien de tráfico de drogas, o de terrorismo;
- e) La conducta posterior a la comisión de la infracción y particularmente la realización de actos concretos tendientes a reparar los daños cometidos o de cooperación con las investigaciones.

Las penas que se impusieren a las personas comprendidas en el artículo 13 se graduarán teniendo en cuenta:

- a) La jerarquía del cargo que ostentara el imputado en la entidad;
- b) El grado de participación del mismo, en las acciones u omisiones constitutivas de la infracción, así como el dolo con que hubiera actuado;
- c) La capacidad económica del imputado;
- d) La conducta anterior del interesado, en relación con los requerimientos establecidos en esta ley;
- e) La conducta posterior a la comisión de la infracción y particularmente la realización de actos concretos tendientes a reparar los daños cometidos o de cooperación con las investigaciones.

Art. 18. – Las personas y entidades sujetas a las obligaciones establecidas en el artículo 14 quedan exentas de sus obligaciones relativas a secreto bancario, por las comunicaciones que efectúen al CETFIN.

Art. 19. – Las personas jurídicas cuyos órganos competentes, con motivo o en ocasión de sus funciones, realizaran o participaran en los delitos previstos en el título II de la presente, sufrirán la pena de multa prevista para las mismas, y serán además pasibles del retiro de la personería jurídica y autorización legal para funcionar en su actividad, por un período de dos meses a cinco años, o bien en forma definitiva.

CAPÍTULO IV

De la investigación de las contravenciones, y los recursos existentes contra la resolución respectiva

Art. 20. – La investigación de las contravenciones previstas en la presente ley, estará a cargo del Banco Central de la República Argentina.

Las mismas se iniciarán, ya sea por denuncia que ante el mismo realizara el CETFIN o cualquier otro ente u organismo competente al efecto, con el correlativo envío de las actuaciones correspondientes, o bien por propia iniciativa del Banco Central de la República Argentina.

En todo caso, se procederá a remitir al CETFIN copia de todos los elementos y antecedentes relativos a la causa. Será de aplicación el Reglamento de Investigaciones de la Administración Pública Nacional y, subsidiariamente, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y el Código de Procedimientos en Materia Penal.

Art. 21. — El Banco Central de la República Argentina, a los efectos de la averiguación de las infracciones aquí contempladas, estará facultado para

- a) Citar y hacer comparecer testigos, con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario;
- b) Realizar allanamientos y secuestros de todo tipo de pruebas.

Las medidas precedentemente señaladas, tendrán lugar por intermedio del Poder Judicial de la Nación.

Art. 22. — Las decisiones que adoptare el Banco Central de la República Argentina podrán ser impugnadas por el particular a través de recurso judicial, que deberá ser interpuesto y fundado ante el ente antes referido, dentro del término de treinta días de notificado el recurrente de la resolución respectiva.

Conocerá del recurso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a la que deberán ser elevadas las actuaciones dentro del quinto día de presentado el recurso.

Si con motivo de la sustanciación del sumario realizado el Banco Central de la República Argentina con relación a las contravenciones aquí analizadas se advirtiera la comisión de delitos, se procederá al envío de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.

Concluida la causa penal respectiva, en su caso se reanudarán las actuaciones administrativas, debiendo tenerse en cuenta en las mismas los hechos probados en el proceso penal.

Art. 23. — La prescripción de las contravenciones previstas en esta ley, así como de las sanciones impuestas, se producirá en el plazo de cinco años.

El término respectivo se computará desde la fecha de la comisión de la infracción.

En el supuesto de tratarse de una actividad continuada, la infracción procederá a computarse desde la realización del último acto constitutivo de infracción.

CAPÍTULO V

De la elaboración de políticas para la lucha contra el blanqueo de dinero

Art. 24. — Créase la Comisión de Políticas de Lucha contra el Blanqueo de Dinero proveniente del Narcotráfico (Copoblan).

Tendrá por misión la elaboración de políticas relativas a la lucha contra los delitos previstos en la presente ley, la evaluación del resultado de la aplicación de las políticas vigentes, y la propuesta de

medidas tendientes al perfeccionamiento de la lucha contra los delitos en cuestión.

Funcionará en jurisdicción del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Estará presidida por el presidente del Banco Central de la República Argentina, e integrada por un representante de la Secretaría de Seguridad Interior, un representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, un representante de la Secretaría de Hacienda, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El CETFIN constituirá órgano de trabajo de la Comisión.

TÍTULO IV

Disposiciones finales y transitorias

Art. 25. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90, así como toda otra norma que se oponga a lo establecido en la presente ley.

Art. 26. — Dentro del término de treinta (30) días de la presente, el Poder Ejecutivo nacional procederá a efectuar la designación de director general del CETFIN y a someter la misma al acuerdo del Congreso de la Nación, establecido en la presente.

Prestado que fuera el acuerdo, en su caso, facilitará al mismo modo todos los elementos necesarios para poner en funcionamiento el ente, en un plazo que no excederá los noventa (90) días de obtenido el acuerdo.

Art. 27. — Los fondos que requiera el cumplimiento de esta ley serán tomados de "Rentas generales" con imputación a la misma, hasta su inclusión en el próximo presupuesto de la administración nacional.

Art. 28. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio T. Berhongaray.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

1. *El blanqueo de dinero*

El *blanqueo de dinero* (España y Francia, entre otros), *money laundering* (literalmente, lavado de dinero, Estados Unidos de América, entre otros países), *legitimación de activos*, etcétera, constituye un fenómeno delictivo cuya creciente magnitud y reiteración constituye una verdadera amenaza para la seguridad pública y para la propia vigencia de las instituciones, en muchos países.

Consiste, fundamentalmente, en acciones tendientes a disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes. También, en otras acciones tendientes, en

definitiva, a asegurar a los autores y partícipes de un delito el provecho económico de su accionar, sustrayendo el dinero, instrumentos monetarios o bienes provenientes del mismo a la acción de la Justicia.

Ciertamente, no constituye un fenómeno nuevo.

Aún antes de la sanción de la ley 23.737 —régimen penal de estupefacientes— nuestra legislación penal preveía como variantes del encubrimiento, el denominado favorecimiento real, contenido en los incisos 2° y 3°, que reprime con pena de prisión de seis meses a tres años, a quien, “sin promesa anterior al delito, después de su ejecución... Procurare o ayudare a alguien a... asegurar el producto o el provecho del mismo...” (inciso 2°) “y adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o interviniera en su adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al doble” (inciso 3°).

También contemplaba, la aún vigente figura denominada recepción de cosa de procedencia sospechosa, en su artículo 278, que establece que: “El que, con el fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos de acuerdo con las circunstancias debía sospechar provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble”.

No obstante, los hechos hicieron progresivamente evidente la insuficiencia de estas previsiones, tanto por no describir suficientemente la variedad y complejidad de las maniobras constitutivas del blanqueo de dinero, como, fundamentalmente, por su pena relativamente leve, así como por la carencia de órganos especializados que cooperaran en su investigación.

Fue así que ante la creciente magnitud asumida por el narcotráfico y una de sus derivaciones más perniciosas, el blanqueo de dinero, la ley 23.737, de régimen penal en materia de estupefacientes incluyó en su artículo 25, una norma estableciendo que “...será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de seis mil a quinientos mil australes, el que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en esta ley, interviniera en la inversión, venta, pignoración, transferencia u cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquéllos, o del beneficio económico obtenido del delito siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado.

Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, ocultare o receptare dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su origen o habiéndolo sospechado.

A los fines de la aplicación de este artículo no importará que el hecho originante de las ganancias, cosas, bienes o beneficios se haya producido en el territorio extranjero.

El tribunal dispondrá las medidas procesales para asegurar las ganancias o bienes presumiblemente derivados de los hechos descritos en la presente ley. Durante el proceso el interesado podrá probar su legítimo origen en cuyo caso el tribunal ordenará la devolución de los bienes en el estado en que se encontraban al momento del aseguramiento o en su defecto ordenará su indemnización. En caso contrario el tribunal dispondrá de las ganancias o bienes en la forma prescrita en el artículo 39...”.

Pronto pudo advertirse, no obstante, que a más de no prever la totalidad de acciones constitutivas del “blanqueo de dinero”, la norma no comprendía otras formas delictivas constitutivas de peligros de gravedad análoga al narcotráfico, tal como sucede con el terrorismo, especialmente el terrorismo internacional, la trata de personas, el comercio de órganos, la corrupción administrativa, etcétera.

También resultaba necesario advertir la necesidad de contar con controles estrictos y específicos, particularmente de los movimientos financieros y, en general, patrimoniales.

En este último aspecto, la creación, por decreto 1.849 del 17-9-90, de la Comisión Mixta de Control de las Operativas Relacionadas con el Lavado del Dinero del Narcotráfico, en el ámbito del Banco Central de la República Argentina constituyó un avance, si bien tibio e insuficiente.

Conforme dispuso el decreto mencionado, la expresada comisión, presidida alternativamente cada seis meses por el presidente del Banco Central de la República Argentina y por el secretario de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, se integraba con representantes del Banco Central, de la Secretaría de Programación, de la Subsecretaría de Finanzas Públicas y de la Subsecretaría de Hacienda (dos representantes por cada organismo) (artículo 3°).

Por otra parte, conforme dispuso el artículo 4°, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, prestaría la infraestructura de apoyo técnico y administrativo necesaria para el funcionamiento de dicha comisión.

Parece evidente, no obstante, que el modo elegido no resultaba el más apto para el logro del objetivo buscado.

Ciertamente que la presidencia alternada no constituía el modo mejor de obtener la unidad de conducción y concepción requerida por la difícil tarea impuesta.

Por otra parte, dicha tarea requería fundamentalmente una significativa especialización en materia económica y financiera, así como la fluida cooperación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad.

Su constitución, con el apoyo técnico y administrativo de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Nar-

cotráfico no resultó, a nuestro juicio, acertada; debiendo haber sido el presidente del Banco Central, o mejor aún, un funcionario designado al efecto, de relevantes condiciones personales y especializado en la materia, quien en todo momento presidiera dicho órgano, debiendo haber estado integrado el mismo por funcionarios permanentes de trayectoria y conocimiento en la materia, funcionarios del área económico-financiera (Banco Central, Aduana, Dirección General Impositiva, Secretaría de Hacienda, etcétera), e integrantes adscritos de los cuerpos policiales y de seguridad.

2. La acción internacional en materia de blanqueo de dinero

Conviene destacar asimismo que la preocupación sobre el blanqueo de dinero en nuestro país acompañó a un fuerte movimiento internacional en esta materia.

Dada la naturaleza del blanqueo de dinero y su íntima vinculación con los movimientos de capitales que caracterizan a la época actual, resulta de fundamental importancia la cooperación internacional en la materia.

Cabe recordar en este aspecto la actuación, en el seno de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

La misma fue establecida bajo el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el Uso Ilícito, la Producción y el Tráfico de Estupeficientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1986, y habría de desempeñar un rol de importancia en la lucha contra el blanqueo de dinero en el ámbito regional.

En la materia que nos ocupa, resultó de fundamental importancia la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito en drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 19 de diciembre de 1988 y ratificada por nuestro país el 11 de marzo de 1992, a través de la ley 24.072 (Boletín Oficial, 14-4-92).

Entre otros aspectos de la lucha contra el narcotráfico, la expresada convención estableció normas en materia de cooperación internacional para posibilitar la confiscación del producto de delito narcotráfico y delitos conexos y, consiguientemente, previó la adopción por los signatarios de las medidas necesarias para identificar, rastrear y congelar o secuestrar dinero, instrumentos monetarios u otros bienes derivados de los delitos en cuestión, para su eventual confiscación.

Particularmente, se estableció a los efectos indicados la supresión del secreto bancario, la posibilidad para la justicia de un Estado con jurisdicción en materia de un delito determinado de narcotráfico, de solicitar la captura del producido de dicho delito que se hallara en otro Estado, y obtener co-

laboración de éste para su detección, rastreo, identificación y posterior congelamiento a los fines de su captura.

También contempló acuerdos entre las partes relativos al empleo de los fondos o bienes confiscados, o parte de ellos, para organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el narcotráfico; así como a la participación entre los países participantes en la investigación del delito y en la captura de su producto, de los bienes o fondos respectivos.

También se propuso la consideración por las partes signatarias de la inversión de la carga de la prueba respecto del origen legítimo del producto o de otra propiedad sujeta a confiscación, en la medida en que ello resultare coherente con los principios de la legislación de cada país, así como con la naturaleza de los procedimientos judiciales y administrativos.

A partir de 1989, comenzó a advertirse un significativo incremento en la cooperación internacional en materia de prevención y represión del blanqueo de dinero, especialmente el proveniente del narcotráfico.

Aun países orgullosos de sus sistemas bancarios y celosos custodios del secreto respectivo, acordaron modificar esa posición para permitir la adecuada investigación de este delito.

Como otro hito importante, debe citarse a la Financial Action Task Force (Fuerza de Tareas de Acción Financiera).

El presidente norteamericano George Bush propuso en las Cumbres Económicas de 1989 y 1990 constituir una Fuerza de Tareas de Acción Financiera formada por los países que constituyen los más importantes centros financieros del mundo, con miras al establecimiento de un consenso global sobre acciones tanto legislativas como de regulación, a fin de cortar el flujo de dinero proveniente del narcotráfico, que tenía lugar a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias.

Así, la Fuerza de Tareas de Acción Financiera I, autorizada por la Conferencia de 1989, produjo un informe muy útil, que efectuó 40 recomendaciones para acciones a adoptar por los países miembros.

Dicha organización, integrada por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos de América, así como por el Consejo de Europa y el Consejo de Cooperación del Golfo, recomendó, entre otros aspectos, ratificar la Convención de Viena de 1988; evitar que el secreto bancario frustrara la implementación de las recomendaciones; estimular la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero, incluyendo la extradición; establecer la responsabilidad penal de las empresas, no exclusi-

vamente de los empleados de éstas; posibilitar la confiscación de la propiedad que se pretendiera blanquear, o de sus equivalentes; requerir que las instituciones financieras identificaran a sus clientes y concluir con las cuentas anónimas o con nombres ficticios, así como que examinaran las transacciones sospechosas, informando de ellas a las autoridades; intercambiar información entre países, sobre el lavado de dinero, etcétera.

Un aspecto fundamental de las recomendaciones, fue el de proponer la extensión de la figura del blanqueo de dinero, hasta entonces limitada al narcotráfico, a otros delitos de cierta gravedad; debiendo cada país determinar qué delitos serían incluidos entre aquellos susceptibles de dar lugar a la aplicación de dicha figura.

El expreso pedido formulado por George Bush durante la Cumbre Económica de 1990 en Houston, dio lugar a la formación de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera II.

Dicha "fuerza" procedió a monitorar el progreso por cada país respecto a la implementación de las recomendaciones, proponiendo además recomendaciones adicionales.

El año 1990 fue de particular importancia, en lo relativo a la concepción e implementación de medidas de lucha contra el "blanqueo de dinero".

Es posible citar, en dicho año, la concurrencia de opinión a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en febrero; el informe de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera adoptado en abril, el informe de la Conferencia Caribeña sobre Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico que se reunió en junio, el informe del Consejo de Europa adoptado en septiembre, la entrada en vigencia de la antedicha Convención de 1998 de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas, el 11 de noviembre, la iniciación el 26 de noviembre del proyecto de la Organización de Estados Americanos para proyectar modelos de legislación nacional sobre lavado de dinero y decomiso de valores, y la redacción de la directiva de política de la Comunidad Europea, aprobada en 1991.

Conviene recordar especialmente la reunión del grupo expertos de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en la semana del 26 de noviembre de 1990.

En dicha oportunidad, se desarrollaron conceptos básicos relevantes para desarrollar una estrategia conjunta para los países de la organización para encarar el lavado de dinero, en particular legislación contra dicho delito.

Se trabajó también en el desarrollo de un entendimiento común de la misión del grupo, analizando el estado actual de la ley en áreas relacionadas con el lavado de dinero, comiso, secreto bancario, ética, y concepto legales básicos, proponiéndose un cuestionario al respecto, para ser respondido por

los países miembros. Cada representante acordó responder a un cuestionario en detalle, para que el Secretariado de la Organización de Estados Americanos pudiera compilar un informe de estado.

Participaron la Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

En lo relativo a la Directiva sobre Blanqueo, Búsqueda, Captura y Confiscación del producto de delitos, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 8 de septiembre, fue el resultado de un esfuerzo de tres años, realizado por los Comités Europeos en Problemas de Delitos, buscando complementar los términos de la Convención de Viena.

Sin embargo, a diferencia de dicha Convención, la Directiva del Consejo de Europa trascendió el ámbito de los narcóticos y procuró establecer la cooperación internacional para combatir todos los delitos que generen productos. Entre otros beneficios, este documento brindó a los Estados partes una significativa oportunidad para cooperar en investigaciones correspondientes a blanqueo de dinero de delitos no relacionados con narcóticos.

Así, en los fundamentos de la Directiva del Consejo de Europa del 10 de junio de 1991 se estableció que si bien "...la definición de 'blanqueo de dinero' es tomada de la adoptada de la Convención de Viena... sin embargo, dado que el 'blanqueo de dinero' no ocurre solamente en relación al producto de delitos relacionados con drogas, sino también respecto del producto de otras actividades criminales (tales como crimen organizado y terrorismo), los Estados miembros deberían, dentro del sentido de su legislación, extender los efectos de la directiva para incluir los productos de tales actividades, en la extensión en que las mismas pueden resultar en blanqueo de dinero que justifique sanciones sobre tal base..."

Consignientemente, la Directiva definió al "blanqueo de dinero" del siguiente modo:

"'Blanqueo de dinero': significa las siguientes conductas, cuando son cometidas intencionalmente:

"- La conversión o transferencia de bienes, sabiendo que tal propiedad es derivada de actividad criminal o de un acto de participación en tal actividad, con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilegítimo de bienes, o de ayudar a alguna persona que está involucrada en la comisión de tal actividad, para evadir las consecuencias legales de su acción.

"- El ocultamiento o disfraz de la verdadera naturaleza, fuente, localización, disposición, movimiento, derechos con respecto a la propiedad de bienes, sabiendo que tal propiedad está derivada de actividad criminal, o de un acto de participación en tal actividad.

"- La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo, al momento de recibirlos, que tales bienes

fueron derivados de actividad criminal o de un acto de participación en tal actividad.

—La participación en la asociación para cometer tentativas de cometer y ayudar, facilitar o aconsejar la comisión de cualquiera de las acciones mencionadas en los párrafos precedentes.

—El conocimiento, la intención o el propósito requerido como un elemento de las actividades antes mencionadas, puede ser inferido de las circunstancias fácticas objetivas...”.

Sobre el modelo establecido por la Directiva, los países europeos fueron sancionando su legislación en la materia.

Así, en Francia, las leyes 90-614 del 12 de julio de 1990, relativa a la participación de los organismos financieros en la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes; la ley 19.122 del 29 de enero de 1993, sobre prevención de la corrupción y transparencia de la vida económica y los procedimientos públicos; ley 96-392 del 13 de mayo de 1996, relativa a la lucha contra el blanqueo y el tráfico de estupefacientes, así como a la cooperación internacional en materia de incautación y confiscación de los productos de la delincuencia.

En Gran Bretaña merecen destacarse la *Drug Trafficking Offenses Act of 1986*, y la *Criminal Justice Act of 1993*.

En Italia, cabe recordar la ley del 19 de marzo de 1990, número 55, sobre “*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*”; el decreto ley del 3 de mayo de 1991, número 143, sobre “*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*”, entre otras.

En España, conviene destacar el Real Decreto del 20 de diciembre de 1991, número 1.816/1991, sobre transacciones económicas con el exterior; las reformas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispuestas por la ley orgánica del 23 de diciembre de 1992, número 8/1992, así como la ley del 28 de diciembre de 1993, número 19/1993, sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales.

En los Estados Unidos de América han sido sancionados diversos cuerpos normativos en la materia.

Así, el Código de los Estados Unidos de América contiene normas penales sobre “*lavado de instrumentos monetarios*” (apartado 1956); “*empeñamiento en transacciones sobre bienes derivados de una actividad ilegal específica*” (apartado 1957); normas contenidas en el título 12, parte 21 del Código de Regulaciones Federales, Bancos y actividad bancaria sobre “*Mecanismos y procedimientos mínimos de seguridad, informes sobre actividades sospechosas*”, y “*Programa de cumplimiento del Acta sobre Secreto Bancario*”; entre

otras muchas normas sobre seguridad bancaria, control de transferencia al exterior, etcétera.

La cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero tiene actualmente diversas expresiones.

Cabe recordar: el trabajo del Grupo de Expertos de CICAD-OEA; las conferencias ministeriales interamericanas y sus trabajos en materia de blanqueo de dinero; la actividad de la Comisión de Estupefacientes y la Comisión sobre Prevención del Crimen y Justicia Criminal de la Organización de las Naciones Unidas; etcétera.

3. El presente proyecto

La primera cuestión que plantea todo proyecto sobre la materia que nos ocupa, es la relativa a la denominación de la actividad delictiva de que se trata.

Existen variadas posibilidades, desde la traducción literal de la expresión estadounidense *money laundering* —lavado de dinero—, hasta “*blanqueo de dinero*” —legislación de diversos países, particularmente España y Francia.

Hubimos de desear inicialmente la expresión “*legitimación de activos*”, empleada frecuentemente en el ámbito internacional y por proyectos presentados en nuestro medio, por cuanto entendemos que los activos provenientes de un delito no se legitiman como consecuencia de la comisión de las acciones que se procuran reprimir a través de las normas existentes en esta materia. A lo sumo, existe una intención dirigida hacia la legitimación; pero ésta se ve frustrada, aun después de realizada la acción típica, en el supuesto de descubrirse y comprobarse el delito.

Por ello, y aún a riesgo de emplear una expresión más metafórica que estrictamente técnica, hemos optado por la expresión, adoptada fundamentalmente por España y Francia, de “*blanqueo de dinero*”, que conceptúo preferible a su equivalente estadounidense “*lavado de dinero*”.

Consideramos que la multiplicidad de acciones mediante las cuales puede ser cometido este delito excluye la posibilidad de caracterizarla a través de una única expresión diversa a las antes mencionadas, que de todos modos resultan suficientemente gráficas para el ciudadano común, a quien están dirigidas las leyes, respecto de en qué consiste el delito que nos ocupa.

La caracterización de las acciones típicas ofrece otras dificultades.

Tras profunda meditación, hemos descartado la expresión francesa “*facilitar por cualquier medio la justificación engañosa de la procedencia de los bienes e ingresos del autor de un delito*” —que por su misma amplitud, no describe con claridad las acciones constitutivas del delito.

Hemos optado, siguiendo en lo fundamental las definiciones de la Convención de Viena y de la Di-

rectiva del Consejo de Europa, entre otras, por definir al blanqueo de dinero, instrumentos monetarios y otros bienes, como "la acción de disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios, u otros bienes".

Más concretamente, la norma penal básica que se propone crear, establece que:

"Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años y multa del doble al quintuple del monto de las sumas comprendidas en la acción, así como inhabilitación por doble término al de la condena, si la acción no constituyera un delito más severamente penado, quien disimulare, disfrazare, ocultare, o enmascarare por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

"Con la misma pena establecida en el párrafo anterior e idéntica reserva, será reprimido quien recibiere, retuviere, poseyere, convirtiere, adquiriere o invirtiere dinero, o instrumentos monetarios; o adquiriere, utilizare, poseyere, vendiere, permutare o realizare cualquier tipo de operación, con otros bienes; o transportare, transmitiere, transfiriere, o enviare dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, sabiendo que provenían de la comisión de un delito".

Otra opción no sencilla, es la relativa a definir al blanqueo de dinero considerando que el mismo puede tener lugar respecto del producto de cualquier delito, o bien que sólo puede tener lugar respecto de determinados delitos (narcotráfico, terrorismo, determinados delitos contra la administración pública, tráfico de órganos, secuestro extorsivo, trata de personas, delitos cometidos por organizaciones criminales, etcétera).

Conviene aquí recordar que este delito fue previsto inicialmente por la legislación de diversos países del mundo, exclusivamente con relación al narcotráfico; como aún sucede en nuestro país.

Posteriormente, y como consecuencia de recomendaciones internacionales, como la formulada por el Consejo de Europa, se fue extendiendo a otros delitos e incluso, en algunas legislaciones, a todos.

Por nuestra parte, a diferencia de los proyectos presentados hasta el momento en la Cámara de Diputados (incluyendo los remitidos por el Poder Ejecutivo nacional) y algunas legislaciones como la española, hemos seguido el criterio del Código Penal francés, conforme a la reforma efectuada en fecha relativamente reciente (ley del 23 de mayo de 1996), en cuanto a establecer una figura básica de blanqueo, definida en relación al producto de cualquier delito y no de determinados delitos; y una figura agravada, caracterizada en relación al producto de determinados delitos, así como a agravantes de otra índole.

Así, como consecuencia de la ley 96-392 del 13 de mayo de 1996, se creó en el Código Penal fran-

cés el capítulo IV titulado "Del blanqueo", con dos secciones.

La primera comprende el blanqueo simple y el "blanqueo agravado".

El "blanqueo simple" es definido como: "El blanqueo es el hecho de facilitar, por cualquier medio, la justificación falaz de la procedencia de los bienes o ingresos del autor de un crimen o un delito del que haya sacado un provecho directo o indirecto. Constituye también un blanqueo el hecho de coadyuvar a una operación de inversión, de disimulación o de conversión del producto directo o indirecto de un crimen y de un delito".

Las figuras agravadas comprenden tanto circunstancias en que ha sido cometido el delito, como la procedencia del dinero, bienes o efectos de determinados delitos.

Compartimos en tal sentido el argumento fundamental que justifica la reforma francesa, es decir, que los circuitos financieros fraudulentos, cualquiera sea el origen del fraude, están estrechamente mezclados y es difícil individualizarlos y aportar la prueba de sus orígenes específicos.

Consideramos, por otra parte, que constituye una tendencia en el mundo, la de ampliar progresivamente el espectro de delitos cuyos productos son abarcados por la figura del blanqueo de dinero.

Por otra parte, en el caso argentino, lo que en realidad se hace es caracterizar de modo más adecuado e incrementar las penas, de las ya previstas figuras del favorecimiento real y la recepción de cosas de procedencia sospechosa, aplicables a la totalidad de los delitos, a través de una figura básica de blanqueo de dinero.

En consecuencia, se propone establecer como figura básica, el blanqueo de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, disponiendo al respecto lo siguiente:

"Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años y multa del doble al quintuple del monto de las sumas comprendidas en la acción, así como inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si la acción no constituyera un delito más severamente penado, quien disimulare, disfrazare, ocultare o enmascarare por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

"Con la misma pena establecida en el párrafo anterior e idéntica reserva, será reprimido quien recibiere, retuviere, poseyere, convirtiere, adquiriere, ocultare o invirtiere dinero, o instrumentos monetarios; o adquiriere, utilizare, poseyere, ocultare, vendiere, permutare o realizare cualquier tipo de operación, con otros bienes; o transportare, transmitiere, transfiriere, o enviare dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, sabiendo, o debiendo saber conforme a las circunstancias, que provenían de la comisión de un delito.

"La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión, cuando el dinero, instrumentos monetarios o bienes, provinieran de delitos: 1) previstos en la legislación penal sobre estupefacientes; 2) Cometidos por organizaciones criminales o terroristas; 3) Relacionados con el tráfico de seres humanos o de órganos; 4) Vinculados con el contrabando de armas o explosivos; 5) De traición (artículos 214, 215 y 218 del Código Penal) o de espionaje (artículo 222, Código Penal); 6) Los delitos contra la administración pública contemplados en el artículo 174 inciso 5, o bien incluidos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI, libro segundo, del Código Penal de la Nación. 7) Los delitos contemplados en los artículos 168, 169 y 170 del Código Penal."

Artículo 279 ter: Se impondrá la pena de cinco a quince años de reclusión o prisión, así como multa del doble al quíntuple de la suma correspondiente al delito, e inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si no constituyera delito más severamente penado, por la comisión de las acciones previstas en el artículo anterior, en los siguientes casos:

1º - Cuando las aludidas acciones fueran cometidas de modo habitual.

2º - Cuando fueran realizadas con motivo del ejercicio de una actividad profesional.

3º - Cuando fueran realizadas por una organización criminal o terrorista.

4º - Cuando el imputado fuera funcionario público, y hubiera realizado la acción con motivo o en ocasión del desempeño de su cargo.

Como puede advertirse se define una figura básica y se establecen formas agravadas, relacionadas con la procedencia del dinero, bienes o efectos de determinados delitos de gran trascendencia social: narcotráfico, tráfico de seres humanos, de órganos, contrabando de armas o explosivos, traición y espionaje, así como con determinadas circunstancias, tales como: realización de las acciones típicas en forma habitual, o con motivo del ejercicio de una actividad profesional, o por parte de una organización criminal o terrorista, o bien por parte de un funcionario público, con motivo u ocasión del desempeño de su cargo.

Las figuras agravadas corresponden, en parte, a aquellas a las cuales está limitada en algunas legislaciones, como la española, y en los proyectos presentados en el Parlamento argentino.

Además de las figuras agravadas previstas respecto del dinero originado en distintos tipos de delitos, se contempla otro tipo de agravantes: los casos en que las acciones en cuestión fueran cometidas de modo habitual, cuando fueran realizadas con motivo de una actividad profesional, cuando fueran realizadas por una organización criminal o terrorista, y cuando el imputado fuera funcionario público, y hubiera realizado la acción con motivo o en ocasión del desempeño de su cargo.

No creemos excesiva la penalidad propuesta para esta agravante (reclusión de cinco a quince años, y multa del doble al quíntuple de la suma correspondiente al delito). El U. S. Code prevé para la figura básica del *money laundering*, prisión de hasta veinte años, o multa, o ambas penas conjuntamente.

También se prevé una forma culposa: la relativa a quien por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, da lugar a la comisión de la acción principal.

Como consecuencia de estas figuras, se propone suprimir del Código Penal las ya mencionadas figuras de favorecimiento real y recepción de cosas de procedencia sospechosa.

Otro aspecto que conceptúo de interés, es el relativo al órgano técnico destinado a colaborar en la prevención e investigación del delito.

Constituye una política seguida en los países que han emprendido la lucha contra este delito, la creación de organismos técnicos especializados en investigación financiera.

A nuestro criterio, los entes en cuestión no deben constituir organismos de inteligencia, ni juntas de funcionarios de alto rango; ni estar integrados por agentes de inteligencia, en todo o en parte.

Nos parece que la denominación de "Unidades de Inteligencia Financiera" -Financial Intelligence Units- adoptada para este tipo de órganos en los Estados Unidos de América, es explicable por la tendencia de ese país a una noción muy amplia de la palabra "inteligencia", que lo lleva a incluir en la misma a actividades de investigación policial. Ello ha dado lugar a la inclusión en los proyectos sobre este tema elaborados por el Poder Ejecutivo nacional y por legisladores del oficialismo de la Secretaría de Inteligencia de Estado entre los componentes de estos órganos. Ello, a nuestro juicio, es totalmente inadecuado, máxime considerando la acentuada politización y falta de control de este organismo, aspecto que ciertamente no promoverá la confianza en los destinatarios de la labor de estos órganos de investigación financiera, que son primariamente las entidades financieras.

Tampoco constituye la función de estos órganos, función, a nuestro criterio, la de constituir tribunales administrativos, ni órganos judiciales, ni de ser dotados de facultades cuasijurisdiccionales.

Un organismo relativamente pequeño y de alta especialización, dedicado a la investigación financiera y patrimonial, que se limita a remitir al Ministerio Público los elementos que obtiene, cuando resulta necesario promover la acción penal, constituye a nuestro juicio un diseño adecuado. Un modelo relativamente similar, sumamente interesante a nuestro criterio, es el Tracfin francés.

Su función debe ser exclusivamente la investigativa, sobre la base de la información que le deben enviar las personas físicas y jurídicas a las que se asigna responsabilidad en tal sentido, la que ob-

tenga a través de las denuncias que reciba, de las pericias que realice, de la explotación de la información pública que efectúe, y la que le sea suministrada por otros organismos públicos a través de la cooperación y recíproca coordinación de sus actividades.

Tampoco consideramos que el ente propuesto deba reunir la exclusividad en materia de investigaciones de lavado de dinero.

Estimamos, por el contrario, que el mismo debe intercambiar información y técnicas con otros organismos involucrados: Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana), Ministerio Público, instituciones policiales y fuerzas de seguridad, y Ministerio del Interior.

Párrafo aparte merece la cuestión relativa a la composición del organismo.

Consideramos adecuado que esté formado por un número relativamente reducido de funcionarios permanentes de alta calificación, incorporados a través de concurso público de antecedentes y oposición, que sean profesionales en las áreas jurídica, económica e informática.

También, por personal adscripto por períodos anuales, de los organismos cuyo quehacer está directamente vinculado a los aspectos a investigar: Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Economía, Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana), Ministerio de Justicia, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

Se propone que dicho personal se encuentre entre el mejor calificado de su organismo; y, a la vez, que reciba sobre sus haberes ordinarios un adicional, mientras permanezca en el expresado organismo investigativo.

Tales pautas habrán de facilitar que se envíe a los mejores funcionarios y no, como habitualmente sucede, que se remita a aquellos que resultan de menor utilidad en su organismo de origen.

También han sido establecidas en forma detallada obligaciones de identificación de clientes, brindar información relativa a transacciones sospechosas, conservación de documentos acreditativos de operaciones realizadas, guardar reserva respecto de la circunstancia de haber facilitado información al órgano investigativo, establecimiento de procedimientos y órganos adecuados de control interno, etcétera.

Tales obligaciones han sido impuestas, entre otras actividades, a bancos, entidades financieras, agentes de cambio y de bolsa, compañías de seguros, sociedades emisoras o gestoras de tarjetas de créditos o débito, así como a inmobiliarias, escribanos públicos, casinos y casas de juego, y a empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales.

Se faculta además al Poder Ejecutivo, para incluir toda otra actividad "...que, atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros instrumentos al portador como medio de cobro, al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos, al lugar de ubicación de los establecimientos, u otras circunstancias relevantes a la materia de la presente ley", resulte necesario hacerlo.

En definitiva, consideramos que este proyecto habrá de constituir un instrumento útil en la lucha contra el blanqueo de dinero, evitando a la vez la creación de organismos o el establecimiento de procedimientos que permitan la desnaturalización de este objetivo.

Por ello, presentamos este proyecto, para el que solicitamos el apoyo de nuestros pares.

Antonio T. Berhongaray.

Sr. Presidente. – Ponemos en consideración el artículo 7º del proyecto de ley de lavado de dinero.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: quiero plantear una reconsideración sobre el ya aprobado artículo 2º del presente proyecto de ley.

Me voy a tomar unos minutos para aclarar los antecedentes del artículo. La sanción de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de lavado de dinero introduce en sus formas delictuales el dolo directo, el eventual y la culpa. También agrava el delito cuando lo comete un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, el dictamen de las comisiones – estando como cabecera la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios – introduce la forma dolosa en su doble variante: la del dolo directo y la construcción jurisprudencial del dolo eventual, y agrava la figura cuando se trata de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

La propuesta efectuada por el senador Genoud establece la desaparición del dolo eventual y la figura agravada del funcionario público al instituirse la acción típica como la acción a sabiendas, es decir lo que se denomina dolo directo, eliminándose la forma eventual y la figura del funcionario público.

Quiero destacar lo que dije al comienzo de este debate, en el sentido de que se trataba de un tratamiento atípico. El apuro del Estado argentino de responder a las urgencias extranje-

ras en la sanción de la ley de lavado de dinero. la exigencia de la propia sociedad argentina que estaba esperando esta nos obligó a tener principalmente en cuenta que esta ley volvía a la Cámara de Diputados, y que a la postre, ésta sería la que determinaría el perfil definitivo de la iniciativa.

Consideramos que la sanción de Diputados era perjudicial para la sociedad argentina y para las personas comprometidas en la obligación de denunciar. También, que la calificación de delito culposo no correspondía en esta situación. Tan es así que en el antecedente de este proyecto, la Ley de Prevención y Represión del Narcotráfico, se instituyen en el artículo 25 el dolo directo y el eventual, al contemplarse el caso de quien sospecha y produce la acción que tiende a dar la apariencia de lícitos a fondos provenientes de un delito.

Quiero destacar que fuimos condicionados. Lo que se aprobó en definitiva, luego de consensuarse, fue el proyecto remitido por la Cámara de Diputados, con una tercera variante de interpretación sobre el artículo 2°. De ello dependía que la norma tuviera vigencia definitiva.

El apuro del trámite y la necesidad de mantener el quórum, dada la alta hora en que estábamos sesionando, no nos permitió arribar a la definición total de esta cuestión para que fuera aprobada. En ese momento manifestaron sus posiciones los senadores por Catamarca y por Entre Ríos, Villarroel y López, respectivamente.

Por una exigencia de la dirección de mi bloque quiero destacar que fuimos vapuleados por los diarios de circulación nacional, en los que se responsabiliza al bloque Justicialista de haber dejado fuera de esta norma a la mitad de las posibilidades respecto de los eventuales responsables de lavado de dinero en el país de los argentinos.

Nada más injusto, nada más agravante. Nuevamente se desinforma a la población. Nuevamente se echa la culpa al bloque Justicialista, cuando fue uno de los sostenedores del dolo eventual a través del dictamen de comisión que elaborara.

Comprendo también al senador Genoud, que debió actuar en consonancia con la Cámara de Diputados, la que a la postre impuso un artículo sobre el que el senador expresó que no le gustaba. A nosotros tampoco.

Las consideraciones del periodismo de circulación nacional y la repercusión en la sociedad nos mortifican. Nos imputan injustamente una actividad. Y nos preocupa porque, realmente, tienen razón aquellos que dijeron que debía introducirse el dolo eventual.

Por estas razones, formulo la moción de reconsideración para que se introduzca nuevamente la figura del dolo eventual dentro del texto del artículo 2° de este proyecto de ley. Además, que se contemple la figura agravada respecto del funcionario público. Obran en Secretaría las modificaciones que propongo a este artículo 2°.

Sr. Yoma. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por La Rioja.

Sr. Yoma. – Quiero hacer a la Presidencia una consulta de tipo reglamentario.

De acuerdo con el reglamento, ¿las reconsideraciones no deben ser hechas en la misma sesión?

Sr. Presidente. – No se comunicó la ley.

Sr. Yoma. – ¿Pero qué dice el reglamento? Lo pregunto dada la validez de la norma que estamos considerando.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se va a leer el artículo 151, correspondiente a la moción de reconsideración.

Sr. Secretario (Pontaquarto). – (*Lee:*) “Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever una sanción de la Cámara, sea en general o en particular, o la recaída sobre pedidos de acuerdos del Poder Ejecutivo.

Las mociones de reconsideración sólo podrán formularse mientras el asunto se encuentre pendiente o en la sesión en que quede terminado, y requerirán para su aceptación las dos terceras partes...”

Sr. Yoma. – Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente. – Está claro, ¿no? Puede ser tratada la moción de reconsideración.

Sr. Genoud. – ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. – Sí. Tiene la palabra el señor senador Genoud.

Sr. Genoud. – Para ubicarnos en el artículo cuya reconsideración plantea el bloque Justicialista, debemos decir que en la sesión pasada el referido bloque votó un texto que no

contó con la aprobación del bloque de la Alianza. Nuestro bloque votó el texto originario de la Cámara de Diputados. Nuestra intención es seguir insistiendo con el texto original de la Cámara de Diputados pero, atendiendo al pedido del bloque Justicialista, que pretende modificar el texto de su artículo —o sea, el artículo que votó por mayoría—, no tendríamos inconveniente en aceptar la reconsideración.

Sr. Pardo. — ¿Me permite una aclaración, señor presidente?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Es al solo efecto de dejar la cuestión perfectamente en claro.

El proyecto que se acercó se aprobó por 39 votos, con quince votos de la Alianza, a pesar de haber sido consensuado con el senador Genoud —porque fuimos los dos quienes actuamos en el consenso—; pero quiero destacar que ese artículo no es del bloque Justicialista. El artículo fue traído aquí —a sabiendas— en el proyecto del senador Genoud, que tengo a la vista, que él me mandó.

Además, el artículo que nosotros aprobamos vino de la Cámara de Diputados con la anuencia de la diputada Carrió, a la cual la Alianza ha seguido permanentemente en cuanto a la sanción de esta iniciativa. En este artículo nosotros no pusimos ni una sola palabra. Solamente hicimos lo necesario para lograr que salga una norma que, en base a las modificaciones posteriores, pueda tener algo de beneficio; no puede ser que todo sea perjudicial.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: afortunadamente para la sesión pasada nosotros preparamos, artículo por artículo, el proyecto originario con las modificaciones que proponíamos —debe obrar en las bancas de los señores senadores— y además está en la versión taquigráfica. Cuando nos tocó hablar sobre el artículo 2º, y así consta en la página que obra en poder de muchos de los senadores que intervienen en este tema, están las dos opciones: la primera, que hablaba de la intención de ocultar el origen ilícito, y la segunda, que dice entre paréntesis Diputados, que está en la misma página. Yo señalé que había dos opciones y también planteé que por decisión de nuestro bloque íbamos a votar la sanción originaria de Diputados. De tal modo

que quedó claro, está escrito y figura en la versión taquigráfica.

Ahora bien, la sanción que obtuvo este proyecto en la sesión pasada fue objeto de una modificación. Nosotros no tenemos dificultad en conceder los dos tercios para que se reconsidere ese texto, pero vamos a mantener la posición de votar el proyecto como venía de Diputados.

Se trata del único tema en el que hubo una diferencia de criterios que, por otra parte, fue bastante cordial y así quedó planteado durante la sesión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Está bien. Vamos a facilitar la tarea.

Lo único que queremos dejar en claro es que este tema, específicamente en cuanto a esta redacción que contradecía la de la Cámara de Diputados, en realidad nosotros la acordamos a partir de una propuesta del señor senador Genoud, que tenemos por escrito, en donde se establecía la dimensión del dolo que iba a animar el tipo penal que hacíamos punible.

Es decir que no fue originalmente de nuestro bloque. Pero admitimos que es una propuesta razonable y la incorporamos, teniendo en nuestro poder estos elementos.

Evidentemente, hay otro sector del bloque de la Alianza que considera que es mejor el texto del proyecto de ley venido en revisión. Y aparentemente es lo que hoy prima en la opinión mayoritaria.

Como nosotros estamos dispuestos a acompañar este tema, vamos a dejar de lado la redacción y votar el texto tal como lo propone el señor senador por Mendoza. Sólo queremos dejar en claro que esta modificación que hemos votado no tuvo su origen en una propuesta del bloque Justicialista.

Reitero pues que vamos a acompañar la moción de reconsideración y votar favorablemente el nuevo texto, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: voy a ser muy breve.

He pedido el uso de la palabra precisamente también para proponer que se vote este artículo tal como vino de la Cámara de Diputados, por-

que considero su redacción más precisa y no tan abarcativa ni genérica como la propuesta por la comisión.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de reconsideración formulada.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La Presidencia aclara que se requieren dos tercios de los votos.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada por unanimidad.

En consideración nuevamente el artículo 2º.

Sr. Alasino. — Solicito que por Secretaría se dé lectura al texto, señor presidente.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al texto del artículo.

Sr. Secretario (Pontaquarto). —(Lee:) “Artículo 278 bis. Inciso 1º. a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con conocimiento o sospecha de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de pesos cincuenta mil (\$50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el monto de lo ocultado sea superior a pesos doscientos mil (\$200.000), o cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación ilícita, o cuando sea funcionario público y actuare en el ejercicio de sus funciones. c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a), el autor será reprimido en su caso conforme a las reglas del artículo 277.

Inciso 2º. Los objetos a los que se refiere el delito previsto en el inciso 1º podrán ser decomisados.”

Sr. Genoud. — Señor presidente, ¿me permite?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Bueno; ante todo debo decir que éste es el artículo más importante porque es el que establece el tipo penal doloso. Por eso quizá me demore un poco.

Con absoluta franqueza señalo que el texto que me habían entregado hace una hora no se compadece con el que se ha leído por Secretaría. El que yo tenía —según me dijeron mis asesores— es el que provenía del señor presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y hablaba de la intención de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito.

También debo decir que así, a primera vista —escucho por primera vez este texto— me parece mejor que se señale expresamente “con conocimiento o sospecha de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”. De tal modo que sin haber hablado con los demás miembros de nuestro bloque me parece mejor toda vez que establece el conocimiento —que es la intención directa— o la sospecha —que es el típico dolo eventual—.

En estas condiciones y no habiendo mayor alteración de texto, en lo personal —porque, como digo, no lo hemos discutido en el bloque— voto afirmativamente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: me alegro de que el señor senador Genoud concuerde con el artículo tal cual nosotros lo hemos redactado.

Acá establecemos el dolo con conocimiento o sospecha. La sospecha es el dolo eventual creado jurisprudencialmente, que es aquel con el que actúa quien, teniendo la representación del resultado, igualmente efectúa el acto.

Con respecto a la posibilidad de que nosotros hayamos cambiado el dictamen, quiero adelantarle al señor senador Genoud que este artículo fue fotocopiado y le fue enviado a través de su asesor, que es el joven que está allí sentado. Me alegra entonces que concordemos con el señor senador por Mendoza.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: algunos señores senadores de nuestro bloque me han hecho llegar una fotocopia, que contiene el mismo texto que obra sobre mi banca, que no es el que se ha leído por Secretaría. Pero afortunadamente me gusta más el texto que se ha leído recientemente, porque consagra el dolo eventual.

Creo que no todos los senadores han tenido la posibilidad de estudiar esta norma con detenimiento; en el resto de los artículos el texto está escrito y se lo ha podido compulsar.

En lo personal, señor presidente, quiero adelantar mi voto afirmativo para el texto que se ha leído por Secretaría y solicito que se reitere su lectura.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: no sé si el señor secretario es más joven que el joven que me entregó el papel. Digo esto porque no hace más de diez minutos que el joven, que es un asesor, me ha dado una fotocopia en la que se habla de intención pero no se dice nada acerca de la cuestión de la sospecha. En consecuencia, estoy en la misma situación que la planteada por el señor senador por Mendoza, salvo que al secretario del cuerpo se lo considere más joven que al joven que me acercó la copia.

De todas formas, yendo a la cuestión en sí, concuerdo en que es mejor esta variación en el texto porque, de esta forma, se contempla el dolo eventual. En efecto, de no ser así, quedaba un hueco porque, por un lado, se contemplaba una figura culposa y, por el otro, una figura de intención o de dolo directo, no quedando encuadrado el dolo eventual. En consecuencia, voy a acompañar esta fórmula que habla de la sospecha entendiendo que la misma se refiere al dolo eventual.

Sr. Presidente. — Creo que estamos todos de acuerdo.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Simplemente quería destacar, señor presidente, que no pretendía llevarme los méritos de esta redacción del artículo, en la que ha colaborado el joven asesor del señor senador Genoud.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: dado que no estuve presente en la sesión anterior voy a abusar un poco de la paciencia de los integrantes de la Cámara.

Este artículo, que define el tipo penal, no incluye la inhabilitación para los casos de funcionarios públicos que intervengan en hechos de lavado de dinero; ¿es así?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — En el dictamen originario de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios se optó, frente a la inhabilitación, por una pena agravada de multa. ¿Quién nombraría en la función pública a alguien que tuviera una condena en un proceso por lavado de dinero? Preferimos entonces establecer la pena de multa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: yo voy a proponer que, en forma taxativa, aquel funcionario público condenado por lavado de dinero reciba como accesoria la condena de inhabilitación porque, no obstante lo manifestado por el señor senador por Corrientes, creo que esos hechos pueden ocurrir. Considero entonces que lo más razonable es la condena de inhabilitación para el caso del funcionario público.

Sr. Pardo. — La comisión acepta la modificación propuesta por el señor senador Yoma.

Sr. Presidente. — Es necesario hacer llegar a Secretaría el texto propuesto a los efectos de su incorporación al artículo.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: quedaría redactado de la siguiente forma: "...cuando sea funcionario público y actuare en el ejercicio de sus funciones. En este caso le corresponderá como accesoria de la condena la pena de inhabilitación".

Sr. Pardo. — "...de inhabilitación absoluta".

Sr. Yoma. — De acuerdo, "...de inhabilitación absoluta".

Sr. Genoud. — ¿Es perpetua? Se puede decir inhabilitación absoluta y perpetua...

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a la redacción definitiva del artículo 2º.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Yoma. — "...absoluta y perpetua", para que no se extinga con la pena principal.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (Lee:) "Artículo 278 bis: Inciso 1º a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez

veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado con conocimiento o sospecha de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de pesos cincuenta mil (\$50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el monto de lo ocultado sea superior a pesos doscientos mil (\$200.000), o cuando el autor realizare el hecho con habitualidad, o como miembro de una asociación ilícita, o cuando sea funcionario público y actuare en el ejercicio de sus funciones. En este caso le corresponderá, como accesoría, la pena de inhabilitación absoluta y perpetua.

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a), el autor será reprimido en su caso conforme a las reglas del artículo 277.

Inciso 2º. Los objetos a los que se refiere el delito previsto en el inciso 1º podrán ser decomisados."

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: quiero hacer una pregunta para una aclaración al presidente de la comisión o tal vez al señor senador Yoma que es quien hizo la propuesta.

¿Estamos hablando de inhabilitación para ocupar funciones públicas o de inhabilitación en el concepto más amplio de la palabra? En ese caso, me parece que falta una pequeñísima precisión.

Sr. Pardo. — Señor presidente: considero que es innecesario porque justamente estamos hablando del funcionario público en ejercicio de sus funciones. Indudablemente, nos estamos refiriendo al funcionario público, porque agravamos la pena de una manera absoluta por la calidad que inviste y las posibilidades que tiene de actuar en lavado de dinero el sujeto activo de esta parte del delito.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. — Mi duda surge, justamente, por el término "absoluta", que pue-

de ser entendido en el concepto más amplio y, por lo tanto, estaríamos decretando —ojalá fuera así— la muerte civil.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — El señor senador Genoud planteó la misma cuestión y el señor senador Yoma le dijo que era en cuanto al límite temporal; o sea, que es a perpetuidad. Pero si entienden que esto puede provocar confusión, no tenemos problema en eliminar el término "absoluta" y que quede "inhabilitación perpetua".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Voy a hacer una pregunta y una aclaración.

En primer lugar, la inhabilitación absoluta no es exactamente una muerte civil, pero casi se le parece; me refiero a la que establece el artículo 19 del Código Penal. A mí me parece excesiva. Pero también quiero dejar constancia de que me parece excesivo el mínimo de cinco años; realmente, como margen penal mínimo, me parece excesivo. He votado el artículo, pero sobre ese mínimo y sobre lo absoluto de la inhabilitación tengo una opinión adversa.

Sr. Presidente. — Señor senador Villarroel: se votó la reconsideración.

Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Oudín. — Voy a hacer referencia al tema planteado por el señor senador Molinari Romero. Si bien es cierto que queda como interpretación auténtica que es para ocupar un cargo público, me parece conveniente aclarar en el artículo ese tema. Si no, ocurre lo que dice el señor senador Villarroel, en cuanto a que la inhabilitación absoluta va mucho más allá que ocupar simplemente un cargo público.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: el Código Penal utiliza indistintamente los términos "inhabilitación absoluta" e "inhabilitación absoluta perpetua". Por ejemplo, en el capítulo IX del Código Penal, en el artículo 268 se dice que "...será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que convirtiere en provecho propio...", etcétera. Y en el artículo siguiente, el que trata el tema del enriquecimiento ilícito—268 bis del mis-

mo Código—, se habla solamente de la “inhabilitación absoluta” y no se incorpora el carácter de perpetua.

Siguiendo la terminología del Código Penal creo que sería conveniente utilizar el mismo tipo de redacción del artículo 268; es decir, “inhabilitación absoluta perpetua”, ya que el término absoluto no se refiere a lo temporal, sino que tiene que ver con las características propias de la inhabilitación, y esto ya forma parte de disquisiciones doctrinarias. El término “perpetua” le da el carácter de atemporal.

Por consiguiente, propongo que se utilice la fórmula “inhabilitación absoluta perpetua”.

Algo más: en cuanto a las dudas que plantea el señor senador Villarroel, que yo comparto, me parece que ya que estamos debatiendo este artículo sería interesante corregir algún aspecto en el sentido que planteó el señor senador por Catamarca. Porque, quizá, sería correcto atenuar la pena cuando el delito principal, el que genera el lavado de dinero, tenga una pena equivalente a la del lavado o establecer una fórmula que implique que el delito de lavado tendrá como pena la equivalente al delito de que se trate. De lo contrario, el que hurta o roba un cuadro o algún bien de valor tendrá una pena menor que el que produce el ingreso del dinero producto del ilícito. Creo que para establecer un equilibrio en las penas, debería seguir la misma suerte de la pena del delito principal, que es el que origina el lavado. Así se eliminaría, quizá, la prevención que planteó el señor senador Villarroel en cuanto a que habría mínimos excesivamente altos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Al igual que acaba de sostener el señor senador Yoma, en lo que se refiere a la proporcionalidad de la represión punitiva a cargo del Estado ante una determinada acción —o sea, ante “tal” acción “tal” sanción—, considero que la lectura de los artículos anteriores demuestra la existencia perpetua de la inhabilitación. Los dos aspectos, la proporcionalidad y el aumento del mínimo, responden exclusivamente a que se trata de un funcionario público en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué se agrava? Por la facilidad que tiene el funcionario público de producir el lavado. Imaginémosnos una valija diplomática por la que se introduzca dinero para ser lavado en el país. Es decir que el funciona-

rio tiene mayores posibilidades de lavar dinero. Imaginemos también a un director del Banco Central, a un gerente o a otro funcionario con esas facilidades. Entonces, he ahí el porqué del aumento. ¿Y por qué aumentamos a cinco años? Porque si aceptamos la figura de dos a diez años le damos la posibilidad al funcionario público de que obtenga una condena de ejecución condicional.

Preguntaría cuál sería la resonancia en la sociedad si a un miembro de la Cancillería o a cualquier otro que pueda pasar sin revisión se le descubre una valija diplomática con dinero para ser lavado y resulta que obtiene la libertad inmediatamente. Les puedo asegurar que, realmente, esto no respondería a las aspiraciones, anhelos y necesidades de la sociedad respecto al principio de la necesaria convalidación de lo fáctico, que es que la ley sea el resultado de la creación en la sociedad. En este caso, la nuestra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: creo que estamos entrando en confusiones por no atenernos a una regla simple.

El Código Penal tiene una parte general. En ella, entre otras cosas, se determina la entidad, el grado y la calidad de las penas. Y respecto a la inhabilitación tiene un par de normas que son los artículos 19 y 20.

El artículo 19 dice en qué consiste la inhabilitación absoluta y el artículo 20 dice en qué consiste la inhabilitación especial. Precisamente, en lo pertinente ese artículo dice lo siguiente: “Artículo 20. — La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena, aquellos sobre que recayere.” O sea, si se trata de un funcionario público, la inhabilitación especial implica que ese señor no se podrá desempeñar en adelante en la función pública. Esa me parece que es la sanción apropiada al género de la falta, a la calidad de la falta.

Entonces, sugiero concretamente que, en todo caso, se diga inhabilitación especial. También podría ser perpetua, pero sí especial para que quede claro.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: podría ser indistintamente porque la doctrina no sabe diferenciar lo que es establecer algún límite en lo que corresponde a la inhabilitación absoluta y la especial. En realidad, no hay grandes diferencias así que bien se puede tomar la propuesta del señor senador Villarroel.

Señor presidente: dando lectura a la sanción de la Cámara de Diputados en este tema, observo que si aprobamos la norma tal cual viene de aquella Cámara contemplamos las dudas y prevenciones que se han planteado.

Por ejemplo, la sanción de Diputados, en la última parte del artículo y por el 279 establece que si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. Entonces, de alguna manera contempla las inquietudes que aquí se han planteado.

El dictamen de la comisión también dejó afuera algo que es importante y que sí figura en la sanción de la Cámara de Diputados.

En el punto 4 del 279 que propone la Cámara de Diputados se dice que las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiese sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código. Es decir, en un país extranjero. En este caso, el aspecto citado quedó fuera del dictamen de la comisión. Me refiero a cuando se lava dinero por hechos ilícitos producidos en otro país.

Creo que lo más atinado para salvar todas las dudas que se han planteado es tomar la sanción tal como la realizó la Cámara de Diputados y votarla sin modificaciones.

Con las observaciones aceptadas por la comisión nos acercamos a lo que puede ser un consenso en este tema.

Entonces, para terminar con las dudas, creo que es correcta la sanción de la Cámara de Diputados, agregando lo propuesto por el señor senador Villarroel en el sentido de inhabilitación especial y perpetua.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: las consecuencias de un hecho delictivo producido en el extranjero, únicamente caen en la jurisdicción ar-

gentina cuando sus efectos se producen dentro del territorio nacional.

Así lo define el artículo 1º del Código Penal. Por eso esta comisión no recogió la opinión de la Cámara de Diputados.

Además, quiero destacarle al senador Yoma que la eliminación de este artículo de las pautas que él señala fue concertada con la Cámara de Diputados a fin de lograr que esta ley tenga la aceptación de dicho cuerpo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: simplemente quiero dejar a salvo que no estoy de acuerdo con esto de equiparar, porque acá se han dado muy buenas razones cuando se trató el tema de la inhabilitación del funcionario público, aduciendo que su condición le facilita cometer el delito. Eso está muy bien desde ese punto de vista.

Lo que no considero viable es la equivalencia en equiparar esto con el monto. Es decir, esto pasa cuando supera los 200 mil pesos, o cuando se trata de un funcionario público.

Me parece que no hay una equivalencia en los valores que se defienden o que tipifican la figura. Por un lado "o cuando sea superior a 200 mil pesos", y por otro, "cuando sea un funcionario público".

Me parece que no son situaciones equiparables.

Quiero dejar a salvo que no estoy de acuerdo con esta forma de equiparar situaciones que no tienen nada que ver entre sí. Por un lado, el monto y por el otro, la condición de funcionario público o formar parte de una asociación ilícita.

Sr. Presidente. — Senador Pardo, habría que redactar el texto que se va poner en consideración, y saldar este debate.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: antes de que se haga la redacción definitiva, quiero manifestar que no estoy de acuerdo con una expresión del artículo cuando alude a que se realizare el hecho con habitualidad.

Este término está muy cuestionado por la jurisprudencia, ya en el artículo 278 del Código Penal, toda vez que no se sabe qué es habitualidad: dos hechos, ocho hechos, en un año, en un mes...

Este es un problema bastante difícil, pues se podría acusar a esta ley de ser una norma abierta

por representar una peligrosa ampliación del tipo penal.

Por eso, la mayoría de las reformulaciones que se han hecho en el Código Penal —cuando en definitiva quieren presupuestar ese hecho objetivo—, hacen referencia a la situación de que el autor registrare una o más condenas anteriores por el mismo delito. De lo contrario, caeríamos otra vez en la crítica de la jurisprudencia y la doctrina respecto de qué es la habitualidad.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: es a los efectos de solicitar un cuarto intermedio en las bancas por cinco minutos, para hacer la redacción final en una forma consensuada con la Alianza.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Se pasa a cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas.

—Son las 20 y 24.

—A las 20 y 28:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Si los señores senadores toman asiento, podremos votar el artículo de acuerdo con el texto definitivo que se propone.

—Se llama para votar.

Sr. Presidente. — Estamos esperando obtener el quórum. Si los señores senadores que aún permanecen de pie toman asiento, podremos leer el texto propuesto por Secretaría para su posterior votación.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: quiero ordenar el tema. El texto propuesto para el artículo en consideración es el que obra en Secretaría, con el aditamento de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura del texto definitivo del artículo en consideración.

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (*Lee:*) “Artículo 278 bis. Inciso 1°. a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces el monto de la operación el que convirtiere,

transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado con conocimiento o sospecha de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de 50.000 pesos, sea en un solo acto o con la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión cuando el monto de lo ocultado sea superior a pesos 200.000 o cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación ilícita o cuando sea funcionario público y actuare en el ejercicio de sus funciones. En este caso, le corresponderá, como accesorio, la pena de inhabilitación especial y perpetua para ocupar cargos públicos.

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a), el autor será reprimido en su caso conforme a las reglas del artículo 277.

Inciso 2°. Los objetos a los que refiere el delito previsto en el inciso 1° podrán ser decomisados”.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo que acaba de ser leído.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado por unanimidad.

Corresponde la consideración del artículo 7°.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: en este artículo se han introducido algunas modificaciones que establecen que el órgano de aplicación, que es la Unidad de Información Financiera, tendrá once miembros: un funcionario del Banco Central, un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, un funcionario de la Comisión Nacional de Valores, un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción, un funcionario del Ministerio de Justicia, un funcionario del Ministerio de Economía de la Nación y cinco expertos financieros. En este artículo está el mecanismo por el cual esos funcionarios deben ser elegidos.

Se agrega un par de conceptos que estaban ausentes en la sanción de la Cámara de Diputados. Los propios diputados advirtieron el error relativo al acto formal de designación, que debe estar a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Pese a que existe un concurso para la designación de los miembros, la designación formal corresponde al Poder Ejecutivo.

Estas son las modificaciones. Si hubiese alguna duda, que se lea por Secretaría íntegramente el artículo. Y solicito que se vote tal cual va a ser leído por Secretaría Parlamentaria.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en lo único que concuerdo con las observaciones del señor Genoud es en la reducción de los miembros y la eliminación de los legisladores como miembros de la UIF. Pero desde ya creo que las modificaciones propuestas —lo digo con absoluto respeto— son pésimas en lo que se refiere a la eficacia del organismo. Se va a transformar en una dependencia burocrática del poder administrador. ¿Cuál es el hecho de que se pueble de funcionarios públicos al organismo que va a controlar las operaciones de lavado? Además tengo entendido que también el Poder Ejecutivo va a seleccionar a los profesionales.

Yo creo que se está haciendo una ley que no va a servir absolutamente para nada. Es una ley para engañar y para decir que se está haciendo algo cuando no se está haciendo nada. Estamos creando un organismo que va a ser un apéndice del poder político, con dependencia funcional, jerárquica, administrativa y política inclusive de estamentos objeto de investigaciones de lavado, porque precisamente los funcionarios de las áreas económicas que pueden ser objeto de esas investigaciones son los que nominan los funcionarios e integran el organismo que los va a controlar a ellos mismos.

Realmente creo que estas propuestas del senador Genoud van a transformar a este organismo en algo totalmente amorfo, inservible y sin efecto alguno, absolutamente burocrático y que no sirve para nada a los efectos que está buscando esta ley y está esperando la sociedad.

Señor presidente: al respecto, sería bueno tratar en lo posible de buscar un consenso en torno de esta ley. También acepto que esto comienza mal, desde un principio, cuando se modifica el carácter autónomo de la UIF. Cuando en la san-

ción de Diputados la UIF es un ente autónomo, con autonomía absoluta de cualquiera de los poderes del Estado, como funciona en los países modernos, obviamente, tiene un sentido.

Ahora, cuando de acuerdo con las modificaciones que propone la Alianza, la UIF pasa a ser un apéndice del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, por supuesto que los hombres y mujeres que la integren van a ser funcionarios públicos propuestos por el poder político con dependencia financiera, económica, política, jerárquica y funcional y no van a investigar absolutamente nada. Para lo único que pueden llegar a servir es para hacer operaciones políticas con el tema de lavado de dinero.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: lamento muchísimo que el senador Yoma no haya estado presente en la sesión pasada porque, pese a que este tema lo abordamos con gran celeridad porque estábamos a punto de perder el quórum, este artículo de la autarquía o no de la UIF, órgano de aplicación de esta ley, lo expusimos *in extenso* y con argumentos incontestables.

En primer lugar cité todas las legislaciones del mundo sobre lavado de dinero y señalé que en ninguna de ellas el organismo era autárquico, y que en todos los casos dependía del Ministerio de Economía, de Justicia, del Interior, de la policía, país por país.

En segundo lugar, señalé cuáles eran las recomendaciones de la OEA y del grupo CAFI, del cual forma parte la Argentina, que es un organismo que controla —precisamente— el lavado de dinero en todos los países del mundo y que aconseja la sanción de leyes en esta dirección. Y en todos ellos el organismo de aplicación depende de algún área del Poder Ejecutivo.

También señalamos cuáles eran las dificultades de una autarquía absoluta y las distintas hipótesis que se habían analizado, que dependiera del Banco Central, de Economía, de Justicia. Por último se había aceptado que si este organismo funcionalmente autárquico debía estar dentro del área de algún ministerio, debía ser el de Justicia.

Además, en el dilatado trámite de este proyecto en la Cámara de Senadores tuvimos consultas repetidas con legisladores muy activos de la Cámara de Diputados que estaban preocupados por este tema y, además, en la necesidad

de consensuar un texto. Y terminaron por admitir que la redacción que le habíamos dado al artículo pertinente era razonable. De tal modo que no va a tener tropiezo alguno que este organismo autárquico, desde el punto de vista funcional, esté en el área de Justicia.

La segunda reflexión que hago a la intervención que hizo el senador por La Rioja es que siempre, desde aquella sesión en la que él sostuvo que este proyecto debía aprobarse como venía de la Cámara de Diputados, estuvo de acuerdo con su texto. Y el texto de la Cámara de Diputados establecía nueve miembros: cinco expertos que se elegían a través de un jurado que ha sido restituido al texto de la ley y cuatro representantes: uno del Banco Central, uno de la administración de la AFIP, otro de la Comisión Nacional de Valores y otro de la Secretaría de Lucha contra la Adicción. Después hubo un dictamen por el cual se agregaban legisladores: tres diputados y tres senadores. Por último, decidimos eliminar a los legisladores. Quedó el texto íntegro de Diputados, nada más que se incorporó un representante del Ministerio de Economía. Y nos pareció razonable que como esto va a estar dentro del área de Justicia, se incorporara un representante del área. Esto no representa una modificación sustancial a lo que había aprobado la Cámara de Diputados. Simplemente se agregan dos representantes: uno de Justicia y uno de Economía. Y sí se subsana un defecto formal que tenía el texto de la Cámara baja, que es quien en definitiva ordenaba la designación formal. Ello corresponde, obviamente, al Poder Ejecutivo, observando los mecanismos para elegir unos y otros, tal como lo consagra el artículo 7°.

Sr. Yoma. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en la enumeración del derecho comparado realizada recién por el senador Genoud se le olvidó mencionar a Gran Bretaña, por ejemplo, cuyo organismo depende del Ministerio Público. ¿Cómo será que tiene autonomía que depende de los fiscales! Es más, creo que sería la solución correcta. No depende del poder político.

Así que es absolutamente falso que en el derecho comparado siempre tiene dependencia del poder político. De ninguna manera. En la mayoría de los países no depende del poder políti-

co. En todo caso, depende de otros organismos del Estado pero que no tienen que ver con el poder político. Reitero: en Gran Bretaña depende del Ministerio Público, que es lo correcto.

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción muy breve?

Sr. Presidente. — ¿El senador por La Rioja terminó?

Sr. Yoma. — No; le permito la interrupción al senador.

Sr. Genoud. — Es una interrupción amable, como todas las que le hago al senador por La Rioja.

Quizás tenemos documentación distinta. El trabajo suministrado por nuestros asesores, después de haber hecho las consultas pertinentes en las embajadas y por Internet, arroja que en el Reino Unido existe el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, NCIS, y concretamente en el lavado de dinero es un ente autónomo que está bajo la órbita del Ministerio del Interior.

En algunos países es cierto que hay participación de los fiscales. Concretamente, en Holanda. Precisamente porque la jurisdicción del órgano autárquico es el Ministerio de Justicia.

Sr. Presidente. — Continúa en uso de la palabra el senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: podemos constatarlo, pero en el Reino Unido la UIF es un organismo policial dependiente del Ministerio Público, taxativamente...

Sr. Genoud. — Entonces agregamos una cosa nueva, porque es policial...

Sr. Yoma. — Consulte bien a sus asesores, senador Genoud.

De todos modos, sobre lo que no cabe ninguna duda es que el organismo que se crea por esta iniciativa, desvirtuando el sentido de la sanción de Diputados y el espíritu que reina en la sociedad respecto de este tipo de instituciones, de acuerdo con lo que estamos sancionando, es una herramienta política del poder político de turno, cuyos integrantes son funcionarios públicos dependientes del poder político de turno. Y aquellos supuestos especialistas también son seleccionados por el poder político de turno. Reitero: no tiene nada que ver con lo que en el resto de los países y en el derecho comparado es esta unidad que, si bien es cierto que tiene dependencia con los organismos del Estado, no la tiene respecto del poder político.

Por eso digo: quizá no valga la pena que insista en este artículo 7° respecto de cómo se eligen los integrantes porque el problema viene de antes, de cuando se le otorgó dependencia a lo que no tiene que ser dependiente. Éste es el problema.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: creo que la discusión nos está llevando a rever artículos que ya han sido aprobados en la sesión anterior...

Sr. Presidente. — Perdón, senador Pardo, pero estamos discutiendo un artículo que no fue aprobado en la sesión anterior...

Sr. Pardo. — No; acá se llegó a discutir si la UIF depende del Banco Central, del Ministerio de Economía o de algún otro ente.

Quiero referirme al artículo 5°, pero el senador Vaquir me está solicitando una interrupción...

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Santiago del Estero.

Sr. Vaquir. — Más que pedirle una interrupción al senador Pardo, quisiera que él tratara de expresar e interpretar lo que considero tiene que ser la representación, sea desde el punto de vista de los llamados expertos o de los derivados del ámbito político que tanto cuestiona, quizá con derecho, el senador Yoma, de que se deja afuera un campo que creo es específico, fundamental y columna vertebral de todo lo que es narcolavado o lavado de dinero. Se trata de las relaciones internacionales; no las veo mencionadas en ningún lado. Hoy se lo he planteado al señor canciller y, en realidad, va a ser motivo de análisis de la Cancillería.

Si esto es para politizar, si lo que se nombra es un embajador especialista en el tema, volvemos a la discusión de que politizamos. Creo que no se puede prescindir, en un tema de estas características, de que tengamos algún experto o representante específico de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en el conocimiento de este tema que es narcolavado.

Sr. Presidente. — Gracias; continúa en uso de la palabra el señor senador Pardo.

Sr. Pardo. — Le solicito al señor senador Vaquir que concrete si la propuesta es incluir un representante de la Cancillería dentro del enunciado de quienes integran la UIF.

Sr. Presidente. — Senador Vaquir...

Sr. Vaquir. — Yo diría que tiene que ser un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores con rango de embajador.

Sr. Presidente. — Senador Pardo...

Sr. Pardo. — En atención a la amplitud que se ha dado a esta Unidad de Información Financiera y a los argumentos expuestos acerca de la necesidad de que cuando esta unidad de investigación tenga que realizar alguna actividad en el exterior se tenga dentro de ella un representante de la Cancillería a los efectos de coordinar la actividad de la representación de la referida unidad en el exterior, esta Comisión no tendría problemas en incluir un miembro más.

Sr. Presidente. — Senador Vaquir...

Sr. Vaquir. — Quiero expresar una aclaración que me hace el senador Moreau muy acertadamente.

Puede ser un embajador artículo 5°, que una vez que ha sido designado embajador tiene los mismos derechos...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Vaquir. — No, no; justamente, no hay sospecha.

La condición de artículo 5° lo coloca en igualdad de condiciones con cualquier embajador después de que obtiene el acuerdo del Senado y la designación del presidente.

Sr. Presidente. — Senador Pardo...

Sr. Pardo. — Señor presidente: creo que esta es una discusión casi bizantina.

En el proyecto que estamos tratando ya existe la forma de elegir a los representantes de los organismos. Aquellos expertos que no representan a organismos van a ser elegidos por una comisión *ad hoc* mediante los antecedentes y la oposición. Que el mismo sistema que se emplea respecto de aquellos que son representantes de organismos se utilice en la Cancillería.

Sr. Presidente. — Senador Villarroel...

Sr. Villarroel. — Señor presidente: en tren de aportar brevemente alguna precisión a la cuestión, debo decir que ya se votó —y no hubo reconsideración— dónde se ubica este famoso órgano, que, tal como estoy escuchando, amenaza con convertirse en una multitud, en vez de ser una unidad (*Risas*), y por otra parte amenaza también con que para sus relaciones con el exterior habrá de necesitar el Tango 01, a fuer de espacioso. (*Risas*.)

También escucho que se pone en duda la imparcialidad del órgano, habida cuenta de su origen político, etcétera. Creo que se está sobredimensionando el papel real que cumple este órgano, la UIF ¿Por qué? Porque su función, según el proyecto —tanto el de senadores, que se está manejando, como el de diputados—, es la de investigar y, en su caso, llegado el momento, formular denuncias ante el Ministerio Público, a efectos de que inicie la acción. Aún respecto de lo que se ha dado en llamar responsabilidades penales administrativas, su decisión final está subordinada a lo que suceda en sede penal, si es que hay una denuncia. Porque existe una norma expresa que dice que para estas relaciones entre la cuestión administrativa y la penal se han de observar las reglas de prejudicialidad del artículo 1.101 y concordantes del Código Civil.

Me parece que estamos exagerando el carácter decisivo que la función de este órgano pueda tener en la suerte de cualquier habitante de este país, político o no; se la está exagerando.

Por otra parte, cuando se habla del ministerio público y se hace referencia al derecho comparado, hay que tener mucho cuidado porque se debe advertir que no todos los países tienen la misma organización judicial. Por ejemplo, hay países como los Estados Unidos de América donde los fiscales son funcionarios electivos; son políticos con todas las letras. Ganan las elecciones juntando votos como cualquier político y ejercen su función de fiscales también con los parámetros de la política. Así eligen las causas —algunas para llevarlas adelante y otras no—, con el criterio de oportunidad vigente en los Estados Unidos.

Entonces, me parece que estamos exagerando la importancia de la cuestión. Ya se ha votado, ya se ha aprobado y yo sugeriría respetuosamente a mis colegas que sigamos adelante para, de una vez por todas, terminar con este tema.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en lo que sí coincido con el señor senador Villarroel es en la absoluta ineficacia de lo que estamos creando. Considero que esto no sirve para nada, que lo que estamos sancionando no sirve para nada.

Pero de acuerdo con el texto del proyecto de ley, tal como fue concebida cuando era autónoma, la UIF no es un organismo menor. Puede

solicitar medidas que solamente se piden en procesos instructorios de causas penales. Y aunque no haya causas penales en trámite, puede solicitar determinadas medidas que sólo son sustanciadas cuando existen causas penales. Entonces, reitero, no es un organismo menor.

Creo que sí se presta a herramienta política. No se presta para investigar delitos del lavado sino para hacer operaciones políticas; nada más. Pero, bueno, éste es el sentido que quiere dar el oficialismo a este tema.

Pasemos a votar, pero que conste que mi posición es la que acabo de manifestar, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: muy brevemente —porque creo que el tema no da para más— quiero manifestar que, como el señor senador Villarroel, pienso que en la medida en que se vaya aumentando la cantidad de miembros de esta comisión, realmente se podrían buscar otros ministerios que puedan ser incluidos.

Creo que la comisión ya es demasiado numerosa y, en consecuencia, no correspondería seguir ampliando el número de miembros. No olvidemos que las comisiones numerosas generalmente no cumplen su cometido con eficiencia.

Por otra parte, debo decir sólo a título aclaratorio que esta unidad funcional tiene autarquía. En consecuencia, no se trata de un organismo subordinado al poder político, señor presidente. Se encuentra dentro de la jurisdicción del Ministerio de Justicia pero es un organismo autárquico. De manera tal que los prejuicios que ha mencionado el señor senador Yoma son equivocados.

El proyecto de ley es claro. Además, este tema ya ha sido ampliamente discutido y aprobado. En consecuencia, considero que no corresponde volver a abordarlo.

Sr. Presidente. — Gracias, señor senador Maglietti.

Senador Pardo: ¿cuál sería el texto definitivo del artículo? ¿El que obra en Secretaría?

—Murmulló en el recinto.

Sr. Pardo. — Señor presidente: la comisión acepta la modificación propuesta, con la inclusión de un representante de Cancillería.

Sr. Genoud. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Genoud.

Sr. Genoud. — Yo solicitaría al señor presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios que en lugar de aumentar en un miembro la cantidad de integrantes de la UIF —que la llevaría a doce y nos obligaría a modificar otros artículos que hacen mención al quórum, etcétera, etcétera—, incorporemos al Ministerio de Relaciones Exteriores en el artículo 11.

Entonces, al establecer que la Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Prevención, etcétera, etcétera, se podría incluir allí al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Yo incorporaría a ese integrante en el artículo 11 y no como miembro pleno de la UIF, siempre en el marco de la prevención de no crear una comisión demasiado numerosa.

Yo me pregunto lo siguiente: si el senador Yoma estaba tan entusiasmado con votar un órgano de nueve miembros, como venía de la Cámara de Diputados, ¿por qué en términos maximalistas dice que este órgano no sirve para nada porque se han incorporado dos miembros más: uno de Economía y uno de Justicia?

Además, hago una amistosa exhortación al señor senador Yoma en el sentido de que venga a todas las sesiones. De lo contrario, nos obliga a hacer una suerte de ballottage, a discutir dos veces el mismo tema.

Sr. Presidente. — ¿El señor senador Yoma quiere agregar algo más?

Sr. Yoma. — No; lo único que falta es que pongamos el 30 por ciento del cupo femenino en el organismo de la UIF.

Señor presidente: yo estaba entusiasmado con la autonomía otorgada por la Cámara de Diputados a este organismo, pero no por este apéndice del poder político que pretende crear la Alianza en este momento.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: quiero proponer al bloque minoritario pero oficialista que en lugar de continuar incorporando miembros a la UIF, en lugar de hacer naturalmente más en-

gorroso su funcionamiento en virtud de la cantidad de miembros, se eliminen algunos expertos a fin de mantener el número definitivo establecido en la propuesta de la Cámara de Diputados o en el dictamen consensuado, en donde se había fijado un número de diez como máximo.

No me parece mal que existan representantes de los ministerios; lo que me parece realmente malo es que hagamos de este organismo una multitud, como dijo el señor senador Villarroel, con lo cual se puede complicar su funcionamiento efectivo. Por otra parte, entiendo que estamos en una época de crisis, por lo cual no es cuestión de seguir gastando sin ton ni son.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Vaquir. — Siempre le rindo al señor presidente del Cuerpo el homenaje por su extraordinaria labor como constituyente.

Estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones del señor senador Genoud si el senador Pardo las acepta. Me preocupa poco la cuestión de la multitud; no me preocupa el cuántum sino la calidad, y para el caso de que haya que sacar a algún representante, insisto en que por calidad y por contenidos debe haber un experto en relaciones internacionales, se lo establezca en el artículo 11 o en el 44...

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: dado que hay acuerdo entre las distintas bancadas, la comisión va a aceptar la inclusión en el artículo 11, tal como fuera propuesta por el señor senador Genoud y aceptada por el señor senador Vaquir.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado por 36 votos afirmativos sobre un total de 39 presentes.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: que conste mi voto negativo.

Sr. Presidente. — Se deja constancia, señor senador.

—Se enuncia el artículo 8º.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: en el dictamen de comisión se ha eliminado el último pá-

rrafo y se ha agregado otro. El último párrafo se refería a las impugnaciones que deberían presentarse en el Banco Central, las cuales serían remitidas para conocimiento de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. Se hacía referencia al Banco Central porque en el dictamen se señalaba que la UIF se encontraba bajo su dependencia; pero habiéndose eliminado al Banco Central, no tiene sentido que las impugnaciones sean dirigidas a ese organismo.

En consecuencia, hemos reemplazado ese párrafo por otro que dice: "La comisión *ad hoc* deberá prever en sus reglamentos de concurso las normas que regulen las impugnaciones."

Este artículo se refiere a las impugnaciones que pueden hacer los expertos, que deben ser juzgados por un cuerpo que, en definitiva, será el que los designe. De tal modo entonces que hemos eliminado, por una razón obvia, al Banco Central y hemos establecido el mecanismo de la impugnación mediante la comisión.

Sr. Menem. — ¿Se podría leer por Secretaría cómo queda redactada la primera parte del artículo?

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (Lee:) "Artículo 8°. — La selección de los referidos expertos se ajustará a lo siguiente: a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La Comisión *ad hoc* convocará a concurso, publicándose las fechas de exámenes y condiciones generales de los mismos, por cinco días en el Boletín Oficial, dos diarios de alcance nacional y un diario de cada provincia;

b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables;

c) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes que evaluarán tanto la formación teórica como práctica, serán publicados por cinco días en los mismos medios especificados en el inciso a), quedando por el término de sesenta días corridos luego de la última publicación, sujetos a las impugnaciones que pudieran realizarle cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o persona jurídica.

La Comisión *ad hoc* deberá prever en su reglamento de concursos, las normas que regulen las impugnaciones."

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8° con las modificaciones propuestas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado por unanimidad.

—Se enuncia el artículo 9°.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: aquí hay algo que quiero creer que se le pasó al señor senador Genoud, que es quien está revisando el dictamen y la sanción de la Cámara de Diputados.

En el artículo 9° que estamos tratando, que creo que es coincidente con el artículo 7° del dictamen de comisión originario, se establece que la remoción de uno de los miembros de la UIF podrá ser recurrible. Concretamente dice que lo resuelto podrá ser recurrible mediante recurso de reposición y jerárquico ante el Directorio del Banco Central.

Sr. Genoud. — No, todo eso se elimina.

Sr. Yoma. — Pero no está...

Sr. Presidente. — Señor senador Yoma: ¿le permite una interrupción al señor senador Genoud?

Sr. Yoma. — Simplemente propongo que se elimine "lo resuelto podrá ser recurrible mediante recurso de reposición y jerárquico ante el Directorio del Banco Central". Esto es lo que propongo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Le voy a explicar cuál es la modificación que proponemos y que es aceptada por la comisión.

La primera parte del artículo se mantiene igual. Luego decía: "Podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurriesen en mal desempeño...", etcétera.

Entendimos que la Unidad de Información Financiera no podía autocontrolarse, determinando quién se quedaba y quién se iba del cuerpo. En este caso tiene que haber un tercero que actúe como jurado a los efectos de determinar la remoción. Por eso es que incorporamos un párrafo, eliminando el que usted señala, que dice que podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de

delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de remoción estará a cargo del tribunal de enjuiciamiento creado por la presente ley.

¿Cómo se crea ese tribunal de enjuiciamiento? Es similar al que se utiliza en la ley de Ministerio Público.

Todo esto está consensuado por la Cámara de Diputados, quien advirtió que este mecanismo era mucho mejor que el otro. O sea, determinó que el órgano, por sí mismo, no podía determinar la remoción de sus miembros, por lo cual se admitió este tribunal.

Dicho tribunal estará integrado por tres miembros ex magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional designados por sorteo. La intervención como integrante del tribunal constituirá una carga pública.

El procedimiento ante el tribunal se realizará conforme a la reglamentación, que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y la defensa en juicio.

Debo además responder a una proposición que se formuló en la sesión anterior por parte del senador Carbonell, quien dijo que esto no tenía sentido y que era mucho más apropiado directamente facultar al Poder Ejecutivo para la remoción de los miembros de la Unidad de Información Financiera. Luego nos quedamos sin quórum y me vi privado de la posibilidad de responder a esa afirmación.

No es bueno que el cuerpo mismo determine la remoción de sus miembros. Y también es malo que sea el Poder Ejecutivo quien determine la remoción de los integrantes de esta autoridad de aplicación. En este caso sí existiría una clara injerencia del poder político que podría determinar, prácticamente, la composición del cuerpo con una eventual decisión arbitraria para remover a sus miembros. Nos parece mucho más objetivo este procedimiento, a fin de que sea un tribunal que debe surgir de ex miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal que serán seleccionados por sorteo. Además, se establecen las condiciones o requisitos de la remoción.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — En primer lugar, quiero decir que me deja más tranquilo la modificación propues-

ta por el señor senador Genoud. Realmente, que sea el Banco Central el que actúe en apelación en este tema no tenía mucho sentido. Pero, de hecho, la injerencia del poder político se presenta. El mecanismo propuesto por el señor senador Genoud sirve para quienes están designados por concurso; en cuanto a los que son funcionarios públicos, con el solo hecho de sacarlos de sus funciones por medio de un decreto se acabó el procedimiento tan engorroso de los jueces y todo lo que plantea el señor senador Genoud. Es decir, hay una injerencia directa —directísima— del Poder Ejecutivo en la nominación, en la integración de la UIF y en la remoción de sus miembros porque, reitero, son funcionarios públicos que pueden ser dejados cesantes sin ningún tipo de procedimiento, ni defensa en juicio ni nada que se le parezca.

Por último, reitero: este es un organismo del poder político.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: en la sesión pasada hice una observación sobre el segundo párrafo del artículo en tratamiento, donde se prevé la retribución de los miembros de la UIF. Al respecto, entiendo en primer término que los que van a ser retribuidos son aquellos que no forman parte de los organismos que mandan sus delegados a integrar parte de este organismo. Creo que debiera hacerse algún tipo de aclaración específica sobre eso. O sea, que van a ser retribuidos los expertos o los que están allí con el sistema de designación previsto.

Además, con respecto a este mismo artículo, quiero decir que no me parece apropiado, por un estricto respeto a la jerarquía del Poder Judicial, que siendo este un órgano auxiliar del poder, un órgano de la etapa sumaria de un proceso por narcolavado, tengan una directa indicación de su retribución con equivalencia a los jueces de Cámara del Poder Judicial.

Concretamente, propongo que se elimine toda referencia a la retribución y que ésta luego sea fijada en la reglamentación de la ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: la comisión va a aceptar la observación efectuada por el señor senador por Tucumán en cuanto a la remuneración. Como integrante del Jury de En-

juiciamiento conozco la reglamentación de dicho órgano y quienes representamos a organismos en los cuales se percibe algún tipo de remuneración no recibimos sueldo alguno en ese organismo. Traigo esto a colación como un ejemplo para ratificar lo que acaba de proponer el señor senador Carbonell.

Por lo tanto, solicitamos la eliminación de ese párrafo, dejando la remuneración de quienes no pertenecen a organismo alguno a cargo de la UIF. Si el señor senador Carbonell quiere proponer la redacción de esta parte, con mucho gusto lo escucharemos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. – Propongo a la comisión que en la primera parte, donde se habla de incompatibilidades, agreguemos "...y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios". No sólo se trata de las incompatibilidades, sino también de las obligaciones de los funcionarios públicos. De esta forma, compatibilizamos la expresión con lo que establece la ley de ética pública.

Por otra parte, sólo quiero advertir las dificultades que existirán para formar ese tribunal con ex magistrados, que pueden tener ese carácter por distintas razones: por avanzada edad, etcétera. Creo que va a ser muy engorroso formar ese tribunal. Lo dejo sentado como una advertencia. Si bien no he participado en la elaboración del dictamen, no quiero interferir en el tratamiento. No obstante, expreso mis dudas sobre la fluidez del funcionamiento de ese tribunal.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Sergnese. – Señor presidente: si bien me había hecho la promesa de no hablar más sobre este tema, quiero plantear una simple observación porque vamos a hablar mucho de la cuestión después de aprobada.

En realidad, pienso que lo agregado al artículo no mejora la redacción anterior. En primer lugar, porque le quita la posibilidad de los recursos jerárquicos, que podrían dirigirse no al Banco Central sino a otro y, además, porque a mi modesto entender viola alguna norma de la Constitución Nacional.

En segundo lugar, porque tampoco se dice quién lo va a designar y menos quién lo va a constituir con su designación en carga pública. Pareciera que este tribunal lo debería designar

el Poder Ejecutivo o la misma Comisión o el Poder Judicial. ¿Quién lo va a designar finalmente? En el proyecto no se hace la más mínima aclaración.

En consecuencia, dada la forma en que está redactado –y pareciera que así va a votarse–, quiero que conste mi voto negativo para este artículo.

Sr. Presidente. – Así se hará, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Carbonell. – Señor presidente: con relación al segundo párrafo, concretamente propongo que su texto diga "Durarán cuatro años en su cargo, el que podrá ser renovado en forma indefinida". Y nada más. Incluso, agrego otra reflexión sobre la cuestión de las remuneraciones.

Si se mantuviera el criterio de equipararlos a la remuneración de los jueces de Cámara, podría darse la muy irritante situación de que quienes provienen de cargos existentes en los distintos organismos que confluirán para la conformación del cuerpo tengan remuneraciones totalmente diferentes, segura o probablemente menores que aquellas de las que disfruta un juez de Cámara. Entonces, se daría la irritante e inconstitucional situación de que hubiera por igual función distinta remuneración; a lo mejor, muy distinta remuneración.

Por ello, me parece prudente dejar para una instancia posterior, que bien puede ser la reglamentación de esta ley, la determinación adecuada, justa y respetuosa de las jerarquías de la retribución de estos miembros.

Con relación a la observación que hace el señor senador Sergnese sobre quién designa a los miembros de esta suerte de jury de enjuiciamiento, me parece que tendría que haber una clara indicación de que el propio Ministerio de Justicia es el que debe hacerlo ya que es la autoridad jerárquica de la cual, en definitiva, depende el cuerpo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: voy a solicitar que por Secretaría se consigne la propuesta de modificación y lo que es aceptado por la comisión.

Para esclarecimiento de la Secretaría, si es que no ha tomado nota, voy a informar que el texto que pensaba proponer la comisión para la designación de este tribunal de enjuiciamiento, como se lo llama acá, es que el sorteo lo haga el Ministerio de Justicia, que es la órbita dentro de la cual se va desempeñar esta comisión.

En consecuencia, el texto quedaría redactado de la siguiente forma: "Dicho tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, designados por sorteo a cargo del Ministerio de Justicia."

Quiero consignar en cuanto al salario o remuneración que van a percibir que se establezca lo siguiente: "Durarán cuatro años en su cargo, el que podrá ser renovado en forma indefinida, y percibirán una remuneración conforme lo determine la propia comisión."

Señor presidente: quiero aclarar que las diferencias que expone el señor senador Carbonell, y según me asintiera el senador Agúndez, efectivamente se dan. Y se dan especialmente en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal de Enjuiciamiento, en donde nosotros, los legisladores, únicamente percibimos la dieta que recibimos del Senado de 3.200 pesos. Y el sueldo para aquellos magistrados y otros abogados es de nueve mil. Es decir que nosotros cobramos por doble trabajo tres veces menos.

Pero debemos aceptar las reglas del juego. Y también tenemos que aceptar que en esta comisión exista una diferencia.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Señor presidente: comparto la moción del señor senador Menem en el sentido de agregar, donde dice "incompatibilidades", "y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos".

Sinceramente, no comparto que la comisión fije las remuneraciones, porque es incluso más riesgoso que fijar un monto fijo.

Sugiero que modifiquemos la categoría de la remuneración a la que se equipara a los miembros de la UIF, y en donde diga "juez de Cámara de la Justicia Nacional, se diga "juez de Primera Instancia de la Justicia Nacional. Es decir que hacemos una disminución.

No me parece viable que el órgano, por más autarquía que tenga, pueda determinar los ingresos que perciba por su función.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – La Comisión considera muy prudente el criterio sustentado por el senador Genoud, y lo acepta.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se leerá el texto definitivo.

Sr. Secretario (Pontaquarto). – "Artículo 9º: Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Durarán cuatro años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de Primera Instancia.

Podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de remoción estará a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por la presente ley.

Dicho Tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, designados mediante sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La intervención como integrante del Tribunal, constituirá una carga pública.

El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la reglamentación que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y la defensa en juicio."

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Señor presidente: interpretando la proposición del senador por Tucumán, debería decir que el sorteo y la designación estará a cargo del Ministerio de Justicia.

Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, señor senador Pardo?

Sr. Pardo. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 9° por 38 votos sobre 39.

–Se enuncia el artículo 10.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 10 por 37 votos sobre 38.

–Se enuncia el artículo 11.

Sr. Genoud. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – La única modificación sería la que habíamos anticipado, a propuesta del señor senador Vaquír.

Luego del Ministerio de Justicia, debe decir “Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Se refiere a los oficiales de enlace en las distintas áreas del gobierno. Entonces quedaría “...Ministerio de Justicia, del Ministerio de Relaciones Exteriores...”.

Es la única modificación.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo con la modificación propuesta.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 11 por 38 votos sobre 39.

–Se enuncia el artículo 12.

Sr. Genoud. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Este artículo tiene varios incisos. En el dictamen originario de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios se habían eliminado algunos. Nosotros incorporamos nuevamente los que estaban en la sanción de la Cámara de Diputados, el inciso 2°. Asimismo, en el punto 4, se elimina la palabra “exclusividad”, para reemplazarla por “prioridad”. Y, además, se propone eliminar la frase “por cualquier medio que fuera” por la siguiente: “por medio fehaciente”. Si los señores senadores desean una explicación al respecto, la puedo dar, pero me parece que hay deseo de

aprobar rápidamente este proyecto, para pasar al tratamiento de otros temas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Carbonell. – Señor presidente: en el segundo inciso, realmente no me parece feliz la redacción del párrafo final, en donde se habla de “...colaborar durante la sustanciación del proceso con los órganos judiciales y el Ministerio público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley...”. Me parece que sería más ajustado a los fines de esta unidad, que los términos “persecución penal” sean sustituidos por “...investigación de los delitos reprimidos por esta ley...”.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Señor presidente: en primer lugar, el término persecución viene incorporado en la sanción de la Cámara de Diputados; no mereció objeciones de la comisión y nosotros lo aceptamos.

Por otra parte, el término “persecución penal” es muy común en la justicia penal; está vinculado con la promoción de la acción, que es de orden público.

Pero si es una cuestión fundamental, aceptamos la modificación, aunque creo que es algo que está en el léxico habitual de la justicia penal.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: considero acertadas las palabras del señor senador Genoud en cuanto a la utilización en el derecho penal de la expresión «persecución penal». Ella implica el ejercicio de la acción pública a cargo del fiscal. Pero habiendo aceptado dicho senador las observaciones formuladas por el señor senador Carbonell, la comisión no tiene problemas en aceptar dicha postura.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por San Luis. Es la segunda vez que rompe la promesa de no hablar. (*Risas.*)

Sr. Sergnese. – Señor presidente: simplemente quiero pedir una aclaración. Como el señor senador por Mendoza dijo que si no entendíamos bien qué quiere decir “medio fehaciente” podía explicarlo, quisiera que lo haga.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: insisto en que si no es una cuestión fundamental, dejaría el término “persecución penal”, en lugar de investigación, porque la investigación es una cosa, mientras que la persecución llega a la sanción, al acto de punición, a la sentencia: “mandar a un tipo preso”. Creo que se adapta mejor el término “persecución penal” que el de investigación, que simplemente implica una tarea de evaluación de las pruebas. En cambio, la persecución penal culmina con la sentencia, que es la finalidad de la justicia penal.

¿Por qué proponemos la eliminación de la frase “por cualquier medio que fuera”? Porque hay una sanción muy severa para el integrante de la UIF que no derive o no envíe las actuaciones a la justicia penal. Y como es tan grave la sanción, obviamente debe haber una notificación fehaciente de la justicia en el sentido de que le sean remitidas las actuaciones. Si el párrafo quedaba redactado como estaba en la propuesta de la comisión, el miembro de la UIF quedaba expuesto a desconocer el pedido de la justicia en el sentido de que debía abocarse al conocimiento de esa investigación. Entonces, para actuar con responsabilidad y no someter a tan alto riesgo a los miembros de la autoridad de aplicación —en el sentido de ser removidos por no remitir las actuaciones a la Justicia—, tiene que haber una notificación por medio fehaciente en cuanto a que la justicia penal se ha hecho cargo del asunto y por lo tanto deben girarse todas las actuaciones. Me parece que es una cuestión obvia. No sé si he sido claro en mi exposición.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis. Le pido que sea breve, por favor.

Sr. Sergnese. — Me parece buena la explicación que ha dado el senador Genoud. O sea, es para garantizar a los integrantes de la comisión que no tengan algún problema, por si se descuidan. Pero yo no veo que hayamos hecho lo mismo en este proyecto de ley con los que están obligados a denunciar. No les decimos si hay que notificarlos fehacientemente. A los integrantes de la comisión, que deben tener más transparencia porque son justamente a los que les estamos dando la facultad de controlar y de resolver estos temas, les ponemos que deben ser notificados por el juez por medio fehaciente. No sé si estamos usando el término “fha-

ciente” —no me ha quedado claro— en forma precisa. ¿Cédula judicial, escritura pública, acta notarial, telegrama colacionado? ¿Esto es lo que estamos planteando? O sea, si el juez le manda por nota o le pregunta si tienen algo por informarle, ¿es o no notificación fehaciente?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: sugiero que donde dice “cuarenta y ocho horas” diga “dos días”. Los plazos de horas siempre dan lugar a dificultades en cuanto a la cuenta del plazo; y como es un tema que tiene consecuencias, es más claro que el plazo sea de dos días. En lo demás estoy de acuerdo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: realmente es atendible la posición que ha expresado el senador Sergnese porque aquí lo que es la excepción es la UIF, y lo normal y ordinario es la justicia. Quiere decir que en este caso estamos subordinando a la administración de justicia, que es la única que puede continuar algún tipo de investigación en esta materia y sancionar. La UIF es simplemente —por así llamarlo— una etapa instructoria. Pero estamos también poniendo a cargo de la UIF el hecho de que cuando tuviere la semiplena prueba de que existe un hecho delictivo, inmediatamente debe ponerlo —con noticia al fiscal— a disposición de la justicia. Es decir, por un lado le establecemos a la justicia la obligatoriedad de decirle que se está investigando tal cosa. Acá la UIF se puede dar por enterada por cualquier medio.

No me preocupa este sistema, puesto que si la UIF no da cumplimiento en poner a disposición inmediata de la justicia, único órgano encargado de la persecución y la sanción, van a quedar en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Está prevista así la obligación de la UIF. Es decir, va a ser resultado de análisis: si su actuación se adecua o no al régimen que estamos estableciendo a través de esta ley.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto definitivo del artículo...

Sr. Genoud. — Queda el plazo de dos días en lugar de cuarenta y ocho horas.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado con 36 votos sobre 38.

—Se enuncia el artículo 13.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en realidad en el derecho comparado las funciones de la UIF tienen que ver con aquellas de recabar información, recibir, analizar, examinar, denunciar, poniéndolo a consideración del ministerio público.

En este proyecto de ley que estamos considerando tiene funciones mayores. Como decía antes, propone medidas que caben sólo con la intervención del ministerio público en causas penales iniciadas.

Quizá se justifique —estoy dispuesto a acompañarlo— si se tratara de un organismo autónomo porque estamos equiparando las funciones de la UIF a las que tienen las comisiones investigadoras del Congreso; obviamente con una diferencia sustancial en su naturaleza y en su legitimidad.

Estamos entonces ante un apéndice del Poder Ejecutivo, dándole las mismas funciones y atribuciones que las comisiones del Congreso de la Nación. Esto puede ser excesivo. Por ejemplo, la recepción de declaraciones voluntarias de testigos son secretas en un organismo —reitero— dependiente, lo que está violando pactos fundamentales con rango constitucional, que es el control de pruebas por parte de un imputado en un hecho delictivo; concretamente, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 3º, que se está violando por el carácter secreto que se imprime a este organismo dependiente —reitero— del Poder Ejecutivo, con funciones equiparables a las comisiones del Congreso.

En todo el derecho comparado este organismo reúne información y lo pone en consideración del Ministerio Público o lo archiva hasta tener nuevos elementos, porque no hay que olvidarse de que este tipo de operaciones están vinculadas siempre a un delito que le da origen.

Entonces, se justifican estas atribuciones como las de pedir allanamientos, secuestros y clausuras cuando se trate de un organismo autónomo, absolutamente ajeno al poder político. Pero tratándose de un organismo dependiente del poder político, no creo que sea correcto otorgarle las funciones de una comisión investigadora del Congreso.

Sr. Maglietti. — Señor senador: solicito una interrupción.

Sr. Yoma. — Ya termino, pero le doy la palabra.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: como el señor senador insiste en que este organismo es un apéndice del Poder Ejecutivo y habla de organismo autónomo, quiero aclarar que un organismo autárquico es un organismo descentralizado y dentro de la Administración Pública los organismos descentralizados no son dependientes. Y cuando hablamos de autonomía tenemos que referirnos a las provincias que sí son autónomas. De manera tal que el legislador está confundiendo los términos dependencia, autarquía y autonomía, que son todos distintos en sus acepciones jurídicas.

Sr. Presidente. — Sigue en uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — La Constitución y la doctrina utilizan el término autonomía no solamente para las provincias. De hecho las universidades son autónomas y no son provincias. Así que el doctor Maglietti debería consolidar mejor sus conocimientos antes de emitir opiniones.

¿Qué es lo que me preocupa? Que viniendo de un gobierno que está creando organismos similares, por ejemplo la llamada oficina anticorrupción, que pincha teléfonos de periodistas, que está probada la injerencia y operaciones políticas que está haciendo, que aprietta a periodistas, que pueda crear y dar semejantes poderes a otro organismo que va a depender de este gobierno, que utilice este tipo de mecanismo me parece riesgoso. reitero, son facultades que tienen la comisiones del Congreso, que surgen de la legitimidad que da el voto popular. Pedir secuestros, allanamientos, clausuras, corresponde a poner al fiscal en una etapa en la que es dueño de la acción penal, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Señor presidente, reitero, si este organismo hubiese seguido siendo autónomo e independiente del poder político, me animo a votarles las facultades de las comisiones investigadoras del Congreso. Inclusive es controvertido respecto de pactos internacionales con rango constitucional, como el hecho del secreto de las declaraciones voluntarias porque no permite el control de la prueba por parte del imputado. Estos son derechos humanos elementales con rango constitucional en la Argentina. Me animo a vo-

tar a un organismo independiente pero no a un apéndice del poder político.

Voy a proponer a la comisión que se incorpore un texto que he preparado, que tiene que ver con lo que son las facultades de instituciones de este tipo según el derecho comparado.

Solicito que mi propuesta se lea por Secretaría, dado que es un poquito extensa.

Sr. Presidente. — Se va a leer por Secretaría.

Se buscará la fotocopia que extiende el senador.

Sr. Yoma. — Sí, pero que no se pierda el texto... Parece la interna de La Rioja; las listas están de una manera y llegan al juzgado federal de otra. (*Risas.*)

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Yoma. — Pero eso se corrigió cuando asumió la presidencia el senador Eduardo Menem...

Sr. Menem. — Gracias. (*Risas.*)

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (*Lee:*) La Unidad de Información Financiera estará facultada para: 1º, solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se fije, bajo apercibimiento de ley; 2º, requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla; 3º, actuar en cualquier lugar de la República, en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley; 4º, aplicar las sanciones administrativas previstas en la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso; 5º, garantizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia UIF o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones, para recuperación de la información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter; 6º, emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley; 7º, disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas que se encuentran obligadas a denunciar operaciones sospechosas, con-

forme lo dispone la presente ley; 8º, disponer el archivo de las actuaciones, pudiendo reabrir la investigación en el caso de que surjan nuevos elementos de prueba.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: concuerdo con el senador Yoma en cuanto a que las garantías del debido proceso, el contralor de la prueba y demás actos que aseguren el debido proceso, inclusive los establecidos en pactos internacionales que hoy tienen jerarquía de norma constitucional en virtud de la reforma de 1994, son correctos en cuanto a la parte doctrinaria. Pero creo que en el caso de la UIF esto no es aplicable. No lo es pues lo que establece la garantía del debido proceso se refiere al proceso penal, no a una comisión que simplemente investiga y si ve que existe algún tipo de responsabilidad penal, recurre al fiscal para que deduzca la persecución a través del ejercicio de la acción penal.

Considero entonces que en este caso no se viola ningún proceso ni son aplicables los acuerdos internacionales. Esto sí es aplicable al proceso penal.

En cuanto a las facultades de la UIF sería muy largo y nos llevaría mucho tiempo analizar lo que es correcto, hasta dónde se extienden sus facultades y hasta dónde no. Creo que lo más prudente es aceptar el artículo tal cual está redactado y continuar adelante.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: solicito una aclaración del miembro informante, con respecto al inciso 3, cuando dice "...todos los servicios de información del Estado...". Mi pregunta —y la relaciono con la ley de seguridad interior— es si esto incluye a los servicios de información de las fuerzas armadas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: creo que al incursionar en el terreno de las fuerzas armadas se podría vulnerar la seguridad nacional y lo que se llama el secreto de Estado. Yo limitaría esta circunstancia a que el que pida los informes sea el habilitado por la ley, que es el juez penal y no esta simple comisión de instrucción y de investigación.

Sr. Presidente. – Se va a llamar para votar.

–Así se hace.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. – Mi duda –y se lo pregunto al presidente de la Comisión– es en qué carácter actúa en el juicio la Unidad de Información Financiera, porque no veo que en ninguna parte se le dé legitimación procesal, y eso está bien. Cuando se habla de que colabora con el fiscal, entiendo que es una colaboración a nivel administrativo, pero ya cuando se le dan facultades para solicitar al juez la suspensión del plazo que determine la ejecución de cualquier operación, me pregunto en qué carácter se lo pide al juez. ¿Es parte? ¿Tiene legitimación procesal?

Me parece que habría que definir muy bien en este caso en carácter de qué participa en el juicio. Considero que todo este tipo de peticiones deberían hacerse a través del fiscal y no directamente, porque si no se le estaría dando una legitimación procesal que, desde mi punto de vista, es totalmente improcedente.

No quiero que pase, como está sucediendo actualmente con esa famosa oficina anticorrupción, donde, de pronto, se le está reconociendo una legitimación procesal, se le está reconociendo el carácter de fiscal que la ley no le da, y que perturba el funcionamiento de la Justicia.

Creo que hay que definir muy bien en este momento en qué carácter puede participar en el juicio esta Unidad de Información Financiera. Creo que no debería tener facultad para participar en el juicio, porque para eso están los fiscales.

Sr. Yoma. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. – Señor presidente: al respecto y completando un poco lo que dice el senador Menem, reitero lo que planteaba al comienzo de mi exposición. Esto está en el derecho comparado. Las unidades de información financiera –en el derecho comparado– ponen toda la información a disposición del fiscal, que es el dueño de la acción penal; no van directamente al juez.

Además, se habla de juez competente. ¿Cuál es el juez competente si todavía no sabemos cuál es el delito que originó el tipo penal? Debe

ría ser el juez que actúa en el delito originario. Entonces, se dice que la UIF puede pedir directamente al juez competente para que, de oficio, sin intervención del fiscal... Pero, ¿cuál es el juez competente, si esto depende –reitero– de un delito que le da origen?

Esto va a generar problemas de competencia, de legitimación procesal. Creo que este artículo –a todas luces– es absolutamente desafortunado, así como también las funciones que se le están otorgando a la UIF. Más allá de las cuestiones políticas, considero que deberíamos tomarnos algunos minutos para revisar sus funciones y dar mayor protagonismo al Ministerio Público con respecto a todas las actuaciones de la UIF en sede penal, en sede judicial.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: la propia naturaleza de la Unidad de Información Financiera determina cuál es la actuación y las obligaciones que tiene; cuáles son sus facultades. En el arranque, en la Justicia, tiene la obligación de cualquier ciudadano argentino: poner en conocimiento de la Justicia lo que sepa sobre cualquier hecho delictivo. Esta es la función de la UIF: denunciar las actividades que considera de lavado de dinero ante el fiscal, para que éste promueva la acción pertinente en caso de considerar que corresponda. Jamás pensaríamos que la UIF puede transformarse en parte querellante dentro del proceso penal. La situación de la UIF es bien clara: no es parte.

Concuerdo con el señor senador Yoma en cuanto establece los serios problemas de competencia que se van a producir en la justicia penal cuando un juez resuelva un allanamiento y aparezca la UIF solicitando que suspenda la operación porque ellos están investigando un grave caso de lavado que puede llevar a mejor resultado su actividad. Me imagino lo que hará el juez: por usar un término común, va a sacar “picando” a la UIF.

Creo que esta posibilidad de solicitar suspensiones al juez –como está redactada– no es procedente justamente por el conflicto de jurisdicción y de competencia que se va a producir. En consecuencia, considero conveniente que este inciso 5° sea suprimido del marco de las facultades de la UIF.

Sr. Genoud. – ¡No!

¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Genoud.

Sr. Genoud. — Señor presidente: yo no sería partidario de la supresión de este inciso 5º porque es clave, aunque admito incorporar, para su mejoramiento, la expresión “solicitar al juez competente por medio del ministerio público”. Esto quiere decir que se le da intervención al ministerio público; que el ministerio público sea el que oficialice la solicitud ante el juez.

Sr. Yoma. — Eso es otra cosa.

Sr. Genoud. — Pero lo que yo quiero señalar, señor presidente, es que da la sensación —espero equivocarme— de que hay senadores que recién estudiaron el tema esta semana.

Digo esto porque no podré olvidar cuando hace un mes y medio el senador por La Rioja, que hoy día...

Sr. Menem. — ¿Cuál de ellos?

Sr. Genoud. — Agrede a un senador de nuestra bancada con una característica ironía o sufre una incontinencia verbal que yo creo viene provocada seguramente por el último resultado electoral, cuestiona todo. Digo esto cuando tengo muy registrada en mi memoria la oportunidad en que dijo: “Esto tiene que ser aprobado como vino de Diputados porque es una ley bien armada, bien hecha...” Incluso, acusó a integrantes de su bancada de que estaban favoreciendo a los lavadores de dinero, como fue publicado en todos los diarios. Y el contenido del artículo 13 —que corresponde a otro número de la sanción de la Cámara de Diputados— fue mantenido textual.

Tampoco es cierto eso de que si fuera un órgano autárquico el artículo tendría vigencia, eficacia y utilidad, pero ahora —como depende del Ministerio de Justicia— no tiene sentido. Sabemos que esto es un sofisma.

Esto no es así; en primer lugar, porque el texto de Diputados que tan apasionada y acaloradamente fue defendido nunca habló de autonomía sino de autarquía. Y es el término “autarquía” el que se ha mantenido en el texto de nuestra norma, nada más que dentro del área del Ministerio de Justicia. Todo lo demás sigue igual.

Por lo tanto, aquí ha habido un cambio de opinión. Entonces, si existió dicho cambio, que se lo reconozca hidalgamente y se diga: “Bueno, he cambiado de opinión. Estudiemos mejor el artículo y lo discutimos.” Pero acá ha habido

una modificación de criterio que obviamente nosotros no podemos dejar de señalar.

Digo, entonces, que el artículo 13 se mantenga como está. No sé qué opinará el señor presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, que fue quien trabajó intensamente en la elaboración del dictamen.

En este artículo se mantuvo el texto de Diputados. Sí me parece que a efectos de que no se plantee un cuestionamiento respecto de la legitimación que tenga este órgano, como ha señalado el señor senador Menem, se incorpore “por medio del ministerio público”. Quiere decir que haya una etapa entre la decisión de la UIF y el juez; que haya una intermediación obligatoria a través del ministerio público.

Sr. Yoma. —¿Me permite, señor presidente?

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Senador Yoma: estamos discutiendo en particular y flexibilizando mucho el Reglamento para que los senadores vuelvan a intervenir sobre el mismo artículo.

Sr. Yoma. — Pero el senador ha dicho una falacia.

Sr. Presidente. — Pero sea breve.

Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Primero —y muy breve— debo decir que quien parece no haber estudiado bien el tema es el senador Genoud, porque el proyecto de ley venido en revisión dice: “La UIF gozará de total autonomía funcional”. No habla de autarquía; dice autonomía funcional.

En segundo lugar, no es lo mismo un organismo autónomo que un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sigo sosteniendo la sanción de la Cámara de Diputados en virtud de la autonomía que le otorgaba a la UIF; pero no puedo seguir sosteniéndola en las mismas funciones como apéndice del poder político. En ese sentido, no son lo mismo los fiscales cuando dependían del poder político que los fiscales en la actualidad, que constituyen un órgano extra poder.

En consecuencia, señor presidente, sigo sosteniendo lo que sostuve hace un mes. Quienes parece que no sostienen lo mismo, y que han cambiado por sugerencias de los banqueros o del Ministerio de Economía, son precisamente los integrantes del bloque de la Alianza que, con

estas modificaciones, pretenden transformar este proyecto en una verdadera vergüenza.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Seguimos, como la noria, dando vueltas sobre el mismo punto.

Se equivoca el señor senador Yoma y pretende hacernos equivocar a nosotros. La sanción de Diputados, en su artículo 5º, decía: “Créase la Unidad de Información Financiera como entidad autárquica...” No decía “autónoma”.

De la misma forma, nos quiso inducir a error cuando sostuvo que en Gran Bretaña ese organismo dependía de los fiscales.

En consecuencia, señor presidente, no se puede venir a debatir con tanto encarnizamiento y sin el suficiente conocimiento cuestiones tan delicadas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Galván. – Señor presidente: obviamente reconocemos el legítimo derecho de los señores senadores de formular sus observaciones a fin de dotar a este proyecto de la mayor sensatez y contenido posibles. Pero no podemos hacer de cada término, de cada artículo, de cada inciso una discusión como seguramente la debe hacer la Academia Francesa.

No podemos utilizar ese método como pretexto para imputar al Poder Ejecutivo y a esta bancada estrechas vinculaciones con el poder económico.

Si pretendemos colocar la discusión en ese terreno, adelanto que voy a pedir la palabra en cada uno de los artículos subsiguientes para decirle al señor senador por mi provincia que si hubo algún gobierno vinculado a los fuertes intereses contrarios a la República, fue precisamente aquel que ha sido reemplazado por el presidente Fernando de la Rúa.

Entonces, no podemos utilizar la discusión de este proyecto, que pretende perseguir a los lavadores de dinero en una historia no aclarada en la República de los últimos diez años, para traer estos temas al debate.

Si nos vamos a ajustar reglamentariamente a lo que marca nuestro ordenamiento para la discusión de los proyectos, debemos darle la palabra al presidente de la comisión para que se expida acerca de las observaciones que cada senador formule al respecto.

No sé si esta bancada conoce el Nuevo Banco de La Rioja, ese invento del gobierno al que pertenece el señor senador Yoma. Nosotros no tenemos vinculación con los intereses financieros ni extranjerizantes. Por lo tanto, rechazamos enfáticamente esa insinuación o esa afirmación que pretende hacerse.

Sr. Menem. – Pido la palabra.

Sr. Yoma. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja Eduardo Menem.

Sr. Yoma. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Menem. – La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por La Rioja Jorge Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: se me está adjudicando una intencionalidad que no tengo. Creo que se lo hace en virtud del desconocimiento que se tiene de la sanción de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, solicito que se lea por Secretaría el artículo 6º del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

Sr. Del Piero. – Que se lea el artículo 5º.

Sr. Yoma. – Que se lean los artículos 5º y 6º.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a los artículos 5º y 6º del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

Sr. Secretario (Pontaquarto). – (*Lee:*) “Capítulo II. Unidad de Información Financiera. Artículo 5º. – Créase la Unidad de Información Financiera –UIF– como entidad autárquica del Estado nacional, regida por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 6º. – La Unidad de Información Financiera gozará de total autonomía funcional y será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de: a) Delitos relacionados...”

Sr. Vaquir. – Está bien.

Sr. Genoud. – Señor presidente: quiero decir algo más...

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Quiero decir que en el artículo 13, aceptaríamos las modificaciones en el inciso 5º. Se diría: “Solicitar al juez competente...” y agregar: “...por medio del Ministerio Públi-

co..." Y en el inciso 6º, a sugerencia del senador Menem, donde dice: "Solicitar al juez competente...", hay que agregar también: "...por medio del Ministerio Público...", y seguiría diciendo: "...el allanamiento de lugares públicos o privados...", etcétera.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: iba a pedir la inclusión que gentilmente acaba de hacer el señor senador Genoud.

Por otra parte, quiero rechazar por impertinente, improcedente y hasta diría insolente la manifestación del señor senador por La Rioja con respecto a que el gobierno anterior tuvo fuertes vinculaciones con intereses contrarios al país. De ser así, el señor senador tendría que haber hecho la denuncia penal.

No voy a aceptar ese tipo de manifestaciones hechas al calor de un debate con otro senador. No tiene por qué ofender la dignidad de quien ocupó la titularidad del gobierno anterior. Cualquier tipo de problemas personales que haya en ese sentido, que lo dirima por donde corresponda. No vamos a aceptar que públicamente se diga semejante barbaridad.

Además, si tiene denuncias contra el Banco de La Rioja, que las haga y las lleve a la Justicia. En este aspecto, definiendo todo lo actuado por el gobierno de mi provincia.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: hay que tratar de ser ecuaníme. Ese es un deber que tenemos.

Para ser objetivo y adecuado a lo que estamos viendo, soportando y escuchando debemos convenir en que este debate venía bien, llevado en buenos términos, hasta que el señor senador por La Rioja —lo tengo que nominar porque hay tres senadores por esa provincia—, el doctor Yoma, introdujo frases provocativas. Da la sensación de que en realidad el propósito no era discutir jurídicamente este tema sino introducir lo que vulgarmente se llaman chicanas de color político.

Se ha hecho alusión, por ejemplo, a periodistas. Ya sabemos a quién se refiere. Hay uno que dice que le han intervenido el teléfono hace poco. Esto no tiene nada que ver con este debate. En todo caso, habrá que ver con la futura

interpelación, de la que se habló esta tarde, más temprano.

Además, nos ha endilgado a todos los que estamos trabajando en este tema y que hemos llegado a ciertos acuerdos sobre el texto del proyecto de responder a intereses de la banca. Yo hablo de la banca pero a sus integrantes no los conozco ni necesito conocerlos. No tengo créditos y gracias a Dios tampoco pienso pedirlos.

Se pone un énfasis especial en destacar que éste es un órgano que de alguna manera responde al Poder Ejecutivo y más concretamente al Ministerio de Justicia. No se repara en que quien decide las cuestiones cuando hay contiendas es el juez. Esto no es sinónimo de ninguna chicana política, sino fruto de una realidad política, o una verdad jurídica objetiva, como diría la Corte Suprema.

Desde 1983 hasta aquí, en este cuerpo siempre ha sido mayoría el justicialismo. De modo tal que desde entonces la Justicia Nacional Federal está integrada por jueces que no lo serían si no hubieran contado con el apoyo o el acuerdo de la mayoría de este cuerpo, que desde el 83 hasta aquí no ha sido otra que la del Partido Justicialista.

Entonces, hay que sorprenderse y quizás atreverse a alguna conjetura subjetiva si se da el hecho de que de pronto de algún integrante de la bancada justicialista surgen sospechas sobre la ecuanimidad, imparcialidad, corrección y demás atributos públicos de un juez de la Constitución, vale decir de un juez imparcial. Esa es la situación concreta.

Nosotros sí —me refiero a los que nos hemos opuesto más de una vez a acuerdos para jueces— tenemos algunos motivos para dudar bastante de muchos; incluso, en mi provincia tengo más de un motivo para dudar. Pero convengamos en que estamos tratando un proyecto cuyas normas de ninguna manera ponen en manos de este órgano administrativo de relativa autarquía los poderes a los que nos estamos refiriendo: siempre están en manos de los jueces.

Asimismo, no me parece que sea conveniente que para requerir la autorización en caso de disputa deba acudir al Ministerio Fiscal. No entiendo por qué debe ser así. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está previsto en el proyecto de ley? El órgano pide un informe a alguna repartición, a alguna persona jurídica, a algún escribano, a alguna dirección que tenga relaciones con es-

tos asuntos. El órgano requerido o la persona física requerida dice: "No corresponde. Yo no debo dar este informe, porque me lo prohíbe otra norma". ¿Quién dirige la cuestión? Es el juez, que es lo que dice el proyecto. ¿Dónde está el abuso, dónde está el peligro? Tenemos una justicia y debemos respetarla, mientras no echemos a los jueces. Esta es la situación. Por eso no entiendo por qué debe mediar el ministerio fiscal.

Tampoco necesariamente el informe que se pida cuando se produzca la disputa será ante un juez penal porque, más de una vez, la cuestión del lavado surgirá de la constancia de un expediente civil, comercial o laboral —hablemos de las fusiones, de las transformaciones de sociedades y hasta de las sucesiones y de las donaciones que aparecen en los procesos. Entonces, no hay por qué suponer que siempre se va a tratar de un juez penal el que esté en el medio del asunto.

En cuanto a la competencia, desde luego que no podemos nosotros prefigurar aquí cuál va a ser la competencia. En algún caso, será un juez federal y en otros casos será un juez de la provincia. Porque, tal vez, se le pide un informe a un órgano de la provincia que dice: "Nosotros estamos impedidos de dar este informe". Eso puede suceder y es el juez el que tiene que decidir eso. Nosotros no podemos predeterminedar ahora qué juez será.

El señor senador por La Rioja doctor Menem hizo una observación muy atinada sobre la cuestión de la legitimación procesal. Digo que su observación fue atinada en el sentido de que la cosa produce dificultades, pero no creo que tenga razón. En todo caso, con el ánimo de conciliar posiciones y para superar estas dudas, sugiero que se ponga al final de este artículo que a los efectos del ejercicio de las facultades ante los jueces se reconozca legitimación procesal suficiente al órgano administrativo. De esta manera, el tema quedaría solucionado. ¿De qué se trata? No es necesario que creemos una entidad, persona jurídica, etcétera. Se trata de lo siguiente: ¿qué es cuando un policía va a pedir una orden de allanamiento a un juez? ¿Le estamos reconociendo personería judicial o no? ¿Es hábil o no el pedido de un policía? Entonces, solucionemos este asunto, si es que se presta a dudas, poniendo al final del artículo que a los efectos del ejercicio de estas facultades de peti-

ción ante la justicia se le reconoce legitimación procesal.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Pienso que el problema estaba solucionado con la aceptación por parte del presidente provisional de la propuesta de que se hagan los pedidos a través del ministerio fiscal. Pienso que no es necesario—y si es así votaré en contra— darle legitimación procesal. Creo que dándole participación al fiscal —es decir, que lo haga a través del fiscal— está solucionado el tema.

Muy amablemente, le quiero decir al señor senador por Catamarca que la integración del Poder Judicial de la Nación no puede decir que sea obra exclusivamente de este Senado, que es cierto que tiene mayoría justicialista desde 1983. Pero le recuerdo que las propuestas para designar jueces desde 1983 a 1989 fueron enviadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, que no era justicialista. Es cierto que muchas veces las propuestas de los jueces se hicieron por acuerdo y este Senado prestó su acuerdo. Pero, en definitiva, quien pedía esos acuerdos era el Poder Ejecutivo, que en aquel momento era de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: no creo, y en ese sentido apelo a la buena voluntad del señor senador Yoma, que tenga conceptos que prácticamente contradicen a todos los señores senadores de su bancada y a los de esta bancada, sobre todo luego de un estudio tan concienzudo de cada uno de los artículos que permitió arribar a un importante acuerdo. Sin embargo, en cada artículo el señor senador Yoma hace cuestionamientos que están extendiendo el debate en forma indefinida.

Si fuera mal pensado, como podría ser el senador, debería decir que no tiene mucho interés en que se sancione este proyecto. Pero como no soy mal pensado y creo en la buena voluntad de todos los señores senadores y en que todos queremos sancionar el proyecto lo antes posible, no voy a hacer ninguna manifestación crítica. Pero sí debo insistir sobre términos jurídicos que han sido totalmente tergiversados o sobre conceptos totalmente equivocados por parte del señor senador Yoma.

Bien ha dicho el señor senador Genoud que el artículo 5º de la sanción de la Cámara de Diputados claramente dice que la Unidad de Información Financiera se crea como entidad autárquica del Estado nacional. Si bien el artículo 6º refiere cómo funciona, reitero que se trata de un órgano autárquico del Estado...

Sr. Presidente. — Ya fue leído, señor senador.

Sr. Maglietti. — Sé que se ha leído, pero se tergiversó el concepto y debe quedar bien claro.

Sr. Presidente. — Aceleremos el trámite. Todos queremos votar el proyecto. Vayamos más rápido.

Sr. Maglietti. — Termino enseguida. Además, todos han hecho uso de la palabra y nadie fue interrumpido. Tenga paciencia. Lo digo con todo respeto porque el señor presidente condujo con ecuanimidad la sesión.

El artículo 4º que ya hemos aprobado también habla de autarquía funcional, con la salvedad de que se lo encasilla dentro del Ministerio de Justicia. De manera que prácticamente no hay diferencias.

Sabemos que órganos autónomos son los creados por la Constitución, tal como los municipios, el ministerio público y las provincias.

En este caso, tanto el órgano aprobado con la sanción de la Cámara de Diputados como el aprobado por este Senado son autárquicos. En consecuencia, señor presidente, debe terminarse con esa expresión de que nosotros queremos un órgano que no sirve para nada, que es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo o que, políticamente, pretendemos hacer de este órgano algo inservible. Estas son acusaciones que no corresponden. Además, agravian a todos los senadores, no sólo a los del oficialismo. Todos estamos en la misma línea y tenemos coincidencias. Pero el único senador que se presenta de distinta manera y golpea la campana de un modo cuyo propósito no entiendo es el señor senador por la provincia de La Rioja. Por lo tanto...

Varios señores senadores. — ¿Cuál senador? Hay tres senadores por La Rioja.

Sr. Maglietti. — Hablo del senador Yoma, pero con todo respeto.

No tengo ninguna intención de agraviar al señor senador Yoma, pero es evidente que tenemos que encauzar las formas. Debemos ha-

cerlo como corresponde y sancionar este proyecto, dejando de discutir cosas que son intrascendentes y que, incluso, llevan a apartarse de los conceptos jurídicos ya que se pretende discutir lo que es un órgano autárquico desconociendo principios básicos que ya hemos visto o estudiado en la universidad, para aquellos que somos abogados.

Por eso, señor presidente, solicito que se vote el artículo tal cual fue acordado entre las partes.

Sr. Presidente. — Está claro que el señor senador Yoma está en contra del órgano. (*Risas.*)

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: voy a tratar de concentrar el tema que estamos por votar, porque al volverse sobre la naturaleza de la entidad y sobre cosas ya aprobadas me pierdo y no sé en qué artículo estamos...

Sr. Presidente. — No se pierda usted, señor senador. (*Risas.*)

Sr. Pardo. — La Comisión va a aceptar la modificación del artículo pero no de la manera propuesta por el senador Genoud, puesto que el mismo propone que la comisión solicitará al juez a través del Ministerio Público Fiscal.

Yo considero que puede traer problemas o que sería una redacción defectuosa.

La comisión no plantea al juez a través de nadie. Entonces propongo "solicitar al fiscal actuante plantee al juez competente la suspensión por el plazo que éste determine".

Creo que con eso terminamos el problema. El fiscal evalúa la procedencia y si lo entiende conveniente, va a plantear la suspensión ante el juez. Ese es el sistema que responde a la estructura de un proceso penal.

El derecho a peticionar se da en cualquier otra materia. Pero peticionar en un proceso penal implica establecer cuáles son las partes y los intereses legítimos de los que pueden actuar. No es que se presente un "Juan de los Palotes" a tratar de ejercer el derecho de peticionar.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 con las modificaciones propuestas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 13 por 38 votos sobre 39.

–Se enuncia el artículo 14.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Señor presidente: simplemente, donde dice “semestral” tendría que decir “anual”.

Se trata del informe que la UIF tiene que elevar al Congreso.

¿Por qué decimos que debe ser anual? Porque en el inciso posterior se establece que cualquier comisión del Congreso puede citar a la UIF a dar informes. Por lo tanto, preferimos que quede el informe anual obligatorio.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: considero que no es procedente la forma en la que está redactada la modificación...

Sr. Genoud. – El artículo 14 dice: “Presentar una rendición anual de su gestión ante el Congreso de la Nación”. Y el inciso 2º dice “Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieren”.

Por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer informes semestrales –en Diputados decía “anuales”–, si cada vez que lo requiera el Congreso tienen que comparecer ante las comisiones pertinentes?

Nos pareció que el informe debe ser anual, quedando la UIF a disposición para cuando lo deseen las comisiones.

No es un tema central.

Sr. Pardo. – Señor presidente: es una cuestión central, y le voy a decir por qué.

Porque acá se está pidiendo que en el informe que se vaya a rendir ante el Congreso, pidan los informes particulares de cada trámite. Dice: “deberán contener como mínimo fecha de iniciación, denunciante, denunciado, objeto de la denuncia, medidas de prueba solicitadas...”.

Esto es violatorio del artículo 19 del mismo proyecto, que establece bajo sanción penal la obligación de sus miembros de no revelar ningún dato concerniente a la investigación y menos las personas que son investigadas y quiénes son los denunciantes.

Imaginémonos nosotros si salimos a decir...

Sr. Presidente. – Está bien, senador. La banca del bloque radical lo acepta.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Sergnese. – Señor presidente: voy a ser muy breve.

Si se acepta sacar todas esas condiciones en el informe al Congreso de la Nación, pido que de la misma forma, cuando se informe a los organismos internacionales este archivo, este tipo de información, estos instrumentos, se eliminen también todas las partes que se están eliminando en cuanto a informes del Congreso.

Esto es a los efectos de que el informe sea igual para todos.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 14 por 38 votos sobre 39.

–Se enuncia el artículo 15.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Señor presidente: acá simplemente se modifica el número para sesionar, es decir el quórum.

Como se amplió a once el número de miembros de la UIF, el quórum se hace con seis. Por lo tanto, la modificación es simplemente de adaptación a los artículos anteriores.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Aceptado, señor presidente.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15, con la modificación propuesta.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado, por treinta y siete votos sobre treinta y ocho presentes.

Corresponde considerar el artículo 16. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado, por treinta y siete votos sobre treinta y ocho presentes.

Corresponde considerar el artículo 17. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado, por treinta y siete votos sobre treinta y ocho presentes.

Corresponde considerar el artículo 18.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: aquí estamos ante el plazo de prescripción de las investigaciones que hace la UIF. En la sanción de la Cámara de Diputados se decía que duraría cinco años. El dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios lo redujo a uno. Nosotros insistimos en cinco años.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: nosotros proponíamos un año y, en el término del año, la destrucción de la investigación. Esto fue analizado con posterioridad. Vimos que era necesario que quedara como antecedente, por la posibilidad de la comisión por parte del mismo investigado de un nuevo hecho que merezca una investigación. Creo que el término de cinco años es muy extenso como para tener a una persona vinculada con una investigación. En todo caso, propondría o aceptaría un término intermedio de tres años.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: informo a los señores senadores que este fue uno de los temas que tomó estado público y que, por lo tanto, más se discutió. Los diputados con quienes nosotros conversamos no aceptaban la modificación. De tal modo que modificar aquí, en esta revisión, el término de cinco años y reducirlo nos expone a la crítica y, además, sería absolutamente ineficaz, ya que la Cámara de Diputados va a insistir en el término de cinco años.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: ante todo, quiero decir que es la última vez que voy a admitir analizar y debatir un proyecto de ley condicionado por los señores diputados. Es la última vez, en aras del interés superior de la República que

necesita este proyecto. Voy a aceptar los cinco años.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: la controversia aparente de establecer uno o cinco años para la prescripción de las actuaciones es ineficaz, porque al no estar el asunto en sede judicial, no hay cosa juzgada ni nada que se le parezca. Si surgen nuevos elementos, va a haber una nueva investigación, aunque haya algún plazo perentorio. De todos modos, creo que tratándose de hechos muchas veces vinculados con delitos cometidos en otros países, atar la cuestión a un plazo determinado —quizás excesivo— tal vez no sea conveniente. Porque, reitero, las operaciones más grandes de lavado surgen generalmente de delitos cometidos en otros países y luego se introduce el dinero aquí. Por eso, yo no haría ninguna referencia al plazo, en absoluto.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado, por treinta y seis votos afirmativos sobre treinta y siete presentes.

Corresponde considerar el artículo 19.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: queda como está en el dictamen de comisión, sólo que se reincorporan algunas personas obligadas a informar, como estaba previsto en la sanción de la Cámara de Diputados. Cabe mencionar el inciso 6º, referido al Registro Público de Comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas y los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor y Prendario. También se reincorpora a los escribanos públicos, a los productores y asesores de seguros, a los agentes e intermediarios, etcétera. Por su parte, se menciona también a los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales en ciencias económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio. Es decir, esto quedaría tal cual se aprobó en la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: las modificaciones manifestadas por el señor senador por Mendoza han sido consensuadas por la comisión, así que serán aceptadas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Del Piero. – Señor presidente: me voy a permitir insistir en una propuesta hecha el 17 de febrero al presidente de la comisión, que hasta el día de hoy sigue suscitando dudas en muchos señores senadores con los que he hablado, y que se trata de incorporar como una nueva categoría de sujetos obligados del deber de informar a los partidos políticos.

Lo hago porque estoy convencido, como lo plantea nuestra Constitución Nacional, de que los partidos políticos son definitivamente instituciones fundamentales del sistema democrático. Lo reza el principio del artículo 38, que además en su última parte plantea que los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Esta reforma fue incorporada en 1994, hace cinco años y medio.

Los políticos tenemos una deuda pendiente con la sociedad, que es cumplir con el artículo 38 de la Constitución. No lo estoy planteando en contra de los partidos sino a favor, porque estoy convencido de que nosotros tenemos que dar, todas las veces que sea posible, la prueba de que nuestro funcionamiento es transparente.

Seguramente se podrá preguntar por qué no dejamos este tema para la ley de financiamiento de partidos políticos. Incorporamos a los escribanos y no estamos modificando la ley 12.999. Los estamos incluyendo en la ley como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera determinado tipo de situaciones que pueden ser objeto de lavado de dinero.

Otra duda que puede aparecer: ¿cuál es la contrapartida? ¿Cómo podría lavarse a través de partidos políticos? Es muy sencillo. Podría lavarse a partir de una contraprestación futura de quien recibió apoyo con ese tipo de dinero. Quizá en alguna oportunidad simplemente no haciendo; por ejemplo, que no se cumpla esta misma ley.

Por lo tanto, creo que estamos frente a una posibilidad. Por eso me animo a solicitar a los señores senadores que me acompañen en esta propuesta en una posibilidad de comenzar a cumplir con el artículo 38 de la Constitución, y dar

una señal clara de que avanzamos hacia saldar esta deuda pendiente, mostrando el funcionamiento de nuestros partidos y de los fondos que manejamos para la campaña. Como ocurre con otras personas jurídicas o físicas u organismos enunciados en el artículo 19, los partidos políticos también van a dar su colaboración en este tema de luchar contra el lavado de dinero.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Señor presidente: el tema que se está abordando es un tema sensible. Es cierto que lo he pensado. Reconozco que en su momento el senador por la ciudad de Buenos Aires planteó esta inquietud a través de nuestros asesores. Es interesante que este tema se traiga a la discusión del cuerpo y que se adopte un criterio.

Desde el punto de vista absolutamente técnico, el lavado de dinero lo hace aquel que tiene dinero de origen ilícito y lo blanquea dentro de su patrimonio. Por eso se habla del escribano público, del contador, de los bancos, etcétera. Serían todos los instrumentos mediante los cuales los dineros mal habidos permanecen en el patrimonio blanqueados, o sea con una apariencia de licitud, pero dentro del patrimonio del blanqueador, que puede no ser partícipe del delito.

Por eso en ninguna de las legislaciones que hemos estado analizando figuran los partidos políticos, los gremios, las asociaciones sindicales, las asociaciones civiles, las fundaciones, las iglesias. ¿Por qué? Porque, precisamente, los dineros que caen allí dejan de pertenecer a quien puede llevar adelante la operación de blanqueamiento. Pero no es menos cierto que este tema tiene una gran actualidad y es un tema opinable. ¿Por qué? Porque en la Argentina no existe una ley de financiamiento de los partidos políticos. De tal modo que existiendo semejante vacío legislativo todo parece indicar que hubiese una predisposición de los partidos políticos a que no se controlen sus ingresos.

Por eso señalo todos los esfuerzos que hacen los legisladores de la Cámara alta y de la Cámara baja en este tema, pues deberíamos orientarlos hacia la sanción de la ley que manda nuestra Constitución, que es la que reglamenta las finanzas de los partidos políticos, cómo gastan y cómo obtienen sus recursos.

Por lo tanto, si nosotros nos atenemos a la pura ortodoxia, los dineros que van a todas las

entidades sin fines de lucro —partidos políticos, gremios, iglesias, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, etcétera— no son propiamente lavado de dinero, porque allí no se blanquea el dinero, porque deja de estar bajo la jurisdicción, órbita o patrimonio del blanqueador. Deja de ser en beneficio del blanqueador. Pero estamos frente a una situación muy especial, que los señores legisladores evaluarán, por cuanto uno también tiene que legislar con una gran responsabilidad pero sin correr el riesgo de que una decisión de este cuerpo sea mal interpretada por nuestra sociedad. Y la mala interpretación de la sociedad puede ser —y seguramente alguna persona lo transmita mal— que nosotros hemos querido excluir a los partidos políticos de un control, un control que no debe hacer la ley de lavado de dinero sino un control que debe hacer una ley que reglamente el financiamiento de los partidos políticos.

De modo que quedo expuesto o sometido al debate que a partir de ahora se realice y los argumentos que se vuelquen en esta oportunidad los evaluaré para el momento de emitir mi voto sobre esta proposición que creo es una buena propuesta para una discusión inteligente sobre el tema.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. — Me parece muy prolija la exposición del senador Genoud sobre el objeto o instrumento del blanqueo pero también debo sumar a este debate mi apoyo muy concreto a la iniciativa del senador Del Piero, porque creo que una ley no solamente debe responder a la técnica legislativa más pura o más ortodoxa sino a fuertes mensajes hacia la sociedad. Y lo digo siendo autor de los tantos proyectos sobre financiamiento de los partidos políticos que aguardan el tratamiento en el Congreso. Hasta tanto esto se produzca en el Congreso de la Nación, nosotros no podemos esta noche dejar exentos a los partidos políticos de la obligación de informar. Nos bastaría solamente dirigir la mirada hacia un país hermano de América latina y saber cuáles fueron las nefastas consecuencias que sufrió a raíz de la recaudación para algunas de sus campañas políticas, y las consecuencias que eso tuvo para la estabilidad política de ese país.

Por lo tanto, quiero apoyar concretamente la iniciativa del señor senador Del Piero.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Corach. — Ahora que el senador Genoud terminó, aprovecho para hacer una pregunta: ¿cómo podría un partido político lavar dinero?

Sr. Presidente. — ¿A quién le pregunta, señor senador?

Sr. Corach. — A cualquiera.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. — Tal vez...

Sr. Corach. — Creo que sería interesante dar un mensaje a la sociedad.

Nosotros también hemos sido autores y hemos enviado en nombre del Poder Ejecutivo nacional en su momento un proyecto interesante, a nuestro juicio, sobre financiación de la política. Pero me cuesta imaginar cómo un partido político puede lavar dinero.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: creo que no es tan difícil imaginarlo. Pensemos en el momento en que alguien aporta estos dineros a lo que es el sistema de recaudación que tiene un partido político, que hoy tiene muchos defectos en cuanto al contralor. Todos sabemos que las cuentas de recaudación de un partido político para una campaña electoral se rinden con posterioridad a dicha campaña frente al juzgado electoral. Ese sistema tiene muchas deficiencias...

Sr. Menem. — Pero eso no es blanqueo.

Sr. Molinari Romero. — No, claro, pero desde el momento en que ha ingresado a ese sistema de recaudación del partido político la presentación del balance de la campaña que efectúa el partido ante la Justicia electoral deja de tener ese vicio de origen que tenía.

Entonces, creo que en este caso nos encontramos frente a la misma situación con que se encontraría —y lo digo con todo respeto— el comerciante de numismática que figura aquí con tanta precisión, en este caso con una capacidad de recaudación mucho mayor, que es la que tiene un partido político. Cuando lo presentó ante el juzgado federal, cuando cumplió con los requisitos de la legislación vigente para los partidos políticos está produciendo el acto de blanqueo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: voy a aprovechar para contestar al senador Corach y hacer una precisión técnica sobre el mismo argumento del senador Genoud, que me pareció muy preciso.

El tema es si adoptamos el concepto de patrimonio jurídico o adoptamos un concepto de patrimonio real, tangible, el que entiende la gente.

Un lavador puede pasar el dinero por un partido y obtener beneficios posteriores que le significan un aprovechamiento patrimonial concreto.

Sr. Menem. — Pero eso no es lavado.

Sr. Del Piero. — Técnicamente es probable que no, pero económicamente sí.

Sr. Menem. — Ah, bueno...

Sr. Del Piero. — Lo que estamos planteando aquí, más allá de una estricta interpretación técnica, es poner una voluntad en protección de sí misma, que es la de los partidos políticos frente a la realidad del dinero sucio.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Señor presidente: me parece que es cierto que la política hoy goza en la Argentina de un desprestigio que todos conocemos. Pero me parece que no podemos seguir aumentándolo con frivolidades.

Lo cierto es que cualquier institución puede estar sometida a esta duda o sospecha. Creo que ya el senador Genoud lo señaló: un sindicato, el clero, fundaciones de distinta naturaleza, organizaciones no gubernamentales; en fin, podríamos hacer una larguísima enumeración.

Me parece que lo que tenemos que decidir en una ley de esta naturaleza es si el delito del lavado de dinero tiene como principales actores a los medios y recursos del sistema financiero o si se trata de un delito que pondremos en cabeza de las instituciones de la República, sin límite de ninguna naturaleza.

Sr. Del Piero. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Moreau. — No; permítame que termine, senador.

Creo que la afectación que tiene el sistema político no es razón suficiente como para que intentemos, a través de golpes mediáticos, ubicarnos para la opinión pública en el lugar más simpático, que es hablar siempre mal del sistema político. Entonces, voy a oponerme terminantemente, salvo que se proponga incluir como

objeto de esta ley a otras instituciones, que también podrían ser herramientas para el lavado de dinero.

Es cierto lo que dice el senador Molinari Romero. Tal vez no es suficiente la legislación que hay hoy en materia de control. Tampoco sé si es suficiente en materia de control del movimiento de los fondos de un sindicato. Tal vez no sé si es suficiente en materia de control del movimiento de los fondos de las fundaciones o de las organizaciones no gubernamentales. No veo por qué, salvo que uno pretenda sumarse a lo que hoy pareciera ser el modo más simpático de acumular en política, vamos a establecer exclusivamente una sospecha sobre los partidos políticos.

Entonces, o bien incluyamos al conjunto de instituciones que no tienen una regulación suficiente o no nos sumemos a esta campaña que pone en sospecha al conjunto del sistema político.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Del Piero.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: tengo que hacer una aclaración técnica muy importante, porque el senador Moreau no advirtió cuál era mi propuesta y necesito volver a precisarla.

Estoy proponiendo incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados a informar; en ningún momento hablé de que los partidos políticos sean objeto del delito de lavado de dinero. Lo tengo que dejar muy en claro, porque pertenezco a un partido político, con mucho orgullo, al que voy a defender y como no estoy subido a ningún carrito mediático —mal que le pese al señor senador— hago esta aclaración y digo nuevamente: es un acto de voluntad de los partidos políticos si tienen la posibilidad de colaborar —o no— en la lucha contra el flagelo del dinero sucio.

Sr. Presidente. — Gracias, senador.

Senador Corach...

Sr. Alasino. — Pueden hacer un cuarto intermedio para llegar a una propuesta común en la Alianza. (*Risas.*)

Sr. Moreau. — Será por la homogeneidad que ustedes tuvieron durante todo el día...

Sr. Presidente. — Senador Corach...

Sr. Corach. — Señor presidente: entiendo la inquietud del señor senador Del Piero pero, en coincidencia con el senador Moreau, creo que debemos ser muy cuidadosos en esta materia,

porque estamos hablando de un delito que es el de lavado de dinero; y los delitos, en Occidente, tienen la cualidad de ser tipificados. ¿Qué quiere decir? Que el delito se configura cuando se dan todas las características que el Código Penal o las leyes penales establecen para decir: este es un delito y este delito se llama lavado de dinero.

Por eso es posible que los partidos políticos sean instrumentos de canalización a lo mejor de dineros cuyo origen no ha sido clarificado. Pero de ninguna manera esto implica la tipificación del delito de lavado de dinero. Porque cuando un partido recibe dinero innominado, dinero cuya procedencia no puede ser justificada, de acuerdo con la legislación penal el partido político incurre en un delito, si es que tuviera que informar y si ese informe puede ser verificado.

Por ello, creo que debemos abocarnos inmediatamente, lo más rápido posible, a una ley que regule la financiación de los partidos políticos y de la política en general. Considero que esta es una obligación aún más candente para nosotros, los argentinos, porque hemos tenido la suerte de que hasta ahora no nos ha afectado ningún escándalo a los partidos políticos argentinos relacionado con el financiamiento de la política, cuando, en cambio, hemos visto y lo vemos a diario en los países más importantes de la tierra (Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, España, Brasil, etcétera) que los partidos políticos se ven sacudidos intermitentemente por este tipo de situaciones.

Por ello, creo que más que agregar en esta norma una referencia a los partidos políticos lo que deberíamos hacer es abocarnos lo más rápido posible al estudio y sanción de una ley de financiamiento de los partidos políticos, tema sobre el cual hay innumerables proyectos de todas las bancadas que —y lo puedo decir porque los hemos estudiado— casi tienen enormes coincidencias. Quiere decir que va a ser muy fácil sancionar una ley de este tipo.

Por eso le pediría al senador Del Piero que unamos nuestros esfuerzos para lograr, en el menor tiempo posible, la sanción de una ley de este tipo y preservémonos de generar una sospecha —por supuesto que este no es su objetivo— sobre instituciones fundamentales de la República como lo son los partidos políticos.

Sr. Presidente. — Senador Molinari Romero...

Sr. Molinari Romero. — Hoy, aparte de la afonía, tengo problemas con el micrófono.

Quiero hacer una simple aclaración amistosa, por el afecto que siento hacia el senador Moreau: yo no participo de golpes de efecto mediáticos en mi actividad parlamentaria; sólo trato de sumar. Para ello, durante todo el día he conversado con el señor senador Genoud. No venimos a traer este tema en este momento.

Sí considero muy atinada la observación del señor senador Moreau en cuanto a no dejar afuera a otras instituciones que pudieran ser objeto de maniobras de lavado de dinero.

Cuando nosotros puntualizamos el tema de los partidos políticos es porque sin duda el partido político tiene en sus manos una herramienta de la que tal vez otras instituciones no disponen en la misma medida: me refiero a la capacidad de incidir sobre las políticas públicas. Todos los que ocupamos una banca en este cuerpo representamos a partidos políticos. Por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer, ello incide sobre las políticas públicas.

Cada uno de nosotros ha participado o participa de campañas políticas y de recaudación de fondos. Entonces, no es un tema traído de los pelos: es un asunto que tiene que ver —como bien señaló el senador Corach, incluso en su carácter de ex ministro— con lo que ha sucedido en muchos países que han vivido las consecuencias de ser infiltrados en sus partidos políticos y en sus instituciones por el fenómeno del narcotráfico.

Eso es lo que queremos evitar esta noche.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: creo que estamos llevando adelante una discusión que quizá no tenga sustento porque posiblemente no haya motivo para esta controversia.

El señor senador Del Piero simplemente está proponiendo incluir los partidos políticos entre las instituciones obligadas a denunciar o informar ante la suposición de la existencia de operaciones de lavado. No veo por qué no es posible hacerlo. Realmente, creo que esta objeción no tiene el más mínimo sentido. La intención es absolutamente constructiva. No se trata de poner en capilla a la política ni nada que se le parezca.

Por lo expuesto, apoyo la moción de los senadores Del Piero y Molinari Romero. Creo que no tiene sentido oponerse a esta propuesta.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Villarroel.

Sr. Villarroel. – Señor presidente: creo que una reforma legal no mejora ni empeora la situación de los partidos políticos ante la opinión pública. En realidad, desde ese punto de vista es neutra.

Creer que la clase política es “la peor de todas” –como reza el título de alguna obra– no es más que reincidir en un viejísimo error que hace ya más de ochenta años supo denunciar Ortega y Gasset en su *España invertebrada*: parece que la sociedad política no fuera expresión de la sociedad global; parece que la sociedad política fuera la única corrupta y no ocurriera otro tanto con la gremial, la empresaria, la sindical, la profesional y tantas otras.

Pero también debo decir lo siguiente: considero que nos hubiéramos ahorrado esta discusión si la inquietud del señor senador Del Piero –que comparto, por lo que voy a decir dentro de un rato– se hubiera puesto de manifiesto de acuerdo con el Reglamento. Y el Reglamento –que es más sabio de lo que parece– establece que todas las propuestas deben formularse como artículos por escrito. Estamos discutiendo de alguna manera una entelequia. No sabemos realmente qué va a decir la norma. Hubiera sido muy útil analizar todas estas cuestiones con suficiente antelación.

Lo cierto es que ahora nos encontramos con una novedad que he visto reflejada en un editorial de un gran diario argentino, diario al que seguramente ha aludido mi colega por la provincia de Buenos Aires senador Moreau. Allí se expresa que los radicales y los peronistas nos hemos puesto de acuerdo para no poner bajo la lupa de la ética pública a los partidos políticos. Esto sencillamente no es cierto: no hubo tal puesta de acuerdo en nada. Hasta la fecha –hasta este preciso momento– no ha habido ningún proyecto presentado de la forma en que establece el Reglamento; vale decir, una formulación que indique qué queremos de la ley de partidos políticos.

Por último, debo manifestar que también creo que no hay una manera, como insinúa el señor senador por la Capital, en que un partido político incurra, por recibir fondos, en algunas de las

formas del lavado de dinero. La figura específica no permite que encaje en ella la conducta de aquel partido político que recibe dinero sucio.

Pero también es cierto –y es lo que me decide en favor de la idea de que se incluya en la norma a los partidos políticos, no expresada aún– que aportar dinero sucio a un partido político puede dar muchos réditos a habituales delincuentes, sobre todo económicos, además de ventajas y facilidades para lavar dinero dentro del país, que es justamente lo que se quiere evitar.

En consecuencia, desde el punto de vista de la ortodoxia penal, no me parece desacertado –como una suerte de punición de un acto preparatorio– establecer dentro de la ley la obligación para los partidos políticos de informar sobre aportes extraordinarios, anormales, sospechosos, sugestivos o como se los quiera llamar. Pero creo que debe incluirse dentro de una norma escrita, a fin de evitar seguir discutiendo sin rumbo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: comparto la inquietud del señor senador por la Capital; no obstante no veo muy clara su aplicación práctica. Porque lo que se pretende es hacer responsable a la persona jurídica partido político, pero en la práctica no es probablemente el partido político como persona jurídica el responsable sino determinados personajes que integran o no su dirigencia.

En consecuencia, es un poco difícil individualizar dentro de un partido político a aquellos que pueden operar de esta forma o recibir dinero.

Me imagino, por ejemplo, la aplicación del capítulo IV, relativo a las sanciones del régimen penal administrativo, cuando la Unidad de Información Financiera deba multar a un partido político porque alguno de sus dirigentes recibió dinero que puede tener un origen sospechoso y sobre lo que ese partido está obligado a informar.

Mi preocupación reside en que aparentemente se pretende sustituir una legislación necesaria, importante y urgente relativa al régimen de financiamiento de los partidos políticos, con un artículo o un inciso dentro de una ley de lavado de dinero. No sé cómo va a funcionar entonces este sistema, lo cual no significa dejar de compartir la inquietud manifestada por el señor senador por la Capital.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Señor presidente: me parece que este debate va echando luz sobre lo que efectivamente se pretendía plantear aquí en el sentido de que resulta muy difícil diferenciar la responsabilidad del partido político como institución de la responsabilidad que pueden tener los dirigentes políticos, los legisladores o los candidatos.

En general, las experiencias que existen en el mundo relativas a aporte de dinero proveniente del narcotráfico nos muestran que esos fondos no se dirigen hacia los partidos políticos sino, más bien, hacia los candidatos. Así, muchas veces se ha corrompido a legisladores y funcionarios.

Insisto entonces en que es muy difícil configurar en la ley la responsabilidad del partido político.

No es menos cierta la triste experiencia de aportes de dinero provenientes del narcotráfico a otras instituciones, aportes que muchas veces han tenido como receptores principales a clubes de fútbol. Tanto en Colombia como en Brasil esta ha sido una práctica más que habitual. Efectivamente, como me apuntan aquí, también hay sectas religiosas de distinto signo, como la famosa secta Moon.

Reitero el concepto: no veo por qué estas sectas o los propios clubes de fútbol —sobre todo ahora que se amenaza con la posibilidad de transformarlos en sociedades anónimas— no van a estar contemplados en la ley como instituciones que también tendrían la obligación de denunciar este tipo de cuestiones.

Por otra parte, la obligación de denunciar la tiene cualquier ciudadano y con más razón, por supuesto, quienes ejercemos la función pública y tenemos esa obligación como una carga.

Si cualquiera de nosotros está en conocimiento del aporte de dinero proveniente del narcotráfico, en nuestro carácter de legisladores o de funcionarios del Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de denunciarlo por estar frente a un delito.

Me parece que aquí hay que optar entre el camino de hacer una enumeración expresa de todas las instituciones que tienen la obligación de realizar las denuncias ante la sospecha de que hay dinero proveniente del narcotráfico, de no incluir exclusivamente a los partidos políti-

cos, cuyo encuadramiento es muy complejo, como bien lo señaló el señor senador Ulloa, o bien de marchar hacia una ley de financiamientos de los partidos políticos, donde podremos establecer determinadas aplicaciones o restricciones para ellos.

Tal como se vino a hacer el planteo aquí —lo digo con mucho afecto, respeto y cariño—, se trata nada más que de introducir una cuestión que en un momento en el que los partidos políticos están en una situación compleja puede resultar efectivo. Pero además de ser políticamente injusta, jurídicamente sería también una aberración, porque es una tautología en la medida en que todos tenemos la obligación de denunciar esto; a la vez, porque deja afuera a un conjunto de instituciones que, si bien es cierto no pueden tener tal vez la misma capacidad de influencia que un partido político en las decisiones de la política pública, sí tienen más capacidad que un partido político para receptar dinero sucio del narcotráfico.

En el régimen de partidos políticos hay limitaciones. En un partido hay fondos permanentes establecidos por ley, que no pueden crecer artificialmente, salvo que se esté ante una actitud colectiva. No imagino a todo un partido político vinculado con el narcotráfico y que se tolere el crecimiento de esos fondos, que están fijados por ley.

Por otra parte, están los aportes para las campañas. Ahí sí puede introducirse este fenómeno, que puede corromper individualmente a dirigentes políticos pero no a un partido en su conjunto, como institución.

Entonces, optemos por un camino o por el otro. Lo que no podemos hacer es dejar el tema planteado únicamente con relación a los partidos políticos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: con autorización del cuerpo, porque creo haber abusado del uso de la palabra, voy a ser muy preciso para subsanar una cuestión formal que muy bien me ha observado el señor senador por Catamarca.

Además de la autocrítica debo hacer un descargo. Realmente, estamos trabajando en comisión. Con esta disculpa paso a proponer formalmente que incorporemos como inciso 18: “los

partidos políticos reconocidos por la Justicia Electoral”.

Muy brevemente voy a hacer dos consideraciones. Primero, sigo insistiendo en que la defensa es de los partidos, y no de ningún dirigente ni de ningún legislador en particular.

Segundo, el mismo artículo 19, en el punto 1, habla de las entidades financieras sujetas al régimen de la ley; el punto segundo, se refiere a las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924; el punto 3 se refiere a las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar; el punto 6 se refiere a los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de automotores y los registros prendarios; el punto 7 se refiere a las personas jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte. En una palabra, con las mismas características que los partidos políticos tenemos una buena cantidad de personas jurídicas que tienen sistemas de representación y responsabilidad similar a la de los partidos políticos para poder dirimir cualquier tipo de responsabilidades.

Por ello, insisto que, en defensa de la institución y por los riesgos que esto supone, propongo como inciso 18 del artículo 19 que se incorporen “los partidos políticos reconocidos por la Justicia Electoral”. Y si esta modificación se vota favorablemente, en el artículo 20 voy a sugerir algunas modificaciones de forma que guardan coherencia con esta propuesta.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Alasino. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Genoud?

Sr. Genoud. – ¿Para decir lo mismo que pienso expresar yo?

Sr. Alasino. – No sé.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. – Señor presidente: realmente, en el fondo, se plantea esta discusión porque carecemos de una legislación en materia de partidos políticos que establezca con precisión este tipo de obligaciones.

Sr. Presidente. – No se alcanzan a escuchar sus manifestaciones, señor senador.

Sr. Alasino. – Es la languidez, propia de la hora, señor presidente.

Esta discusión se plantea porque no existe legislación de los partidos políticos que dilucidé esta cuestión o establezca los mecanismos con los que los partidos políticos deben manejarse y rendir cuenta de sus recursos.

Por ello, algunos señores senadores sugerían recién que hasta tanto se dicte la ley sobre los partidos políticos acompañemos la propuesta de señor senador Del Piero, con la idea de que en la actualidad esto debe figurar en esta norma pero no en una legislación ortodoxa. Entonces acompañemos hoy el deber de informar de los partidos políticos, con el compromiso de que una legislación en materia de partidos políticos regule este tema y promueva o defina la derogación de esta norma en la ley sobre lavado de dinero. Esta es la propuesta que hacemos, acompañando la sugerencia de un nuevo inciso formulada por el señor senador Del Piero.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Antes de que hiciera uso de la palabra el señor senador Alasino le pregunté si iba a decir lo mismo que yo, porque esto fue motivo de una consulta al presidente del bloque justicialista.

Yo ratifico todos los argumentos que di en un comienzo. Creo que la incorporación de los partidos políticos es heterodoxo, desde un punto de vista técnico. Si incorporamos a los partidos políticos, deberíamos incorporar a los gremios, los clubes de fútbol, las iglesias, las asociaciones civiles, las fundaciones, etcétera.

Porque si analizamos quiénes son los que están obligados a informar, nos daremos cuenta de que se trata de todos instrumentos de política financiera. ¿Por qué una entidad financiera? Porque ahí se puede poner un plazo fijo o una cuenta corriente, se puede utilizar a una entidad financiera para un fondo de inversión. ¿Por qué los agentes de Bolsa? Porque uno invierte en la Bolsa y obtiene rentabilidad. ¿Quiénes más? Los registros públicos de comercio y los registros del automotor, porque aquí se registran los automóviles, las lanchas, los motos, etcétera, que sirven para lavar dinero. Se convierte dinero de la droga o de un secuestro extorsivo en bienes. Por eso, se toma a los registros como informantes. ¿Por qué las empresas aseguradoras? Porque en una empresa aseguradora se asegura un

auto Mercedes Benz, un yate o cualquier objeto que puede ser motivo del blanqueo de ese dinero. Se pide que informen los transportes de caudales. ¿Por qué? Porque un blanqueador de dinero puede utilizar un transporte de caudales, simplemente, para ubicar dinero en otro sitio, en otra plaza, en otro mercado o en otro lugar y, entonces, debe informar que hay un movimiento sospechoso de dinero. ¿Por qué las empresas postales? Porque hacen giro de divisas. ¿Qué significa? Que pueden ser un instrumento para que el que blanquea dinero haga jugar a través del giro de divisas o el traslado a distinto tipo de moneda o billete para que queden dentro de la órbita de su acción o de su patrimonio. ¿Por qué los escribanos públicos? Porque pueden ser instrumento de transacciones comerciales, de prenda, de hipoteca o, simplemente, de compraventa. ¿Por qué los despachantes de aduana? Porque intervienen como un instrumento de operaciones de exportación o de importación.

Entonces, queda claro que lo que dije anteriormente también se lo plantearon los diputados. Por eso no incorporaron a los partidos políticos. Pero reitero lo que dije: la ausencia de una ley de financiamiento de los partidos políticos, que es culpa de todos los bloques y de todos los partidos, porque tenemos muchos proyectos: justicialistas, radicales, del Frepaso y partidos provinciales, pero no hemos sancionado ninguno. Desde 1995 tenemos el imperativo constitucional y la ley no se sanciona.

Entonces, coincidiendo con el presidente del bloque justicialista, y por lo que señalaba el señor senador Moreau en cuanto a que hoy somos objeto de críticas despiadadas e injustas y quizás utilizando el mismo fundamento de su preocupación, digo que un modo de cuidar a los partidos políticos de esos ataques es precisamente dictar una norma que, aunque sea de aplicación transitoria, nos ponga a cubierto de aquellos que quieren despedazar el prestigio de los partidos políticos.

Una sugerencia sería la de colocar como inciso 18 el siguiente texto: "Los partidos políticos, hasta tanto se dicte la ley de financiamiento de los partidos políticos". O sea que tiene una aplicación transitoria que es como una especie de incentivo o acicate para sancionar la ley que nos indica la Constitución Nacional sobre financiamiento de los partidos políticos, que debería contener o establecer un sistema de regulación y control propio.

Sr. Galván. — Señor presidente: solicito un breve cuarto intermedio en las bancas para ver cómo podemos conciliar esta preocupación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra al señor senador por Formosa; luego se pasará a un cuarto intermedio en las bancas.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: quiero que se tenga en cuenta lo que dice el artículo 41 de la ley de los partidos políticos, que está vigente.

Ese artículo dice: "Los partidos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, a) contribuciones o donaciones anónimas, salvo las colectas populares. Los donantes podrán imponer cargos de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación por tres años." Tal vez, esto ayude a dilucidar la cuestión.

Sr. Presidente. — Se pasará a un breve cuarto intermedio en las bancas.

Varios señores senadores. — No, no.

Sr. Moreau. — Perdón, señor presidente.

Hay una pequeña confusión. El presidente de nuestro bloque pidió el cuarto intermedio no para conciliar la posición que describió el señor presidente del bloque justicialista sino para ver si encontramos una fórmula que incluya, además de los partidos políticos, al resto de las instituciones.

Sr. Presidente. — Entonces, pasamos a cuarto intermedio...

Sr. Moreau. — Quiero aclarar algo más. No excluimos a los partidos políticos. En todo caso lo que queremos es incluir al conjunto de las instituciones.

Sr. Presidente. — Se pasa a un breve cuarto intermedio.

—Son las 23 y 3.

—A las 23 y 9:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Señor presidente: creo que la satisfacción a todas las expectativas podría ser de la siguiente manera: Inciso 18: "Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros y que generen la sospecha sobre el origen de los mismos."

La confusión parte porque se le da a esta norma el carácter de taxativa, cuando en realidad es meramente enunciativa. Y todas las personas están bajo el imperio y la obligación de informar ante el conocimiento del origen de fondos que no son lícitos.

Creo que con esta fórmula se daría satisfacción a las expectativas de los que quieren hacer comprensivos a los partidos políticos en este aspecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: nosotros tenemos una parte dogmática en la Constitución, que establece derechos y garantías de los habitantes, de los ciudadanos. Dentro de esa parte dogmática, las únicas personas jurídicas obligadas, según el texto constitucional, a dar a publicidad —no a informar, sino a dar a publicidad— el origen y destino de sus fondos son los partidos políticos; y no las otras entidades. No hay ninguna norma constitucional que obligue a las otras entidades que reciben fondos a dar esa noticia. Y esto es posterior a la ley de partidos políticos, citada con toda propiedad por el señor senador Maglietti.

Por otro lado, si incluimos el tema de la sospecha, estamos exigiendo la autoincriminación, porque sancionamos una figura donde se convierte en responsable del delito de lavado de dinero a quien interviene en su tráfico aun sospechando de que los fondos provienen en forma ilícita del dinero. Entonces, si ponemos esa frase, estamos diciendo que alguien tiene la obligación de autoincriminarse, lo cual implica violar el artículo 18 de la Constitución, según el cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por ello creo que, en definitiva, esta introducción de la fórmula por el señor senador Genoud de los partidos políticos, hasta tanto se sancione la ley prevista por la Constitución Nacional, es la más atinada. No es de una ortodoxia extraordinaria, pero satisface una expectativa que se ha creado. Y no significa que nosotros nos estemos adhiriendo a un fenómeno creado por los medios de opinión, que no va a cambiar ni para bien ni para mal.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Señor presidente: obviamente, no pretendo ingresar en una discusión de naturaleza constitucional o jurídica con el señor

senador por Catamarca. Todos conocemos los suficientes antecedentes y la trayectoria que tiene como para sostener con enjundia sus posiciones. Pero si bien es cierto lo que él señala con relación a la parte dogmática de la Constitución respecto de la obligación de los partidos políticos de dar a publicidad al origen de sus recursos, debo decir en primer lugar que aquí no estamos hablando de la publicidad, sino de la obligación de informar sobre los fondos que provienen o se sospecha que provienen del narcotráfico. Además, los partidos políticos no son la única institución que tiene esa obligación; sí en la categoría constitucional, pero desde el punto de vista legal no. Por ejemplo, las fundaciones tienen la obligación de informar sobre el origen de sus fondos a la Inspección General de Justicia y los sindicatos también tienen obligaciones en ese sentido. Entonces, me parece que sacando la última parte del párrafo que leyó el señor senador Maya, porque efectivamente implicaría autoincriminarse, la redacción que se logró en el acuerdo es correcta, porque efectivamente coloca al conjunto de las instituciones, también a las organizaciones no gubernamentales; y tienen la obligación de informar, la cual es originada en un nivel diferente —no en el constitucional pero sí en el legal— sobre el origen de sus fondos y recursos. Entonces, no cometeríamos la injusticia de dejar exclusivamente a los partidos políticos en esa categoría, lo que inevitablemente genera un manto de sospecha, y perfeccionaríamos la norma porque obligaríamos, aunque fuera una reiteración, a todas las instituciones. Es más, recién un senador decía durante el cuarto intermedio —con bastante razón— que la enumeración que se ha hecho es insuficiente y de carácter enunciativo. Por ejemplo, incluimos a los escribanos en la obligación de informar, pero —mencionaba el senador— por qué no a los arquitectos.

En Colombia hay una vasta experiencia en esta materia en lo que se refiere a las inversiones inmobiliarias que se hacen con dinero proveniente del narcotráfico. La construcción forma parte de una de las herramientas que más se utiliza para el lavado de dinero del narcotráfico, en el caso específico de la hotelería. ¿Por qué un arquitecto que se da cuenta del origen de esos fondos no tiene la obligación de denunciar? Por lo menos no está en esta enumeración que hemos hecho.

De todas maneras, ya estaríamos metiendo mano en el conjunto del artículo, cuando por ahí con una sola redacción de dos frases comprenderíamos a todos. Insisto en la propuesta que se acaba de realizar. Coincido con el senador Villarroel en que esta propuesta no debe contener el último párrafo que hacía referencia a la sospecha.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: el artículo que estamos discutiendo se refiere a que debe informarse cuando existe la sospecha de un dinero sucio, como dice el artículo 18: impedir la probable comisión del tipo penal del artículo 278.

Este artículo menciona a personas que de alguna forma intervienen en las operaciones, pero no son las receptoras del dinero, como los escribanos, los bancos, los agentes de bolsa. Pero aquí estamos incorporando una persona que teóricamente recibe el dinero sucio...

Sr. Del Piero. — Le solicito una interrupción, señor senador.

Sr. Presidente. — Señor senador Ulloa: el señor senador por la Capital le solicita una interrupción.

Sr. Ulloa. — Sí, cómo no.

Sr. Del Piero. — Quiero simplemente hacer notar que en el caso de las compañías de seguro se está comprando una póliza. Nada más.

Sr. Presidente. — Continúa en uso de la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: evidentemente un partido político que recibe un dinero sospechoso comete un delito y él mismo tiene que denunciarse. Esto es lo que me parece que no está muy claro en la redacción. En los demás casos se trata de intermediaciones en general, salvo lo que acaba de señalar el señor senador.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes como miembro informante de la comisión.

Sr. Pardo. — Señor presidente: el senador Maya va a dar lectura al texto acordado por las distintas bancadas y de esta manera damos por terminado este tema que ha sido suficientemente debatido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Señor presidente: se acepta la corrección propuesta por los senadores Moreau

y Villarroel. El texto es el siguiente: "Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros".

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 19 con las modificaciones propuestas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado por unanimidad.

—Se enuncia el artículo 20.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Se le agrega una propuesta que formuló el bloque justicialista, que dice: La Unidad de Información Financiera establecerá a través de pautas objetivas la modalidad de oportunidad de límite del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad.

Este es el agregado que se hace. Es muy sencillo; la autoridad de aplicación deberá determinar cuándo y cómo se debe informar. Por ejemplo, cuando intervienen extranjeros, cuando hay dinero en efectivo, cuando supere una determinada suma de dinero, cuando intervienen sociedades extranjeras, cuando se hace en moneda extranjera, etcétera. Porque con razón se señalaba que la obligación de informar no puede ser total y absolutamente indiscriminada porque eso sería inaplicable. Entonces, se deja a la Unidad de Información la facultad de hacer una reglamentación al respecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: el bloque justicialista propuso, efectivamente, la inclusión de pautas objetivas para originar la obligación de denunciar. Le quiero aclarar que el bloque justicialista elaboró las pautas objetivas sobre la base de la ley española.

Aceptamos la modificación propuesta.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Del Piero. — Solicito que se incorpore en el inciso a) del artículo 20 lo siguiente: reclamar de sus clientes, requirentes o aportantes, para que sea coincidente con el inciso 18 que le dimos al artículo anterior.

Sr. Genoud. – Aceptado.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con las modificaciones propuestas.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se deja constancia de que el artículo fue aprobado por unanimidad.

En consideración el artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se deja constancia de que el artículo fue aprobado por unanimidad.

En consideración el artículo 22.

Sr. Genoud. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. – Como se ha incorporado al dictamen de la Comisión de Asuntos Penales la forma culposa, aquí se incorpora también la sanción administrativa a título culposo. Que se lea por Secretaría el inciso 2.

Sr. Secretario (Pontaquarto). – Inciso 2º Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido con inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo por parte del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos en el sentido del artículo 278 ter del Código Penal, la multa a la persona jurídica será del veinte (20) por ciento al sesenta (60) por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – La comisión acepta por estar en concordancia con el artículo 3º, de establecimiento del delito culposo.

Sr. Presidente. – ¡Muy bien, Pardo!

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. – Quiero hacer simplemente una consulta.

En este artículo se habla de un ilícito administrativo y se lo califica como delito. Le pregunto a la comisión si está bien que se hable del delito o es más propio hablar de una contravención o de una falta. Realmente estamos hablando de una falta o de un ilícito administrativo. No sé si se ha apercibido de eso o realmente se le quiere llamar delito.

Sr. Genoud. – ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. – Sí, señor senador.

Sr. Genoud. – Lo que ocurre es que en el caso de la sanción administrativa presupone la existencia de un delito juzgado como tal en la justicia penal. Esta es la consecuencia administrativa de un proceso penal concluido. Lo que hacemos con el inciso 2 es que la figura culposa que se incorpora en la primera parte del artículo tiene su consecuencia administrativa, una vez que haya sanción penal, con la sanción prevista en esta norma. No creo que haya contradicción, y además el artículo 1º fue aprobado sin modificaciones en la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. – No intento modificarlo. Simplemente le quiero hacer ver que aquí se dice que el delito se considera configurado. No está hablando del delito anterior; está hablando del que se comete en sede administrativa, que no sería propiamente un delito sino una contravención. El delito es lo otro, el que se ha cometido anteriormente. Ésta es una falta administrativa a la cual se califica de delito.

Si esa ha sido la intención, está bien. Pero si no, habría una imprecisión en cuanto a la denominación de esta figura.

Sr. Presidente. – ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas por el senador Menem?

Sr. Pardo. – Sí, señor.

Sr. Presidente. – ¿Cómo queda redactado el artículo, senador Pardo? (*Risas.*) Está entretenido el senador Pardo.

Sr. Pardo. – Vamos a hablar en el 2003. (*Risas.*)

Sr. Presidente. – ¿Cómo es senador? ¿Cuál es la redacción definitiva?

Sr. Pardo. – La propuesta por el senador Genoud.

Sr. Genoud. – Para mayor abundamiento, el artículo 22, inciso 1, hace una remisión al artículo 278 bis, de tal modo que se refiere al delito doloso que prevé nuestra norma. Así, hay una sanción administrativa una vez acreditado el delito. El inciso 2º es la forma culposa..

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por 38 sobre 39 presentes.

En consideración el artículo 23.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por 38 votos sobre 39 presentes.

En consideración el artículo 24.

Sr. Pardo. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: vamos a introducir una modificación al artículo 24. La propuesta obra en Secretaría, pero voy a leerla para su mejor comprensión: Para el funcionamiento de la UIF deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente. En todos los casos...

Sr. Genoud. – ¿Qué artículo es?

Sr. Presidente. – El artículo 24.

–Risas y murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Senador Pardo: concentración.

Sr. Pardo. – ¿Sabe lo que pasa, señor presidente? Hay que manejar todo el articulado con las modificaciones correspondientes.

Sr. Presidente. – Es un esfuerzo tremendo...

Sr. Pardo. – No le quepa la menor duda, señor presidente.

Sr. Presidente. – Se lo reconocemos desde la Presidencia del cuerpo.

Sr. Pardo. – Y esta iniciativa fue el producto del estudio de más de dos meses en todos los bloques, señor presidente.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, vamos a votar el artículo 24.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por 38 votos sobre 39 presentes.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por 38 votos sobre 39 presentes.

En consideración el artículo 26.

Sr. Verna. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por La Pampa.

Sr. Verna. – Hasta ahora han hablado los abogados y espero que tengan paciencia para los que no lo somos.

Sr. Presidente. – Totalmente.

Sr. Verna. – Señor presidente: el proyecto venido de Diputados, el dictamen de la comisión y el proyecto del senador Genoud son iguales.

Pero tengo una malformación: durante cinco años he defendido la postura del Ministerio de Economía en este recinto. Aunque el ministro de Economía no es de mi partido, voy a insistir en la defensa de este criterio.

Consideramos que crear una cuenta especial no es conveniente para el Estado. Creemos en la cuenta única; por eso voy a proponer la siguiente redacción: Para el funcionamiento de la unidad de la información financiera, deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente. En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producto de las multas que en sus consecuencias se impongan, serán destinados al Tesoro nacional.

Me opongo a la creación de una cuenta especial.

Sr. Menem. – Está bien.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Corrientes.

Sr. Pardo. – Señor presidente: en principio aceptamos la inclusión de que será destinada a Rentas Generales de la Nación. El Poder Ejecutivo instituirá por medio de una ley reglamentaria la forma en que se administrarán y distribuirán los bienes obtenidos del ilícito.

Sr. Presidente. – Senador Genoud...

Sr. Genoud. – No hay mayor inconveniente para aceptar...

Sr. Presidente. – Entonces votemos.

Sr. Genoud. – ...la modificación propuesta por el senador Verna, pero que quede claro que el fondo al que hace referencia el proyecto, como lo queríamos aprobar, lo administra el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 26.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Aprobado por 37 votos sobre 38 presentes.

En consideración el artículo 27.

Si no se hace uso de la palabra, va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Aprobado por 38 votos sobre 39 presentes.

En consideración el artículo 28...

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Pido la eliminación de ese artículo, porque suponía un gravísimo error, seguramente involuntario, de la Cámara de Diputados, por el cual remitía la aplicación de esta norma a una ley que, por otro artículo, queda derogada.

Sr. Presidente. — Senador Pardo: ¿se elimina este artículo?

Sr. Pardo. — Efectivamente, las expresiones del senador Genoud son ajustadas; fue una equi-

vocación —una de las tantas— de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Se va a votar la eliminación del artículo 28.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la eliminación del artículo 28.

—El artículo 29 es de forma.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de Diputados.¹

Sr. Menem. — ¿Puedo proponer un artículo nuevo?

Sr. Presidente. — Queda levantada la sesión.

—Son las 23 y 32.

MARIO A. BALLESTER.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.